



IDICSO

Instituto de Investigación en Ciencias Sociales
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad del Salvador

SERIE DOCUMENTOS DE TRABAJO

© IDICSO.

Documento de Trabajo N° 8

SEPTIEMBRE 2003

Fases de la Acción Colectiva

ARIEL COLOMBO

<http://www.salvador.edu.ar/csoc/idicso>

Hipólito Yrigoyen 2441 – C1089AAU Ciudad de Buenos Aires – República Argentina

TABLA DE CONTENIDOS

Resumen.....	1
Introducción	2
1. Fase de la unanimidad espontánea	7
1.1. El costo de incongruencia	7
1.2. La "fórmula" de la acción en sus inicios	9
1.3. Idea de la unanimidad	12
1.4. Ejemplos de la "ecuación" en la primera fase	14
1.5. La continuidad de la acción	17
1.6. El colapso y sus manifestaciones	20
1.7. Casos ejemplares.....	25
2. Fase de la representación mayoritaria	35
2.1. La admisión del pluralismo	35
2.2. Las crisis en la segunda fase	38
2.3. Ejemplos latinoamericanos	41
3. Fase de la deliberación directa.....	49
3.1. La difícil conciliación	49
3.2. La guerra del agua.....	51
3.3. La autonomía zapatista.....	53
3.4. Los Sin Tierra	53
3.5. La Luz y Fuerza de Agustín Tosco	54
3.6. El cutralcazo	58
3.7. Los verdes alemanes	60
3.8. El diseño del "Presupuesto Participativo"	62
Referencias bibliográficas	64

Notas sobre el autor

ARIEL COLOMBO

- ☐ Lic. en Ciencias Políticas, Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).
- ☐ Dr. en Ciencias Políticas, UBA.
- ☐ Docente, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
- ☐ Docente, Doctorado de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad del Salvador (USAL).
- ☐ Investigador del IDICSO, USAL.
- ☐ Miembro del Comité Asesor del IDICSO, USAL.

Dirigir comentarios a la siguiente casilla de correo electrónico:

Departamento de Comunicación del IDICSO: idicso@yahoo.com.ar

Ariel Colombo: colombo@intercasares.com.ar

Resumen

Esta indagación en torno a las secuencias de la acción colectiva pertenece al libro “Pragmática del tiempo, transición socialista y fases de la acción colectiva”, editado recientemente, y se inscribe en un trabajo más pretencioso iniciado hace algunos años dirigido a replantear la cuestión del tiempo a partir de una crítica interna a la pragmática formal de Habermas. Tal revisión concluye en una reformulación más consistente y abiertamente procedimentalista de su modelo deliberativo de democracia. Por eso, se entrelaza estrechamente con “Democracia directa y desobediencia civil” (1998), “Tiempo, justicia y validez” (1999), “Democracias sin fundamento” (2000), “Los plazos en el debate público” (2000), “Señoreaje político y desobediencia civil” (2002).

Las tres etapas sucesivas de la acción colectiva que describe corresponden a otras tantas reglas para la toma de decisiones, las mismas a las que acuden los participantes para calcular la incidencia de los diversos elementos que, en cada etapa, intervienen en la decisión de actuar. De ellas, al ser empleadas, emergen costos internos (de la toma de decisiones) y externos (derivados de quedar fuera de las decisiones) que resultan definitorios, tanto para la razonabilidad del agente como para el potencial democrático de la acción, medido en términos de su continuidad. Este último aspecto aparta a este trabajo, pese a parentescos terminológicos inevitables, de las teorías de la utilidad de Olson y de la identidad de Pizzorno. Precisamente, se ha intentado que en ningún momento este esquema para el análisis empírico pueda quedar disociado del análisis normativo.

Introducción

La siguiente modelización de la acción colectiva en tres etapas está delimitada empíricamente por experiencias que reúnen por lo menos las dos primeras de estas cuatro características: disruptivas, autónomas, pacíficas y recursivas. “Disruptivas” significa que la acción pone en cuestión directa o indirectamente las reglas del sistema dentro y contra el cual tiene lugar, desde una perspectiva universalista, es decir, desde quienes son parte formalmente discriminada por un todo deforme, resistiéndose a ser integrada subordinadamente. “Autónomas” alude a que la acción no responde a ninguna iniciativa que no sea la de sus protagonistas, lo que implica que para estos tienen preeminencia los procedimientos sobre los liderazgos o jerarquías o burocracias que encarnen determinados contenidos. “Pacíficas” denota un comportamiento pluralista porque al interior de la acción las partes deliberan en busca de un acuerdo y aceptan el derecho de la contraparte a la representación. Y “recursivas” significa que la acción aplica sobre sí misma las reglas que exige al sistema, constituyéndose en “práctica prefigurativa” de las que quisiera poner en vigencia.

Las limitaciones disruptivas de las sufragistas estadounidenses derivaban de un universalismo incompleto; si bien se hallaban comprometidas en la lucha contra la esclavitud se opusieron al sufragio de los varones negros por considerarlo un obstáculo más a la inclusión política de las mujeres; tanto como muchos socialistas británicos se opusieron a conceder la igualdad política de las mujeres por considerarla una desviación burguesa de sus acuciantes intereses de clase. La heteronomía del movimiento obrero en los procesos populistas latinoamericanos se produjo cuando aceptó una representación externa a partir de la cual su fuerza dependería más del reconocimiento que sus dirigencias obtuvieran del Estado u otros interlocutores que de su propia dinámica. Las distorsiones y desviaciones hacia la violencia en el pacifismo negro y del antirracismo sudafricano se presentaron cuando sus facciones antepusieron objetivos particulares a la tarea de ponerse de acuerdo. La restringida recursividad en la “cogestión” de la empresa argentina de energía eléctrica (Segba) durante los 70 se debió a que fue una experiencia instrumentada desde arriba por un sindicato burocratizado, que la propagandizaba como auténtico mecanismo de autogestión pero que en realidad estaba dispuesto a desarticularlo si perdía el control sobre los trabajadores.

El modelo no aspira a exhaustividad alguna ni tampoco a dar cuenta de la historia de las rebeliones. Tampoco se extiende, como se dijo, a formas no disruptivas o no autónomas. Se trata, más bien, de un conjunto de requisitos lógicos hipotéticos para pensar teóricamente algunas formas de acción colectiva, las cuales o colapsan o pasan por tres fases sucesivas que están gobernadas respectivamente por la unanimidad espontánea, la representación mayoritaria y la deliberación directa. La fase inicial es más movilizatoria (disruptiva y autónoma) que pluralista, tienen mayor gravitación los principios universalistas y libertarios. La segunda es más pluralista que movilizante, tienen más injerencia los principios procedimentales. Y la tercera es tan movilizatoria como pluralista en virtud del principio de autoaplicación. En base a estas definiciones es fácil deducir que en esta última fase la acción alcanza el mayor potencial democrático, el que puede definirse como la inversa de los costos decisorios totales. Que consisten en la suma de costos internos a la

toma de decisiones (los que supone participar, reunirse, discutir, informarse, acordar, votar) y externos a las mismas (los que derivan de participar de la acción pero no de las decisiones). Cuando estos costos exceden las magnitudes alcanzadas por otros componentes del cálculo inherentes a iniciar o continuar la acción, el paso de una regla a otra es inevitable para evitar su colapso.

Granovetter ha presentado un modelo de acción colectiva para situaciones en las que los actores tienen dos alternativas (sumarse o no a la acción) y en la que los costos y beneficios de cada una dependen de cuantos actores elijan cada alternativa. El concepto clave es el de umbral: el número de personas que han de tomar una decisión, un punto a partir del cual los beneficios considerados por el individuo para unirse a otros superan los costos. El umbral de una persona para unirse a una revuelta se define, en consecuencia, como el porcentaje del grupo que tendría que sumarse a la acción antes de hacer uno lo mismo. Obviamente, los “conocidos agitadores” tienen un umbral bajo, y los “respetables ciudadanos” uno alto. El modelo predice a partir de la distribución inicial de umbrales el número o porcentaje final de los que optan por cada una de las dos decisiones. Sin embargo, no revela nada del potencial democrático que la acción alcanza con el paso de un umbral a otro. El propio autor aclara que: “El concepto de umbral, entonces, es puramente conductual, sin que connote nada acerca de lo que el actor piensa que es correcto hacer” (Granovetter, 1990 :157).

El pasaje de una fase a otra es un proceso típico de creación de reglas, un problema de inteligencia adaptativa y de aprendizaje relativo a la asignación y uso de todo tipo de recursos. “Los actores sociales y políticos tienen que distribuir sus escasos recursos entre dos tipos de actividades fundamentales: la exploración de sus nuevas configuraciones institucionales o, alternativamente, la explotación y el perfeccionamiento de las ya existentes. Exploración y explotación son dos formas de aprendizaje y ambas son necesarias para construir instituciones. Pero mantener un equilibrio entre estas dos actividades no es fácil, no sólo porque los trade offs no pueden calcularse con precisión durante cada fase del proceso, sino también porque los procesos endógenos del aprendizaje pueden llevar a los actores a alternar ciclos de excesiva exploración con ciclos e excesiva explotación, con consecuencias contraproducentes y corriendo el peligro de destruir el equilibrio entre ambas actividades. En otros términos, los procesos de construcción de instituciones pueden llegar a ser autodestructivos” (Lanzara, 1999:925). No obstante, el tiempo a través del cual tiene efecto dicho aprendizaje ya acontece con reglas y resulta, precisamente, de la coherencia con ellas..

La idea de regla decisoria posee cierta analogía con el concepto de enmarcamiento, introducido por el antropólogo Bateson cuando demostró que para entender un acto comunicativo se precisa la referencia a un metamensaje sobre lo que está sucediendo, un marco de interpretación que se aplica a ese acto y que envía señales que indican la intención de actuar en determinada dirección y delimitando el tipo de relación posible. Posteriormente, las contribuciones de Goffman sobre las formas que conducen al éxito de la comunicación y que implican un compromiso interpersonal que da sentido a una relación más allá de su objeto, fue el punto de partida para la aplicación de la teoría de los marcos como estructura de expectativas a los movimientos sociales. “Goffman toma el término ‘marco’ para denotar los ‘esquemas de interpretación’ que capacitan a los

individuos ‘para localizar, percibir, identificar y nombrar’ los hechos de su propio mundo y del mundo en general. Al hacer a los hechos significativos, los marcos cumplen la función de organizar la experiencia y guiar la acción individual y colectiva... Esta actividad de significación se conceptualiza como framing, enmarcamiento o creación de los marcos de la acción colectiva. Es decir, los acontecimientos y situaciones sociales relevantes con al finalidad de movilizar a sus militantes, ganar el apoyo del público y desmovilizar a sus antagonistas. Los procesos de enmarcamiento son un recurso más de los que disponen los movimientos para llevar a cabo sus objetivos. La tesis subyacente es que la movilización depende no sólo de la existencia de desigualdades y de cambios objetivos estructurales, de la disponibilidad y despliegue de recursos tangibles, de las cualidades organizativas de los líderes, de las oportunidades políticas y de una suerte de cálculo costo-beneficio de los participantes, sino también de la forma en que se enmarcan esas variables... los marcos de la acción colectiva cumplen también tres tareas: el diagnóstico que implica la identificación de un aspecto de la vida social como problemático y que necesita ser cambiado, y la atribución de culpa o causalidad; pronóstico o propuesta de solución que especifica lo que se ha de hacer, identificando estrategias, tácticas y objetivos; llamada a las armas o desarrollo de los estímulos para la acción que consisten en la construcción de un vocabulario de motivos y en la construcción de las identidades de los protagonistas... Los autores defienden la tesis de que la movilización de los participantes depende del grado en que estas tres tareas son atendidas: a más potencia, desarrollo e interconexión de las tres tareas, más exitoso será el trabajo de movilización, *ceteris paribus*... La relevancia de los marcos para el mundo de la vida de los participantes potenciales... depende de la credibilidad empírica de los marcos (su consonancia con los hechos del mundo), su resonancia experiencial (la consonancia con la experiencia personal de las personas a las que se dirige y que sugiera respuestas o soluciones a los acontecimientos o situaciones que les afectan) y su fidelidad narrativa... ”(Rivas, 1998:193-5).

En nuestro caso, el potencial democrático surge del grado de ajuste que los participantes demuestren en la acción con principios normativos, es decir, según sea la preeminencia que otorguen a reglas ideales de decisión. Por sí sola la noción de “marco” no aporta un criterio para identificar o comparar la democraticidad de diferentes acciones. Pero la proximidad entre “reglas” y “marcos” se mantiene, sin embargo, porque aquí también las reglas decisorias son reglas operativas en relación a tres tareas cognitivas básicas (causal, normativa y estratégica), cuyos contenidos sólo se asimilan a la idea de “ideología” si aquella primacía se invierte y las reglas son instrumentadas en función de contenidos o resultados *apriori*. Gerhards (1995) también afirma que la calidad de los marcos es uno de los factores determinantes del impacto movilizador de la acción colectiva, aunque ello es irrelevante desconectado de la democraticidad de las reglas empleadas para establecer dicho enmarcamiento, no es sino de la congruencia práctica que los actores exhiban al diseñarlas o al emplearlas por referencia a reglas deliberativas ideales que puede extraerse una indicación del potencial de la que es portadora la acción.

Gerhards distingue entre dimensiones y estrategias de enmarcamiento. Las primeras son cinco: encontrar una cuestión de debate público e interpretarla como un problema social; localizar las causas y los agentes causales del problema; interpretar los objetivos y la probabilidad del éxito de los esfuerzos; encontrar y caracterizar al destinatario de la

protesta; justificarse como actores legítimos de la protesta. Las segundas son las técnicas utilizadas por los movimientos para interpretar estas dimensiones temáticas, y cuyo valor radica en que de ellas depende el éxito de los movimientos en la movilización de las personas. Estas dimensiones y estrategias configuran un marco que será ideal cuando las integra a todas, alcanzando entonces el enmarcamiento la máxima capacidad movilizatoria. Esta capacidad varía en los marcos reales según se acerquen más o menos al tipo ideal. Examinando el grado en que el marco empírico cumple con los criterios del marco ideal para una movilización con éxito, formula hipótesis como la siguiente: a más problemas y afectados cubiertos por el marco, más capacidad movilizatoria, siempre que la conexión entre los problemas sea plausible y no se trate de una simple sobreextensión del marco. En nuestro esquema, la fuerza democratizadora (que no equivale a “capacidad movilizatoria”) depende no de que se incluyan operaciones o áreas de interpretación, algo que se supone, sino de que el agente las subordine a reglas formales. Los costos decisionales descienden a medida que la toma de decisiones (proceso que integra operaciones como las mencionadas por Gerhards) se realiza de acuerdo al grado de ajuste con reglas empleadas según el principio del discurso, que deben ser rediseñadas a lo largo de la dinámica del número de participantes y de decisores, relación entre los cuales define, precisamente, la magnitud de esos costos decisionales.

En la fase inicial de la acción la regla óptima es la unanimidad espontánea. Son ejemplos los ciclos de “insurrecciones proletarias recurrentes” detectados por Screpanti (1985:63-104), en las sucesivas oleadas de 1808-1820, 1866-1877, 1911-1922, y 1967-1973. “Entre los rasgos comunes a estas cuatro grandes olas de insurrección, tan diferentes y distantes en el tiempo, figuran los siguientes: (1) Fueron proletarias, la clase obrera desempeñó en ellas un papel dominante, tanto en términos de participación cuantitativa como en términos de hegemonía política del movimiento. (2) Fueron generales, estallaron simultáneamente en todas las partes del sistema capitalista mundial. (3) Fueron autónomas, fueron movimientos espontáneos de la clase obrera, que rompió con su habitual dependencia y subordinación a la dinámica económica, política y social del sistema capitalista. (4) Fueron radicales, aspiraron a atacar de raíz al sistema capitalista, lo que puede apreciarse tanto en los objetivos de la lucha, que habitualmente fueron irreconciliables con el funcionamiento normal del sistema, y en los métodos, que a menudo quebrantaron las reglas aceptadas de las relaciones laborales. Este rasgo tal vez no fuera aplicable a todas las insurrecciones, pero sin duda lo fue, en su forma más pura, a las que se produjeron durante los períodos críticos en los epicentros geográficos (Nottinghamshire en 1811-1812, París en 1870-1871, Rusia en 1917-1918, Italia del norte en 1968-1969). Las explosiones de los movimientos de clase de esta naturaleza tuvieron, a causa de estos rasgos, un efecto aterrador duradero sobre el “estado de ánimo” de las clases dominantes, quebrantando su confianza y desalentando la actividad inversora, al tiempo que fomentaba opciones reaccionarias y restrictivas de política económica. Por supuesto que en la historia del capitalismo se han producido muchos estallidos de malestar social además de los cuatro antes mencionados... Pero estos carecieron de alguno de los cuatro rasgos que caracterizaron a las principales insurrecciones proletarias” (Screpanti, 1985:70-1). En efecto, fueron, disruptivas (antiautoritarias, anticapitalistas y antidiscriminatorias) y autónomas (democratistas y antiburocráticas).

La fase intermedia, a la que se llega reemplazando la unanimidad por la regla de la representación se ha puesto en evidencia en procesos tales como la formación de sindicatos y partidos de masas durante la segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX, y en el procesamiento de los conflictos por medio del sistema partidista y del Estado intervencionista de bienestar. Incluye, en general, a todos viejos y nuevos movimientos sociales al convertirse en organizaciones, menos disruptivos y autónomos que los de la fase anterior pero más pacíficos en el sentido de su predisposición pluralista a acordar soluciones al interior de la acción y con otros actores del sistema. Deben incluirse aquí las oleadas de liberalizaciones políticas o transiciones a la democracia de 1848-52, 1914-22, 1945-65, 1974-89.

Y la fase final, a la que la acción llega si consigue sustituir a la representación mayoritaria por la deliberación directa, remite a las experiencias consejistas, asamblearias y de democracia de base, a las estrategias ghandianas de resistencia y desobediencia civil, desde que el pacifismo adquiere masividad con la Campaña de la Sal hasta las actuales campañas antiglobales, a las cooperativas de trabajo y a experimentos de “democracia participativa” en diversos ámbitos y planos de actividad social.

1. Fase de la unanimidad espontánea

1.1. El costo de incongruencia

Con estas pocas referencias demarcatorias in mente es posible imaginar la lógica del modelo. Supongamos que los miembros de A, un grupo o categoría de ciudadanos o de trabajadores, sufren un desajuste o contradicción entre sus preferencias públicas de primer orden y de segundo orden. No querrían tener las opiniones que tienen, preferirían no seguir sosteniendo los puntos de vista que hasta el presente han debido expresar públicamente, inducidos o forzados a ello por el sistema, y que ahora observan críticamente a la luz de preferencias de segundo orden, que son las que quisieran tener si fuesen autónomos para elegir y realizar las primeras. Dicha discrepancia representa un costo de incongruencia (cdi) o de heteronomía que predispone individualmente a los integrantes de A a luchar contra el sistema. Este costo se aproxima bastante a la idea de Kuran (1997:137-197), al explicar por qué el descontento de masas puede desembocar en una revuelta popular en contra del statu quo. En privado una persona puede sentirse dividida entre el gobierno y la oposición, pero desde el momento en que sus preferencias privadas difieren de sus preferencias públicas incurre en una falsificación que tiene un costo interno, pues la supresión de los propios deseos implica un sacrificio de la integridad personal. “De este modo, la falsificación de preferencias genera un descontento perdurable que, a medida que se incrementa, hace crecer la mentira”. Obviamente, la recompensa interna que da su apoyo a la oposición varía positivamente en función de su preferencia privada (cuanto mayor sea este último factor más difícil será suprimir sus sentimientos antigobierno) y del tamaño de la oposición (que, cuanto mayor, menor es la posibilidad de que ser sancionado o perseguido). A medida que crece la oposición, manteniéndose constante sus preferencias privadas, llega un momento en que el costo de su implicación pública cae por debajo del costo de la falsificación de sus preferencias. Este punto de inflexión, dice, puede dominarse umbral revolucionario. Si el individuo desarrolla una mayor simpatía por la oposición, será necesaria una menor oposición pública para animarle a tomar partido contra el gobierno. Lo mismo sucederá si el gobierno es menos competente o si la oposición resulta más eficiente para recompensar a los aliados o para penalizar a los rivales. Dicho umbral disminuirá si el costo de falsificación se le torna insoportable, lo que explicaría por qué puede alzar su voz en demanda de un cambio incluso cuando el precio de la disidencia es muy alto y las oportunidades de éxito de una revuelta son limitadas. “Esta teoría describe al individuo como impotente y potencialmente muy poderoso. El individuo es impotente porque una revolución requiere la movilización de un gran número de personas, pero también es potencialmente muy poderoso porque en las circunstancias adecuadas puede poner en marcha una reacción en cadena que genere esa movilización imprescindible. No es que el individuo conozca con precisión en qué momento su elección personal puede tener una importancia decisiva. Aunque tenga la sensación de que sus posibilidades de lograr que se desencadene ese proceso son en un momento determinado inusualmente altas, nunca puede estar seguro de las consecuencias que pueda tener su paso a la oposición. Lo que es indudable es que el régimen en cuestión permanecerá inamovible mientras no haya nadie que tome la iniciativa de pasar a la oposición”.

Buscando una explicación para el derrumbe del comunismo en Europa del Este, Kuran ha advertido que el ciudadano promedio admiraba en privado a los disidentes y los difamaba en público. Se sentía desafiado o cuestionado por las muestras de coherencia de aquellos. Y estaban desinformados acerca de hasta qué punto estaba extendida la alineación respecto del régimen. Esta falsificación de preferencias era fuente de estabilidad del sistema, que a partir de cierto momento cambió rápidamente. “En los días siguientes a la caída del régimen comunista de Checoslovaquia, se podía leer una pancarta en Praga que decía: Polonia: 10 años, Hungría: 10 meses, Alemania del este: 10 semanas, Checoslovaquia: 10 días. La aceleración que ese mensaje transmite refleja el hecho de cada desafío que tenía éxito, contribuía a disminuir el riesgo percibido por la disidencia en otros países... Si se hubiera colocada esa pancarta unas semanas más tarde, se podría haber añadido: “Rumania: 10 horas”.

Su enfoque coincide con la idea de incongruencia en el peso que ha de conferirse a la necesidad del individuo de ser autónomo. Ambos dan cuenta del hecho de que hay quiénes se arriesguen por la revolución aunque la mayoría de sus potenciales beneficiarios se mantenga al margen. El defecto en las nociones de Kuran es que no ofrecen ningún indicio normativo acerca de si las preferencias pueden cambiar en determinada dirección (el costo de falsificación es tratado como puramente psicológico). Kuran cree que la revolución de 1989 fue empujada tanto por el desenmascaramiento de preferencias de los disconformes pasivos como de los viejos simpatizantes del régimen que ahora falsificaban las suyas. Es decir, al mismo tiempo que todos los no comunistas se quitaban las caretas con tanto alivio como alegría, muchos comunistas genuinos se ponían otras; máscaras que los presentaban como desvalidos funcionarios de un sistema represivo. Respecto a lo primero no podemos saber cuanto había de oportunismo y cuanto de congruencia y en cuanto a lo segundo es difícil que el oportunismo de los anticomunistas de última hora pueda agregarle algo al contenido o dinámica de una revolución.

De manera que es verdad que a raíz de la falsificación de preferencias un crecimiento masivo de la oposición puede tomar a todos por sorpresa, pero dicha falsificación no oculta ninguna tendencia revolucionaria. Sólo en conexión o asociada al tipo de reglas propulsada colectivamente adquiere, en mayor o menor medida, un carácter disruptivo autónomo. En el derrumbe comunista de Europa del Este confluyeron el ascenso en el costo de incongruencia de los ciudadanos, reflejo de la disidencia activa admitida a partir de la “transparencia”, y el descenso en el costo de evitar males públicos futuros cuando las reformas impulsadas por Gorbachov desde 1985 y su política de distensión con Occidente dispersó los riesgos de desafiar al statu quo. La ambigüedad de la Unión Soviética respecto a lo que haría en el caso de que se intentara derrocar alguna de las dictaduras en los seis países aliados del Pacto de Varsovia, incrementaba tanto el costo de mantener una disconformidad autorreprimida gratuitamente como el de seguir soportando la opresión respecto del riesgo de ser eficazmente censurado o perseguido. Y por sí mismos estos costos no constituyen el punto de partida de ninguna revolución.

1.2. La “fórmula” de la acción en sus inicios

Supongamos, además, que A en la trayectoria que sigue su sociedad prevé en el momento actual t que en algún momento posterior, digamos t_9 , será afectado por un incremento en los males públicos que ya experimenta, y que alcanzarán el nivel z si se mantiene el statu quo, superior al nivel s que ya soporta en t . En otras palabras, un grupo de afectados por las asimetrías propias del sistema descubre que el costo de consumir males públicos futuros z en t_9 será mayor que el costo de sobrellevar males públicos presentes s en t . A los efectos de enfrentar este previsible empeoramiento de su situación, A tendrá ahora que comparar z con el costo de la acción de evitarlo x , que incluye el de los recursos para sostenerla y el de enfrentar a quienes en contrapartida esperan beneficiarse de aquel estado de cosas futuro z . Es obvio que x tendrá que ser menor que z para que la acción sea posible, y que mientras z contiene todos los costos de la inacción (“dejar todo como está”), x incorpora todos los de la acción (“evitar males mayores”).

Estos elementos del cálculo se apartan de la descripción que Przeworski dedica a las razones de los asalariados para organizarse: “Los obreros (y en algunos casos también los capitalistas) se encuentran en una situación análoga a la guerra de precios. Los obreros compiten entre sí, subastando a la baja sus salarios para conseguir empleo. De este modo los obreros se encuentran ante un dilema de prisionero en cuanto a su consumo privado. Es cierto que cuando los obreros forman un sindicato o emprenden otros tipos de acción colectiva pueden caer en el problema del francotirador, es decir, el dilema de prisionero asociado a acciones destinadas a suministrar bienes no rivales en consumo. Pero tienen que organizarse no para suministrar bienes públicos sino para evitar la competencia entre sí mientras buscan bienes privados” (Przeworski, 1994:14). En efecto, A busca organizarse no para producir un bien público sino para evitar males futuros (por ejemplo, la caída del salario o del empleo) pero no porque sus miembros estén actualmente compitiendo o metidos en algún dilema sino porque las reglas de decisión les ofrecen un margen de tiempo para actuar, del que no disponen individualmente en razón de hallarse abocados a la búsqueda de bienes privados o, lo que es lo mismo, a proveer a sus necesidades materiales inmediatas.

Pero para entrar en acción no alcanza con que el costo de evitar el mal público sea inferior al de consumirlo. A deberá contemplar también los costos de realizar estas operaciones de cotejar males actuales con futuros, esto es, de calibrar el costo de consumir perjuicios si permanece inactivo con los de la lucha por desviar la trayectoria del proceso de empeoramiento, cosa que no se realizan sin reglas. Como ya se dijo, toda regla decisoria contiene costos “externos”, derivados de estar participando de la acción pero no de las decisiones, e “internos”, que surgen de la intervención de un número creciente de participantes en las decisiones. Si los costos de quedar fuera de las decisiones (los integrantes quedan a merced de un liderazgo y de sus arbitrariedades inherentes, por ejemplo) o los de tomar decisiones (informarse, reunirse, discutir, ponerse de acuerdo, negociar, votar) o la suma de ambos (cdt), anulan la diferencia que A percibe entre el mal público que será forzado a consumir z y los costos/riesgos que supone evitar ese mal público x , la acción no tendrá lugar. En otros términos, los cdt tendrán que ser inferiores a la diferencia entre z menos x (ddc). Si el cdt es mayor que la ddc la acción no se llevará a cabo por más que A esté desesperado por evitar el deterioro de s hacia z . Un descenso en

los cdt indicará, por el contrario, un incremento en la confianza entre los protagonistas que permitirá una nueva evaluación de los x . Cuando percibieron que los jueces no querían aplicar penas ejemplares o extremas, el encarcelamiento de los infractores fue una medida represiva expresamente buscada por los movimientos pacifistas como estrategia de deslegitimación de sus agresores colonialistas y racistas, imposible de implementar de no mediar un elevado grado de confianza entre los integrantes del movimiento que redujo drásticamente los cdt. El pacifismo del Movimiento de Insumisos en Euskadi, que indujo la eliminación del servicio militar obligatorio, hizo de la represión que encarcelaba a sus miembros el arma más efectiva, sobre el trasfondo de la cultura anti-ejército de la sociedad española.

En la fase inicial, a la operación de estimar si z es mayor que s , y de si x es menor que z , se añade la de comparar la diferencia entre z y x , ddc, con los cdt de la regla de la unanimidad, la cual posee costos internos marginalmente crecientes en función del incremento en el número de participantes, lo que quiere decir que si los cdt de ésta regla se elevan será a raíz de este tipo de costos. Todos los componentes del cálculo de la acción colectiva varían empíricamente, pero la variable que con mayor grado de libertad pueden manejar los sujetos de la acción son los costos derivados de la regla decisoria y de la primacía o no que le concedan en la interpretación de las causas y en la prescripción de fines que atribuyen a su acción, es decir, del influjo que tenga una perspectiva procedimental en la elección de la forma de decidir. Cdt es meramente un símbolo abreviado de la suma de los costos de participar en las decisiones y de los costos de participar de la acción pero no de las decisiones. Como la unanimidad tiene bajos cdt mientras los participantes son pocos (relativamente a la relevancia y número de las decisiones pendientes), la acción se inicia invariablemente con ella.

Pero tampoco son suficientes para ponerse en movimiento los bajos costos de la unanimidad. Como se dijo antes, aún el cdt debe caer por debajo del costo de incongruencia antes mencionado, esto es, que la experiencia intrapersonal de contradicción o de pérdida de autonomía sea percibida por los miembros de A por encima a los costos de tomar decisiones interpersonales que, precisamente, al evitar z contribuirán a cerrar aquella brecha individual entre preferencias de primer y segundo orden. En síntesis, el inicio de la acción colectiva depende tanto de que los costos decisionales totales sean inferiores al costo de incongruencia ($cdt < cdi$) como de que sean menores a la diferencia entre el costo de consumir males públicos futuros y el costo de evitarlos ($cdt < ddc$). En una palabra: $ddc > cdt < cdi$.

Los déficit formales en el cálculo de la acción conduce a errores de sobreestimación y de subestimación que la llevan al colapso. No obstante, su propia lógica conduce espontáneamente al colapso cuando se prolonga más allá de cierto umbral. Durante la revuelta ecuatoriana de enero del 2000, burlando el bloqueo militar y policial de las rutas de acceso a Quito, los pueblos indígenas en pequeños grupos lograron converger en la plaza central, convocados por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, unas cinco mil personas dispuestas a forzar el cumplimiento de la resolución del Parlamento de los Pueblos del Ecuador, también convocado por la CONAIE, la cual simultáneamente mantenía reuniones con el alto mando militar en las que se planteó la disolución y revocatoria de los tres poderes del Estado (Ospina, 2000). El Parlamento

indígena no se atuvo a ninguna formalidad procedimental al resolver dicha disolución, defondando incluso la legitimidad de los representantes que el movimiento indio tenía en el legislativo. Apoyada por un sector militar la CONAIE conformó una Junta de Salvación nacional cuya composición fue negociada con al cúpula militar. A las pocas horas, los militares se retractaron y reemplazaron al Presidente por el vice, que fue ratificado por el Congreso inmediatamente. Luego de una jornada extenuante los desairados campesinos emprendieron el retorno a sus comunidades. Habían ocupado la escena política por 24 horas avivando el inveterado racismo de un segmento de la sociedad y el lógico temor del establishment, y aunque fueron muy concientes que su participación no fue en ninguna momento decisoria, en especial los grupos de Cotopaxi, de donde procedía el mayor contingente, no lo eran tanto de sus propios errores. El movimiento tenía una crítica radical a la estructura constitucional del estado pero una propuesta institucionalmente difusa y equívoca de conformación de parlamentos populares. Y si bien muchas organizaciones de la sociedad civil recogen su iniciativa y constituyen tales parlamentos a nivel local, provincial, y finalmente, nacional en las primeras semanas de enero, desde el cual el movimiento indígena busca legitimar sus propuestas de nuevo gobierno, carece de una propuesta de institucionalidad alternativa y de una estrategia de transición. Por lo que, desde la lógica del contrapoder inherente al movimiento social los indígenas se propusieron el poder pero sin asumir por completo su lógica ni la adversatividad consiguiente (déficit en procesos de ciudadanización, inexperiencia electoral, falta de fundamentación en sus propuestas, discursos que sustenten mediáticamente políticas de alianzas y de confrontación, etc.). Asumirla no significaba negar o destruir la experiencia ganada como contrapoder, pero si reconocer su diferencia. Cuando el movimiento impugnaba con justas razones a los tres poderes del estado y pidió un cambio político, tuvo una amplia aceptación de la sociedad y hasta ahí actuaba como el referente más relevante y legítimo de contrapoder, pero cuando paso a la acción y con un grupo de militares jóvenes intentó convertirse en gobierno, su propuesta perdió credibilidad. Evitar su colapso debió haber requerido transformarse internamente y pasar de la lógica de la unanimidad a la de la representación, y no pretender pasar de la unanimidad espontánea (sostenida por una memoria ancestral) a la deliberación directa salteándose los procesos de representación porque ello culminará siempre o en el colapso o en una unanimidad impuesta. No es que no contara con representantes, sino que estos no pudieron ejercer las funciones representativas al ser arrastrados hacia posturas radicales pero consignistas (la disolución de los tres poderes pareció desde el vamos una ambición condenada al aislamiento) por la indignación de un pueblo empobrecido, al límite de su resistencia física y social, y que no quería repetir los frustrantes resultado de la movilización contra Bucaram en febrero de 1997. La desesperación de los que no tienen nada qué perder sobrepasaba la previsión de dirigentes vacilantes. La consigna sobreestimaba la propia capacidad de movilización (es decir, z), que fue importante pero que no contó con el respaldo masivo de sectores medios y urbanos como tres años antes. El objetivo de dolarizar de Mahuad y el miedo a la hiperinflación desmovilizó a la clase media, pero la dirigencia no pudo cambiar de táctica porque las bases presionaron inflexiblemente contra toda posibilidad de negociación. Todo cambio se asemejaría a una traición, por eso no es suficientemente analizado el impacto del anuncio presidencial de la dolarización sobre sus potenciales aliados. Consecuentemente, la movilización no alcanzó masividad y la

resolución de la crisis se desplazó a la intervención arbitral de las fuerzas armadas. La CONAIE y la Coordinadora de los movimientos sociales subestimaron, por su parte, las dificultades de acordar (es decir, el cdt) un nuevo orden político con el sector aliado de las fuerzas armadas (por el aislamiento internacional que implicaba, por las desastrosas condiciones económicas que se heredarían, y más aún por el giro radical de las políticas que suponía una alianza con el movimiento indígena), con los sectores costeros (el Alcalde de Guayaquil amenazó con la secesión), y con la izquierda y otros sectores progresistas, recelosos del sesgo fundamentalista y corporativista que podían tomar las propuestas del movimiento. Las fallas estratégicas no se debieron a que el movimiento careciera de razón y de autoridad moral sino que internamente esa fuerza moral no expresaba la primacía de los procedimientos en la toma de decisiones. Si estos hubieran sido tomados en serio se hubiera reemplazado la unanimidad por la representación (con un consiguiente mayor esfuerzo de análisis) y a través de ella el propio movimiento hubiese iniciado el largo camino de experimentar intensivamente con esta regla antes de pasar a la fase más compleja de los “parlamentos populares”, esto es, a la regla de la deliberación directa.

1.3. Idea de la unanimidad

La unanimidad no es lo opuesto a lo “múltiple” sino a lo “único”, se trata del consenso espontáneo y sin mediaciones que potencia la diversidad al acogerla sin condiciones ni requisitos. Un concepto próximo al de unanimidad es el de “comunidad”, pero no coincide. Taylor (1990) dice que el carácter comunitario de una categoría o grupo es lo que permite resolver el problema del free riders, es decir, lo que hace racional la participación de un individuo. La cohesión y unidad de la comunidad campesina prerrevolucionaria fue crucial, por ejemplo, en el asalto al sistema señorial. Sin embargo, la comunidad no es la única fuente de la unanimidad, que es aún posible en la “sociedad” donde la modernización ha destruido el sentido comunitario. La unanimidad es el terreno del “poder” de Arendt o el de la espontaneidad de Luxemburgo. Concebida como proceso de autoactividad y formación de nuevas subjetividades, la espontaneidad en Luxemburgo es “la manera de exponer la inexistencia de una instancia exterior que pueda constituir esas prácticas de subjetivación y menos aún, y más importante, que las sustituya... las prácticas por las cuales los sujetos se autoconstituyen y autorreconocen en y por dispositivos organizativos autónomos conllevan una potencia política propia y alternativa a la circulante y dominante. Por ello, su permanente atención a los conflictos en los que las personas tomaban la iniciativa son una muestra de dónde buscaba ella las claves del proceso revolucionario y quiénes podían aportárselas...” (Pittaluga, 1998/99). En el uso de la unanimidad como regla no hay un pasaje de la espontaneidad a la conciencia. Por supuesto que con cada nueva secuencia de la acción hay una variación cualitativa, una superación de errores, etc. pero la lucha no nace de reacciones ciegas, pese a que tampoco Luxemburgo consideró a la espontaneidad como una irrupción irracional. Hay en la teórica, más bien, una coincidencia entre la subjetividad antagónica emergente y el proceso revolucionario, equivalente a una asunción progresiva de principios cada vez más universalistas y procedimentales.

El punto de arranque de la acción es la regla por la cual todos los participantes son decisores y todos los decisores son participantes, en la que el poder de veto de cada uno permite, por ejemplo, apartarse de la acción en cualquier momento, y en la que cuando el número de participantes es reducido -característica de toda acción colectiva en su fase inicial- el cdt es prácticamente cero. Aunque todos participen de las decisiones (al menos por la vía fáctica del veto) en tanto decisores encuentran que, además de ser pocos para concertar las decisiones, las que tienen que tomar son pocas y simples. Todavía los objetivos de A no se formulan positivamente en términos de bienes públicos; le alcanza con evitar un mal público. En estos términos la acción tendrá lugar exclusivamente "contra" algo o alguien, esto es, en términos de "reacción". Como inicialmente los participantes son pocos respecto de los problemas a enfrentar, la unanimidad como regla decisoria es inducida por la propia situación que comparten y que minimiza las diferencias internas al grupo en tanto categoría de afectados. Mientras, por un lado, no hay costos externos ya que el veto se ejerce simplemente rehusándose a entrar en la acción, por otro, los costos internos no pesan dado que informarse sobre lo que piensan los demás, formarse una opinión, ponerse de acuerdo y distribuir las responsabilidades, es un proceso inducido por la urgencia homogeneizadora de necesidades materiales. Los rebeldes cubanos se expandieron en base a los "vagabundos rurales". La insurrección nicaragüense se apoyó en las "revueltas barriales". El movimiento artiguista es incomprensible sin los "hombres sueltos". El mayor déficit de la UP en Chile fue haber bloqueado el papel protagónico-movilizador de los "pobladores". En realidad, los "marginales" son "centrales" porque son los que tienen los z más altos y los x más bajos (tienen poco que perder, aunque juega en contra el que tengan los costos de incongruencia más bajos). Si la acción se decidiera con independencia de los afectados, abortaría inmediatamente. En esta fase todos los participantes son decisores, y no hay free riders porque simplemente no hay ventajas. Los costos externos nulos, y los costos internos todavía bajos, tienen consecuencias: la unanimidad abre de inmediato un horizonte temporal más dilatado por donde transitará el primer tramo de la acción, aunque vulnerable al ascenso casi inmediato de los costos internos, que frenan en progresión geométrica la toma de decisiones apenas se suman nuevos participantes o es ampliado el radio de temas a resolver.

Toda acción colectiva es una forma de entender la situación, de pensar compartidamente acerca de sí y cómo actuar frente al poder, poder fundado en la vulnerabilidad de sus víctimas. La acción emerge, en cambio, como contrapoder, a partir de su imprevisibilidad, expresión de la confianza que logra re-unir a quienes lo padecen. Por eso la acción colectiva es extremadamente complicada de iniciar y aún más de continuar. Habitualmente los costos de incongruencia permanecen por debajo de los costos decisionales (los cdi por debajo de los cdt). Ejemplos como los siguientes son sólo quizás los más extremos. Las castas dominantes en la India han tratado que la situación de los Intocables parezca resultado de sus actos individuales. Uno de los ancestros trató mal a alguien de una casta alta y por lo tanto su alma sufre el castigo de reencarnar en un intocable. Bajo la apariencia de justicia se evita el uso abierto de la fuerza. Una explicación surge de evidencias que indican que los Intocables aceptan las creencias hindúes dominantes respecto al destino y la transmigración de las almas, aceptando las creencias sobre la suciedad como una de las bases del sistema de castas, el cual ha sido organizado

ideal y prácticamente como una serie de graduaciones de posición entre los conceptos opuestos de la pureza y de lo sagrado y los de degradación y mugre por el otro. Sin embargo, entre los propios intocables hay fuertes divisiones que establecen subcastas, y algunas de estas tratan de mejorar su posición imitando las costumbres de las castas superiores. De manera que por más que acepten algunos de los patrones morales por qué aceptan su posición, pero sí por qué se aplican sanciones para inculcar dichas creencias: en primer lugar para evitar que adquieren un sentido de autoestima que pudiera desafiar la autoridad de las castas superiores. De modo similar, en el régimen nazi, algunos prisioneros de los campos de concentración terminaron por aceptar la autoridad moral de sus opresores. Los SS trataron en forma deliberada de romper todos los lazos sociales y de reducirlos a una masa atomizada, homogénea y degradada. No obstante, no pudieron llevar esta política hasta su conclusión lógica ya que necesitaban al menos de una mínima cooperación de los prisioneros, la que surgió informal y espontáneamente, que también los alemanes utilizaron para sus propios fines y evitar focos de oposición. Los prisioneros se acostumbraban a tener miedo y la brutalización embotaba sus sentidos. En la medida que el miedo era un componente significativo, la mayor parte del miedo no era a los guardias sino a los otros prisioneros. La competencia feroz por recursos escasos y la falta absoluta de privacidad e intimidad ante la imposibilidad de estar a solas, rompían con los lazos humanos, por más que el instinto de supervivencia hiciera que la desintegración nunca fuera completa.

1.4. Ejemplos de la “ecuación” en la primera fase

Las rebeliones indígenas del Alto Perú y del pueblo parisino en 1789 reflejan estas “ecuaciones”. El alzamiento tupacmarista se apoyó en la unanimidad espontánea de los “forasteros” y de los negros liberados, ninguno de los cuales tenía ya nada qué perder, lo que implica un bajo costo de evitación para una situación que tendía a empeorar, al menos para el conjunto del sector indígena. El sistema de esclavización y explotación habían creado una población indígena fugitiva y errática, compuesta por aquellos cuyas producciones habían sido destruidas por dicho sistema. Habiendo logrado escapar de los obrajes, estos indígenas vagabundos, llamados forasteros, no estaban censados y carecían de tierras, jefes y leyes. Su condición era preferible al trabajo forzado y fuente potencial de rebeliones, incentivadas cada vez que se iniciaban campañas con el objeto de incorporarlos a las mitas. Sobre tal base Tupac Amaru logró inicialmente convocar a sectores criollos expoliados impositivamente y enfrentados a la ineptitud de la burocracia española, agraviados por tener que obedecer a un sector colonial que a su vez obedecía a un Estado ajeno a su sociedad, lo que revela un tipo agudo de heteronomía, equivalente a la de los indígenas agraviados por tener que seguir a caciques a los que se había concedido privilegios a fin de que colaboraran en la sujeción de los indios y que llegaron a conformar la clase media acomodada colaboracionista que pese a todo mantenía su influencia sobre aquellos. El corregidor era un representante de la corona, inventado para impedir el surgimiento de una clase señorial, y un personaje odiado por terratenientes y mineros ya que era recaudador de impuestos abusivos, y por los indígenas, que estaban obligados a comprarle cierta cantidad de productos. El sistema de reparto administrado por el Corregidor rompía con el sistema de subsistencia del campesinado, que teniendo

que aceptar los productos distribuidos estaba forzado, para pagarle, a vender sus productos y su fuerza de trabajo. De las 66 rebeliones entre 1765 y 1799, todas con excepción de una se plantearon en contra de este sistema de reparto. A ello se agregaba que la nobleza indígena componía un número mayor que los puestos curacas disponibles y que presionaba por el reconocimiento de sus títulos. El propio Tupac Amaru poco antes de iniciar el movimiento estaba ocupado en un intrincado trámite burocrático a fin de que se le admitiese su ascendencia incásica. Era, además, un transportista de mulas, actividad que le permitió establecer una red de amistad por una región muy extensa, y como comerciante estaba afectado por impuestos, igual que los criollos. Había sido alumno de los jesuitas y había tenido contactos con grupos ilustrados de Lima. El componente radicalizado se hallaba expresado por su mujer, que como todas tenían cuentas pendientes específicas con los conquistadores a raíz de la explotación sexual y social.

La acción de sectores populares urbanos preexistía a los sucesos de julio de 1789 en Francia, y en el año de la revolución comenzó con movilizaciones contra la carestía. A partir de diciembre de 1788 el proceso de creciente politización en torno a la cuestión permanente de la reivindicación de pan abundante y barato, se deslizó por el espacio que dejaba el enfrentamiento entre patriotas y cortesanos, a lo que se sumaba el temor popular a la disolución de los estados generales por parte de un gobierno al que visualizaban como responsable final del acaparamiento de granos. Los cdt eran definitivamente inferiores a la dc. Los sectores populares urbanos, a los que pertenecían cinco de cada seis habitantes de París, habían invadido el espacio público, y aunque todavía se limitaban a exigir el cumplimiento de las responsabilidades oficiales respecto al abastecimiento, no tardarían en evolucionar. Los ciudadanos que habían tomado la palabra en la redacción de los cuadernos de quejas un año antes ya no renunciarían a ella y la expresarían más allá de la taberna, la tienda o el taller. Estos elementos muestran una previsión de que la situación empeorará, que la disputa entre sectores dominantes disminuye el costo de evitar dicha involución, y que el costo de la unanimidad se ubica por debajo de la diferencia entre los costos del enfrentarse a un mayor encarecimiento de los alimentos y los costos de enfrentarse a la represión y de los costos que implicaba la incongruencia entre los deseos de obedecer a una autoridad protectora y de tener que sujetarse en la práctica a un rey desprestigiado incapaz de garantizar la subsistencia por medio del abastecimiento de alimentos. Así, las revueltas contra el aumento de precios y la escasez enmarcaron la insurrección: saqueo de graneros, imposición de controles, ataques a funcionarios fiscales, amotinamiento en las panaderías, destrucción de los puestos de cobro de impuestos que gravaban el ingreso de los artículos de primera necesidad, disturbios contra fabricantes por la reducción de salarios, etc. Y comienza, en efecto, como una reacción contra la espiral inflacionaria, el desempleo y el hambre, que convertía al aprovisionamiento de París, dentro de un ambiente cultural más amplio preparado por los activistas del tercer estado (electores, periodistas, panfletistas) que libraban su disputa con la monarquía, en una cuestión política de primer orden. La acción se acelera y cambia cualitativamente con el enfrentamiento entre el tercer estado, en el que no estaban representados los sectores populares, y los dos primeros órdenes. Cuando en mayo se realiza la apertura de los Estados Generales, aunque no tenían acuerdo sobre las soluciones a proponerse al rey los diputados no representaban ninguna amenaza revolucionaria y todos ellos expresaban los intereses de las elites propietarias, cortesanas, eclesiásticas, militares, intelectuales. Pero la

homogeneidad social no resolvía un problema político: hasta qué punto la nobleza cedería la dirección del Estado. La mayoría de los nobles rechazó la deliberación en común, tal como conjuntamente con el voto por cabeza reivindicaba el tercer estado, estrategia que mantuvo su cohesión frente a la fragmentación que caracterizaba, por ejemplo, al clero. Si se reunían por separado, el tercer estado caía en la trampa del bicameralismo y desaprovechaba su mayoría numérica. El problema remitía a dos lógicas irreconciliables, ya que la representación doble del tercer estado había consagrado en parte los principios de la representación moderna, el individuo y la proporcionalidad, frente a la idea tradicional de representación por la que el rey expresaba la multiplicidad de órdenes unificados en su persona pública. La propuesta de Sieyès de reunirse para verificar los mandatos permitió a la mayoría del tercer estado y a los trásfugas de los dos primeros órdenes formar la Asamblea nacional que transfirió la soberanía del rey a la nación, y sustituir el mandato imperativo que los hacía delegados de sus provincias por el de representante de la nación, anulando toda dependencia con sus electores. De acuerdo con esto, la sociedad estaría formada no por estamentos sino por individuos, que desprendidos de sus intereses particulares (sólo los intereses comunes eran representables), conformaban una única e indivisible nación. Esta ruptura con el mandato imperativo carecía de legitimidad jurídica, y el rechazo del monarca provocó que más diputados de la nobleza y del clero se unieran al tercer estado. La facción cortesana convenció al rey de que debía resistir, pero como fundamentalmente a éste le interesaba el apoyo de los diputados para medidas que resolvieran la crisis financiera, si bien invalidó las resoluciones de la Asamblea no lo hizo con la anulación del mandato imperativo, que liberaba de todo compromiso con los electores. Los diputados desobedecieron la orden de deliberar separadamente, con la que el rey cerraba su propuesta, y en julio el rey tuvo que aceptar los hechos consumados e invitar al resto de nobles y sacerdotes a unirse a una Asamblea que el 9 de julio se declaró “constituyente”.

El rey moviliza sus tropas y se produce una primera convergencia entre la Asamblea y la agitación urbana y rural. La movilización popular otorgan otra dimensión al proceso de reforma. La amplia, profundiza y resignifica y, a su vez, la ruptura del sector dominante profundiza una intervención del pueblo que convierte a la política en algo que trasciende el ámbito de la Asamblea y que pasa a ser “cosa de todos”. El 12 de julio, ante el miedo de un nuevo aumento en el precio del pan (los cortesanos habían hecho renunciar al ministro de economía, que mantenía una actitud conciliadora) combinado el temor a la disolución de la Asamblea, se construyen barricadas, y se producen enfrentamientos con las tropas reales. Al día siguiente los electores parisinos del tercer estado forman un comité que sustituye al municipio y organiza una milicia de ciudadanos. El 14, en una ciudad de 700.000 habitantes varias decenas de miles se concentraron en diversos puntos para obtener armas, y un grupo de 1000 de ellos con el objeto de obtenerlas se dirigió a la Bastilla. En este lugar, la lentitud y el fracaso en las negociaciones entre los delegados del comité y el gobernador de la plaza, impacientó a la multitud mientras que los guardias recibieron orden de disparar, produciéndose 98 muertos y 73 heridos. El incidente cambió la naturaleza de la concentración, básicamente pacífica y se prolongó con la ayuda de guardias que defecionaron o que se negaban a disparar. La mayoría, alrededor de 800, de quienes participaron directamente del asalto eran representativos del barrio del faubourg Saint-Antoine, maestros propietarios de pequeños talleres y sus ayudantes, a los

que se sumaban artesanos, comerciantes y asalariados, que se movían autónomamente y seleccionaban sus propios líderes. El día 17 el rey cedió en todos los puntos: dispersó sus tropas, repuso al ministro de economía, aprobó las “milicias burguesas”, aceptó al nuevo alcalde de París, expresión del comité. En agosto la Asamblea abolió la sociedad de órdenes, algunos privilegios y el feudalismo jurídico pero también posibilitó “rescatar” derechos señoriales y dictó medidas represivas contra las sublevaciones campesinas. Para resolver el problema de legitimidad derivado de su conversión en Constituyente, la Asamblea decidió la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que operaría como preámbulo del nuevo texto constitucional, con lo cual quedaba asentada la primacía del derecho natural y de la ley sobre la tradición monárquica, y el propósito de construir una nueva sociedad basada no en la historia sino en principios. El obstruccionismo monárquico a tales decretos, y la discusión en torno al veto real, esto es, al equilibrio entre el poder legislativo y el ejecutivo, provoca la primera ruptura en el partido patriota. En septiembre triunfa el unicameralismo y el veto suspensivo por dos legislaturas (cuatro años), una definición más radical de la Constitución que la que propulsaban los partidarios de un sistema liberal a la inglesa.

1.5. La continuidad de la acción

Si la unanimidad movilizó a A significa la contrapartida de sus costos consiste en un margen temporal que representa el plazo disponible para la realización de sus objetivos (evitar, en la fase inicial, z), margen que a su vez expresa el potencial democrático para librarse de las asimetrías causales que lo afectan, o plustiempo para la acción que puede traducirse como la inversa de los cdt. La revolución rusa de febrero de 1917 quebró las creencias en la inevitabilidad del zarismo. “Los obreros rusos no tuvieron ánimo para esperar, de modo que aunque sus demandas eran muy concretas y limitadas, sentían que debían ser satisfechas completamente sin tardanza (Marc Ferro, *The Russian Revolution of February 1917*, p. 121; citado por Moore, 1997:351; subrayado nuestro). A esto se refiere la idea de “potencial democrático” como disposición de tiempo propio, que no se confunde con la observación de las secuencias y ciclos por los que atraviesa la acción. Los movimientos crecen y decaen, sus activistas rotan, pasan por diversas etapas, fluctúan según las coyunturas, etc. como muestran los estudios longitudinales sobre el movimiento pacifista holandés en la década del 80 (Klandermans, 1998), que utilizan una escala temporal fija. Pero ello no tiene que ver con la exigencia de que algo se cumpla sin demoras porque se dispone de un tiempo, de un plazo disponible con que se emplaza al contrincante. Si las reglas de la acción no ofrecieran tiempo, la acción exigiría la participación constante de sus protagonistas, con lo que no tardaría en colapsar.

La acción expresa, en tal sentido, un desequilibrio. Se ha sostenido que no puede haber equilibrio ni tendencia al equilibrio: cuando uno se entera de lo que hace el otro, éste ya habrá cambiado su conducta, de modo que las expectativas nunca se cumplen; pero esto no elimina, sin embargo, la posibilidad de estrategias racionales si lo relevante no es lo que haga el otro sino si lo que hace o hará influye realmente en los propios objetivos. Son racionales los cursos de acción que eluden la simultaneidad o la resuelven apartándose del punto respecto al cual nadie se mueve de su estrategia dada la previsible reacción de los demás, es decir, del punto en que nadie puede mejorar su opción considerando la reacción

o respuesta a una jugada adicional, y que por ello consideramos aquí como punto de colapso. El desequilibrio, en cambio, genera un plustiempo por el cual se juega con “el factor sorpresa” aludido por Kuran, transforma preferencias y con ello introduce diacronicidad o descomprime su apiñamiento o concentración en un presente al que de lo contrario convierten en estático. Puede suceder, por ejemplo, que los x superen a los z pero que la acción igualmente se inicie. Y esto significará que cdt es menor a cero (compensando la desventaja de actuar con costos de evitar males públicos superiores al de consumirlos) o que en la toma de decisiones no haya costos, sólo beneficios decisionales netos en razón de que la confianza intragrupal generada por la coherencia de sus miembros con reglas ideales es mayor que cualquier costos, interno o externo, de la regla decisoria que aplican.

La acción se inicia, dijimos, si el costo de los males públicos en caso de inacción superan los de evitarlos colectivamente siempre que los costos decisionales no anulen la diferencia y sean inferiores además a los de incongruencia. Imaginemos que A se halla ahora en acción. Es un sujeto colectivo orientado a evitar el consumo forzado de un mal público cuyo costo es tendencialmente más gravoso que el que debe sobrellevar en la actualidad. Dejaremos de lado la posibilidad de que a raíz de su movilización, otros agentes hayan contestado revirtiendo la tendencia negativa hacia z de tal modo que la acción de A pierda su sentido originario y éste considere cumplidos sus objetivos. Supondremos, en cambio, que el sistema percibe una amenaza en el hecho de que A haya abandonado su pasividad y serialidad, presentándose imprevistamente como desafío real o potencial para sus intereses, resolviendo en consecuencia que de ningún modo cederá respecto de los z impuestos a A, que éste deberá absorber en t_9 en caso de que pueda ser desactivado. A raíz de ello A advierte en t_2 que el conflicto se profundiza. La asimetría se ha convertido en antagonismo y encarece los costos de su acción. Mientras tanto se han sumado nuevos participantes y la acción adquiere masividad. Los costos internos son ahora más elevados y la regla de la unanimidad desemboca rápidamente en la parálisis: los cdt aumentan exponencialmente por efecto de la suba de los internos y anulan la diferencia entre z y x que justificaba actuar. La unanimidad jamás permitiría llegar hasta t_3 .

Aunque la regla de la unanimidad puede ser reemplazada por la regla de la representación, el colapso es más probable porque al ascenso de los costos internos se agregan los costos de reemplazo de la regla (crr) que los propios miembros de A se imponen unos a otros para dar ese paso que significa entregar el derecho de veto a cambio del derecho de voto. La continuidad de la acción es amenazada, así, tanto por el ascenso de los costos internos de decisión (cid) de la unanimidad a medida que se suman participantes, como por el precio que exigen miembros o minorías de A para aceptar una nueva regla decisoria: $cid + crr$. El aumento de crr impide, por ejemplo, aprovechar las oportunidades creadas por la acción previa. Los movimientos democratizadores de Europa oriental abrieron posibilidades políticas que perdieron durante y después de la transición, y que simplemente fueron usurpadas, expropiadas, delegadas. Luego de los asesinatos de Ghandi y King el movimiento pacifista, lejos de capitalizar su extraordinaria performance sus sectores internos vetaron la traslación de la unanimidad a la representación y sucumbieron a la inercia o a la violencia. Su experiencia y dispositivos fueron retomados, en cambio, por sucesores como los movimientos feministas,

ambientalista, de ancianos, de discapacitados y de homosexuales. En tal sentido, los protagonistas de la acción pueden fracasar y, no obstante, la acción ser exitosa al desplazar el campo de lo posible. Por ejemplo, la autonomía frente a las jerarquías universitarias movilizó a los estudiantes franceses del 68, y aunque la acción se desaceleró rápidamente, los trabajadores la reasumieron como bandera frente a las burocracias sindicales y la nueva izquierda contra los aparatos partidarios. Los campesinos movilizados de Cochabamba, artífices de las reformas bolivianas, se respaldaron en la situación revolucionaria creada previamente por los mineros del estaño.

La continuidad de la acción siempre está amenazada por alguno de los componentes del cálculo y el cambio de sus valores o magnitudes en la percepción de la agente, pero más que nada debido al empleo irregular de las reglas de la acción (que son reglas de tiempo). Pese al extraordinario empeño demostrado por los heroicos anarquistas del movimiento huelguístico de la Patagonia sur en 1922 (Bayer, 1994) en diseñar y en respetar reglas de decisión profundamente democráticas ellos mismos las forzaron al adelantar decisiones (por ejemplo, recorriendo las estancias armados y haciéndose seguir por los peones) que por su importancia deberían haber contado con el aval de todos los potenciales participantes, en su mayor parte de acuerdo con las módicas mejoras demandadas, lo que seguramente habría originado instancias de mediación y negociación que evitaran la tragedia. Es obvio que los resultados de la acción colectiva proceden de los errores y aciertos estratégicos, lo que se pasa por alto es que estos dependen del tipo de reglas para decidir y del grado de sujeción a las mismas. De ellas depende la magnitud que asuman los diversos componentes del cálculo. Que se aprovechen o no las rupturas o fracturas del bloque dominante (disminución de los x) a raíz de reformas modernizantes que empeora la situación de las mayorías (ascenso de los z), o que el sistema traslade sus crisis al individuo en términos de "crisis de personalidad" o de identidad (ascenso de los cdi respecto de los cdt), depende de cómo son percibidas por el propio agente, y este cómo formal es determinante para el contenido del qué. No hay clases o sectores intrínsecamente revolucionarios. En Bolivia los obreros fueron revolucionarios, pero en México colaboraron en la represión de los ejércitos campesinos y en Cuba impidieron una salida insurreccional en abril de 1958, obligando a Castro a ir a la guerra.

Los medios y dispositivos a considerar dentro de los costos de la acción (los x bajo la unanimidad) son relativos al tipo de reglas para la toma de decisiones. Es la forma de decidir lo que determina cuáles son los más eficaces para iniciar un conflicto. Los rutinarios boicoteos a la importación fueron la mejor respuesta dado el consenso entre los colonos americanos al persistente esfuerzo del imperio de hacer pagar a las colonias los costos de la Guerra de los 7 años. La resistencia a los impuestos por parte de colonos sin representación consistió en una acción extralegal que buscaba ampliar su base social y con ello limitar la violencia y moderar los objetivos ante la estrategia del imperio más poderoso de la época, que se creía con el derecho de imponerse y que temía que el ejemplo se trasladara a Irlanda, posible aliado de los franceses, dirigido además por un Parlamento de terratenientes que buscaba financiarse gravando al comercio. El boicot anticolonialista fue adoptado después como método por los antiesclavistas para presionar al Parlamento y sabotear la importación de azúcar cultivado por los esclavos de las colonias. En ambos casos, los riesgos y desafíos de coordinación implicados en un contexto de adversidad

extrema sólo podían ser encarados con dispositivos cuya efectividad dependía de que fueran decididos por unanimidad.

El éxito de la acción colectiva en el corto plazo se debe a la unanimidad; pero el error más generalizado es pretender mantenerse bajo esa regla luego de alcanzado. Es difícil abandonar lo que ha probado dar buenos resultados, pero este es la principal fuente de fracaso. En 1968 los estudiantes de izquierda de la Universidad de Nanterre protestaron contra las arbitrariedades administrativas, y la acción se propagó a otras universidades. La sociedad apoyó a los estudiantes reprimidos violentamente. Cuando el movimiento obtiene el apoyo de los trabajadores De Gaulle pide apoyo a los militares para asustar a la clase media y Pompidou negocia aumentos salariales espectaculares con los sindicatos. Cuando los partidos de izquierda mostraron disposición a formar gobierno, De Gaulle aprovechó para llamar a elecciones y derrotarlos. Los estudiantes alcanzaron un triunfo inmediato con los dispositivos propios de la unanimidad: la confrontación directa y descontrolada, las barricadas y ocupaciones, el corte de servicios. No pensaron que debían contar con una instancia representativa de reemplazo, esto es, un plan de reformas y un curso de acción más allá de la coyuntura para mantener la capacidad de desorden y enfrentarse tanto a las maniobras del gobierno como al receso vacacional, al egreso de sus carreras, a sus divisiones y a la desmoralización. Permitieron la recomposición de las elites, que realizaron reformas parciales sin su participación, y que culminó en la consolidación del orden conservador en las universidades. Los militantes que quedaron trataron de evitar violentamente las elecciones, lo que les enajenó el apoyo de los estudiantes moderados y el de sus antiguos aliados. En cambio, las feministas norteamericanas evitaron el problema a través de múltiples representaciones experimentadas y operativas (NOW, WEAL, NWPC) y preservaron su movimiento hasta los 90, optando por un activismo discreto y la influencia cultural, alcanzando avances poco resonantes aunque efectivos, como el significativo crecimiento en el número de mujeres elegidas para cargos públicos en 1992 (Tarrow, 1997). Pero no significa esto que bajo la regla representativa la continuidad de la acción en el largo plazo quede garantizada: las feministas se volvieron, finalmente, cada vez más dependientes y simbióticas del Partido Demócrata. Para Ghandi su “error Himalaya” fue la masacre de Amritsur, consecuencia de no haber medido correctamente las reacciones y el miedo de un oponente descontrolado. Sin embargo “no haber medido” procede de la persistencia de la regla de unanimidad en un movimiento que requería de la interiorización del pluralismo, inherente al pasaje a la regla de la representación (el partido del Congreso era una instancia exterior), y que hubiese aportado la madurez necesaria para regular las movidas pacifistas. Es decir, el error que Ghandi se atribuye a sí mismo es, en realidad, efecto de la intolerancia interna al agente colectivo, que le impide obrar con un mayor sentido de la realidad.

1.6. El colapso y sus manifestaciones

En la fase inicial la constitución del agente se identifica con la decisión de actuar y con la regla de la unanimidad espontánea. De persistir la unanimidad los costos internos paralizaran la acción, que se volverá agónica hasta disolverse definitivamente. Perderá su carácter disruptivo y/o autónomo. Pero el colapso no solamente puede ser inercial. Puede

ser, además, faccioso o abdicativo. En el faccioso el veto sistemático y disolvente sostenido a rajatabla por algunos participantes con el objeto de usurpar la acción en su favor y lograr una unanimidad impuesta, inmoviliza a los participantes por medio de algún dispositivo violento. En el segundo, la acción abdica en favor de mecanismos descentralizados (la solidaridad o el mercado) o centralizados (el liderazgo, la jerarquía o la organización). En los descentralizados las decisiones son delegadas a los individuos y la acción es reemplazada por la competición basada en posesiones particulares (mercado) o por la cooperación sustentada en virtudes personales (altruismo), en cualquier caso el carácter disruptivo de la acción desaparece. Los mecanismos centralizados, por su parte, suponen una delegación a no-miembros o a miembros a los que se les concede “poderes especiales” y suponen la pérdida de autonomía.

Un ejemplo de disolución abdicativa descentralizada a favor del mercado, puede extraerse de la transición del feudalismo al capitalismo (Brenner, 1988). La lucha que desembocó en el capitalismo agrario en Inglaterra tuvo lugar en el siglo XVI, y fue la del campesinado por la tenencia de la tierra. Esta acción, sin embargo, lo que genera es un mercado de tierras: la clase dominante a fines del siglo siguiente controlaban entre un 70 y 75% de la tierra cultivable. Tal concentración posibilitó el surgimiento de la nueva estructura terratenientes-arrendatarios y empresarios-asalariados que constituyó el prerrequisito del desarrollo capitalista y de la cooperación de clases al liberar trabajo para la industria en forma creciente y al aumentar la productividad hasta el punto de bajar el precio de los alimentos e incrementar el poder adquisitivo de los sectores medios y bajos rurales, posibilitando por esta vía un mercado interno para los productos industriales y la reducción de los costos salariales de la industria, condiciones de posibilidad de la ulterior “revolución industrial”. La contraparte de la derrota del campesinado como clase, y su proletarianización, es, en consecuencia, el surgimiento de un mercado en sentido capitalista. En Francia, por el contrario, la abdicación fue centralizada, resultando favorecida la burocracia estatal. Pese a que el campesinado logró fortalecer sus derechos de propiedad y libertad frente a los señores, respaldándose en la monarquía que buscaba en el campesinado su propia base de financiación, fue sometido a una doble extracción de excedentes, del señor mediante el pago de la renta de la tenencia de tierras y del Estado por el pago de impuestos, lo que atrasó al capitalismo agrario francés durante buena parte del siglo XIX. Cuanto más avanzados fueron sus derechos de libertad y propiedad, mayor su pobreza y mayor el fortalecimiento y autoritarismo de la burocracia estatal, tal como sucediera también a raíz de las revoluciones rusa y china. De modo que sea como sea, el colapso de la acción colectiva campesina derivó en la construcción o del mercado o del Estado modernos, y por ende en su destrucción como agente social de cambio. El resultado fue la modernización, no la liberación.

Cualquiera de las variantes de colapso es resultado de errores estratégicos, en relación a varios tipos de obstáculos o contradicciones sociales, como los que han sido tematizados por Elster (1994): a) Fijarse metas inconsistentes y contradictorias; b) Ser influenciado por causas que no se entienden (como el cambio endógeno de preferencias); c) Tener metas consistentes y libremente escogidas pero que son inalcanzables por los problemas de contrafinalidad y de suboptimalidad: cada uno “hace la suya” pero al hacer todos lo mismo logran una solución inferior a la que obtendrían si cooperaran; la diferencia entre

contra y sub optimalidad radica en que en la primera cada uno hace lo que hace con la esperanza de ser el único que lo hace y en la segunda cada uno hace lo que hace por temor a ser el único que lo hace; d) Haber superado los obstáculos anteriores pero participar de un juego sin solución no cooperativo, sin punto de equilibrio (no hay nada para hacer que sea racional) o con varios puntos de equilibrio (el juego tendría solución si todos los puntos de equilibrio fuesen equivalentes o intercambiables). De acuerdo con Elster, si la solución del juego depende de estrategias dominantes, sólo puede quedar bloqueada por falta de racionalidad individual y si la solución depende de estrategias no dominantes, la solución puede bloquearse por desinformación o por indeterminación; en este último caso la información es completa pero como todos son igualmente racionales no se sabe qué hacer.

Para nuestro modelo basado en reglas estos problemas son manifestaciones de desconfianza. Representan transgresiones a la primacía de las formas decisorias respecto del contenido o resultado de los cálculos de A, y que en lugar de prevalecer son menoscabadas por decisiones antepuestas al debido test procesal. La desformalización o deformación de la interacción en el seno de A imposibilita a sus miembros confiar, por lo que se requiere de una información ilimitada, lo que a su vez supone una disposición igualmente ilimitada de tiempo, emergiendo los errores de cálculo -un incremento en los cdt- que conducen al fracaso de la acción, reflejado éste en una relación medios-fines inconsistente o contradictoria que subestima (contrafinalidad) o sobreestima (suboptimalidad) las reacciones de otros estrategas.

Los casos expuestos brevemente a continuación, la manifestación de Tiananmen, la masacre de los indígenas sublevados, el movimiento de las asambleas seccionarias durante la revolución francesa, muestran estrategias sobreimpuestas o transgresoras de la unanimidad espontánea. En China la apertura democrática fue impulsada en 1989 por estudiantes universitarios desde agrupaciones preexistentes, que creyeron que la visita de Gorbachov y las reformas del orden soviético volverían vulnerable al Partido Comunista Chino. Alentados por el hecho de que éste había moderado su reacción ante las primeras protestas, y apoyados en la circunstancia de pertenecer a una elite protegida y respetada, con estatus elevados y vinculaciones en el partido, sin obligaciones laborales ni familiares, calcularon un bajo costo para la apertura democrática y experimentaban un costo de incongruencia ubicado por arriba de los cdt de una movilización callejera. Sin embargo, incurrieron en un error. Perseguían la producción de un bien público en lugar de la evitación de un perjuicio colectivo con la metodología decisoria de la primera fase, la unanimidad espontánea. Carecían para ello de reglas específicas de representación (partido, sindicato o asociación) que organizara la movilización articuladamente con los intereses de los trabajadores. Especularon con que los trabajadores urbanos se movieran por efecto de la inflación, sin prever que éstos tenían demasiado qué perder y poco que ganar con los objetivos estudiantiles. Respecto de los campesinos habían sido beneficiados por las reformas de Deng y no tenían entre sus expectativas un empeoramiento de su situación. De manera que el ejército se concentró en los estudiantes y pudo reprimirlos contundentemente.

Otra involución puede detectarse en la rebelión indígena antes comentada. En noviembre de 1780 Tupac Amaru captura y ejecuta a un corregidor en la plaza de Tungasuca, y por

más que proclamara su obediencia al rey y a la iglesia no pudo borrar el hecho de que su grupo había asesinado al representante real. Pero entre los indígenas propagó un sentimiento de libertad, ya que la ejecución había estado a cargo de un descendiente de los incas. Los criollos que apoyaron la acción no midieron las consecuencias, como quizás tampoco Tupac Amaru que, desde entonces, tuvo que ponerse a la cabeza de una marcha insurreccional en dirección al Cuzco que, en el camino, destruyó obrajes admitiendo los intereses de los más pobres, y ya no únicamente las demandas de criollos descontentos. Por ello se suman, además de indígenas, mestizos, zambos, mulatos, negros esclavos, y hasta algunos españoles. En pocos días suma a 10.000 indios y a 1.000 entre mestizos y negros. Y publica su conocido Bando de la libertad de los esclavos. El indigenismo exaltaba formas organizativas del pasado, el ayllu, un grupo de parientes vinculado a un territorio y trabajo común, que para los indios significaba la propiedad colectiva de la tierra y la consiguiente seguridad social, aún para el propietario individual, siempre amenazado por los latifundios. Naturalmente, los criollos se opusieron a esta nueva radicalidad y a una rebelión popular hegemonizada por el sector indígena. Tupac Amaru hizo todos los esfuerzos para no aislarse pero dependía militarmente de los indios. En Sangarara los soldados españoles se refugiaron en un templo y no pudo evitar que sus tropas lo incendiaran. A partir de allí comprendió que no podría unir a dos naciones y a dos revoluciones. Si hacía concesiones a los criollos perdía a su base indígena, y si mantenía el carácter revolucionario del movimiento se autoderrotaba militarmente. El desenlace faccioso muestra nítidamente la dificultad para mantener la regla de la unanimidad al sumar a los criollos por un lado y a los grupos mas empobrecidos y sojuzgados. Micaela, su mujer, quería definir de una vez por todas la situación marchando directamente sobre Cuzco para no dar tiempo a los españoles a organizarse, pero Tupac Amaru demoró su marcha tratando de alcanzar algún compromiso con los criollos. Además, si bien había una fracción indígena dispuesta a todo, los forasteros y los negros liberados, había otra compuesta por quienes aspiraban sólo a mejorar sus condiciones de trabajo en los obrajes y por caciques temerosos de perder sus limitados privilegios, algunos de los cuales ya defeccionaban. Finalmente, si por un lado la articulación con los criollos pasaba por el reconocimiento del rey y la adhesión al catolicismo, por otro las demandas indígenas eran concretas y reflejaban mucho menos la legitimidad del rey. El movimiento, contemporáneo con la expulsión de los jesuitas, no era anticatólico y no levantaba una legitimación religiosa diferente a la dominante aunque reinterpretó el discurso ideológico de la iglesia y lo dirigió contra la jerarquía. Los sacerdotes inicialmente lo apoyaron, luego vacilaron, y algunos siguieron hasta el final. Jesuitas desterrados, como Vizcardo, llamaban a los criollos a emanciparse conjuntamente con los indígenas, cuando éstos en realidad visualizaban a los criollos como sus explotadores directos mientras que los españoles encarnaban una autoridad administrativa-eclesiástica distante.

Otra demostración de las dificultades para pasar de la primera a la segunda fase de la acción colectiva surge del propio seno de la revolución francesa. Desde la caída de la monarquía francesa el soporte del movimiento popular fueron las secciones, principalmente desde agosto de 1792 en que se afirmó su autonomía y se ampliaron sus funciones ejecutivas. Este cambio representa el pasaje de las reglas de la unanimidad a las de representación, forzado con la ampliación en número y objetivos del movimiento, pero con las dificultades propias que le interpone el veto durante el proceso. También exhibe

los problemas que surgen cuando se intenta reemplazar el objetivo de evitar un mal público (por ejemplo, el encarecimiento del pan) por el de producir un bien público (por ejemplo, controlar al gobierno), y los efectos que sobrevienen de los costos externos asociados a la independencia creciente de representantes y expertos.

Sus asambleas representaban al pueblo de la nación y constituían un gobierno independiente en su barrio, debiéndose reunir varias veces a la semana para decidir sobre asuntos locales y nacionales. Masivamente se comenzó a discutir la actualidad política y a participar espontáneamente en reuniones distritales. Los votantes, que se habían reunido para las votaciones durante abril en las iglesias de los 60 distritos de París, lo siguieron haciendo, desbordando el papel que el gobierno les había asignado –el nombramiento de los electores de los diputados. Constituyeron asambleas deliberativas, comunicadas directamente entre sí, con la idea de ser informados por sus diputados, controlarlos e influirlos. La Asamblea Constituyente intentó reglamentar la actividad asociativa luego de las movilizaciones de julio de 1789. La ley electoral de diciembre de ese año organizó las circunscripciones electorales para las asambleas primarias de los municipios, las que en las ciudades de más de 4000 habitantes se denominaron secciones, como en París, donde sus 60 distritos se convirtieron en 48 secciones. En mayo-junio de 1790 intentó establecer que sólo podrían celebrarse bajo ciertas condiciones y para discutir sólo asuntos locales, pero se siguieron discutiendo los problemas generales y la tarea reformadora de la Constituyente, lo que dio lugar al movimiento seccionario, que heredó la experiencia electoral y asamblearia que condujo a la designación de los diputados del tercer estado. Sus prácticas fueron el primer aprendizaje de una concepción de la democracia que consideraba a los representantes sólo como mandatarios, esto es, con un mandato limitado y revocable. El debate sobre los dos tipos de mandato no era únicamente teórico sino que reflejaba la preocupación por no perder los ámbitos para el ejercicio de los derechos políticos ya adquiridos.

Este movimiento tuvo un despliegue extraordinario en París, y menos en Marsella y Lyon. Los ciudadanos activos (pequeños y medianos burgueses) dominaron inicialmente las asambleas, aunque tampoco acudían todos los que tenían derecho de hacerlo (la media de quienes se reunieron entre 1790 y 1791 osciló entre el 6 y el 14% de los ciudadanos activos), y la abstención era más fuerte entre los activos más ricos y más pobres. Más tarde tuvieron un papel protagónico los ciudadanos pasivos (pobres y mujeres). En momentos de mayor politización los individuos más enérgicos y violentos estaban sobrerrepresentados y polarizaban a las asambleas, y en épocas normales éstas se constituían en subdivisiones administrativas de los municipios, dotadas como tales de órganos de ejecución formados por funcionarios o comités que hacían de intermediarios entre el municipio y las asambleas generales de las secciones. A nivel nacional gravitaba mediante el procedimiento electoral de la constituyente –sufragio universal masculino en dos grados– aunque adaptado a una práctica habitual de las asambleas primarias: votaciones en alta voz o pública sometidas al escrutinio depuratorio, es decir, a la censura de la asamblea. Cuando el electo accedía al organismo, municipal o nacional, sobrevenía el conflicto: las nuevas responsabilidades o actividades no coincidían siempre con el mandato, y en el conflicto entre la base y el órgano, el representante optaba por éste último, que defendía su nuevo rango. La obstinada reivindicación de las secciones de controlar

sistemáticamente a sus mandatarios repercutió en una creciente inoperancia de las asambleas, obligándolas a reunirse con mayor frecuencia que la necesaria y a recurrir a instrumentos ejecutivos, con la consiguiente proliferación de instancias representativas, oficiales u oficiosas, permanentes o provisionales, síntomas de una experimentación política caracterizada por la desconfianza y las contradicciones entre la realidad local y el poder central. Al multiplicarse los comités se diluyó la idea de representación y se atomizó la democracia seccionaria, pues redujeron las funciones de las asambleas que obligaban a los ciudadanos a sacrificar todo su tiempo libre a la asistencia a reuniones. Lo que explica que fuera una minoría la que participaba, la misma que estaba en condiciones económicas y culturales de llevar una actividad política continua y de adquirir las destrezas y los saberes indispensables. Y lo que explica también, conjuntamente con las limitaciones que la ley municipal había puesto a la actividad seccionaria de las asambleas, como la supresión de la permanencia y su restricción a los ciudadanos activos, que la participación popular buscara su lugar, hasta 1792, en asociaciones no oficiales.

La búsqueda de la unanimidad perdida y la exigencia de que todos los actos políticos debían hacerse públicos, para poder distinguir entre amigos y enemigos. Lo “público” permitía, en este caso, expulsar o excluir a los moderados. Al votarse candidatos por aclamación terminaba intimidándose a la oposición. Cada sección era considerada igual a cualquier otra, por lo que cada una podía actuar a favor del todo, idea que les guiaba cada vez que intervenían para cambiar la relación de fuerzas en la Convención. La discusión en torno a la “soberanía” continuaba hacia dentro de la sección, lo que dio lugar a los técnicos en procedimientos, especialistas en el funcionamiento de las asambleas, ya que cada vez era más complejo su manejo a raíz del surgimiento de corrientes organizadas. Lo que condujo a la paradoja de que la demanda de mas democracia redujo a la base al favorecer a pequeñas oligarquías expertas.

1.7. Casos ejemplares

Las revoluciones rusa y alemana representan casos paradigmáticos de colapso de la acción colectiva mucho más complejos. Para la siguiente visualización se seguirá de cerca la narración de Moore (1996), claramente ilustrativa de todos los elementos que intervienen en la decisión de actuar, de la dinámica de los costos de tomar decisiones o de no participar en ellas, de las dificultades para pasar de la regla de la unanimidad a la de representación, etc.

La abdicación a favor de un mecanismo centralizado es evidente en el octubre ruso de 1917. En las tres movilizaciones, las de 1905, y la de febrero y octubre de 1917, cuatro factores fueron decisivos: los trabajadores industriales de las grandes ciudades, las rebeliones campesinas y toma de tierras en un país en el que el 80% de su población era todavía agraria y hostil al régimen de propiedad, la alineación de casi todos los sectores influyentes debido a la incompetencia del zarismo, y la desintegración de las fuerzas represivas. No fue tanto la fuerza de los revolucionarios como la implosión del zarismo y el debilitamiento de sus defensores, el eje de los acontecimientos. Los trabajadores carecían de las organizaciones sindicales y políticas con las que contaban en Alemania gracias a una tolerancia de facto. En enero de 1905 las tropas del zar dispararon sobre una procesión

del padre Gapon, que formada por miles de trabajadores se dirigía al Palacio de Invierno a presentar una petición. Ello minó la fe en el zar como padre protector. En octubre volvieron a actuar por su cuenta y empezaron con una huelga de ferrocarriles, que se extendió a todo el país y adquirió rápidamente un carácter político: elecciones libres, asamblea constituyente, amnistía para los prisioneros políticos. Cuatro días después la huelga había paralizado al país, lográndose reformas constitucionales limitadas. Los socialdemócratas rusos fueron completamente sorprendidos respecto a cómo orientar a los trabajadores. Hasta 1907 se dieron condiciones favorables para organizar sindicatos, compitiendo en ello mencheviques y bolcheviques, que consiguieron organizar en Moscú a la décima parte de la fuerza de trabajo. Los primeros, que predominaron, querían educar a los trabajadores para que se liberaran a sí mismos en un plazo extenso o indefinido; los segundos aspiraban a resultados revolucionarios rápidos y obtuvieron éxitos organizativos en el sector artesanal mas que en las grandes empresas con muchos trabajadores. Entre 1907 y 1912 la política zarista adoptó un giro represivo y los sindicatos quedaron fuera de juego. Después de 1912 dada la intransigencia de autoridades y patrones, los bolcheviques sacaron ventajas respecto de los mencheviques en el liderazgo sindical, pero el sindicalismo ya no pudo gestarse normalmente..

Hacia 1917 el ejército había comenzado su desintegración, por detrás de la cual estaba la masacre del ejército campesino. Quebrados los lazos nacionalistas y tradicionalistas, los campesinos ya no adherían a un régimen dirigido por terratenientes cuyas tierras pretendían. Relacionado con esto, el sistema de transporte y abastecimiento a las ciudades se había desarticulado, con lo cual crecían las quejas de los consumidores. En febrero de 1917 Petrogrado se hallaba desabastecida en un 50%, en medio de la falta de pan y de un frío aterrador. “En las largas filas de mujeres, niños y ancianos, había muchas quejas sobre por qué no se podía conseguir pan y quien era el culpable de los sufrimientos del pueblo o quién era el que estaba aprovechándose y obteniendo algo de la guerra. La policía de Petrogrado escribió que las largas colas para conseguir pan tenían todos los efectos de los mítines revolucionarios con miles de volantes... Las calles se convirtieron en un club revolucionario. Las mujeres eran las más afectadas, puesto que los hombres estaban en el frente y ellas se habían quedado solas para cumplir con el trabajo, cuidar a los hijos y enfrentar la falta de alimentos” (Moore, 1996:346). El levantamiento tuvo lugar en las plantas textiles, que empleaba a muchas mujeres. Un día antes 20000 operarios habían sido despedidos de las plantas metalúrgicas. Hasta ese momento la policía todavía era capaz de aplastar los levantamientos y las fuerzas zaristas abrieron fuego sobre los trabajadores cuando quisieron avanzar hacia el centro de la ciudad. Es decir, los soldados se comportaron disciplinadamente.

Sin embargo, en la guarnición había tropas de reserva con una alta proporción de trabajadores oriundos de Petrogrado convocados para ser enviados al frente y escuadrones recién evacuados de hombres que habían estado en el frente, que habían sido heridos, y que debían volver a las filas. La noticia de que otra parte del ejército había disparado los horrorizó, y comenzó la desertión en cadena: los que fueron enviados contra el primer grupo se negó a tirar. El dilema era tirar contra su propia gente o romper la disciplina. Para la noche del 26 habían desertado 66.700 soldados. La acción principal que tomaron los obreros y soldados cuando se juntaron fueron liberar a unos 7.600

prisioneros, lo cual les proporcionó un nuevo liderazgo. Por último, se dirigieron al parlamento ha solicitar su aprobación y ampararse en la legalidad. La escasez de bienes de consumo básicos, las malas condiciones de trabajo en las fábricas, el papel de las mujeres en los primeros momentos de la rebelión -fundamentalmente en el hecho de desarmar a las fuerzas de represión- fueron cruciales. Pero más decisivo aún fue la desobediencia de los soldados, el quebrantamiento de los mandos.

La movilización fue espontánea, y los comités de fabrica que surgieron inmediatamente después, organizados por los trabajadores, se difundieron por todos los centros industriales de la Rusia europea y mostraban cuales eran las demandas: salarios, reducción de jornada, condiciones de trabajo, indemnizaciones, fin del trabajo infantil y de la discriminación por sexo, fin de las arbitrariedades en el trato y en las multas, comida, agua, comedores, baños, herramientas. Querían un cambio de reglas en dirección a la república y mejorar las condiciones de vida. No obstante, el levantamiento había liquidado el aura de inevitabilidad del régimen, y de pronto todo parecía posible, por mas que dentro del caos y la destrucción eran más probable la desilusión y la radicalización. Los comités exigieron en Petrogrado que la administración de las fábricas les reconociera el derecho a contratar y despedir trabajadores, pues deseaban seguridad en el empleo y que las fabricas siguieran operando. Las administraciones vieron esto como una intromisión intolerable en sus prerrogativas por más que los obreros reaccionaban, en realidad, al cierre masivo de empresas. Entre febrero y julio cerraron 568 que dejaron 100.000 obreros sin trabajo y para octubre los cierres alcanzaban a 800. Comités y administraciones se culpaban mutuamente de una situación, y ambos trataban de obtener ventajas de un poder que simplemente estaba en retirada. En algunos casos los comités trataban de operar las plantas, pero aumentaron la anarquía de la producción que ya había iniciado la guerra y el colapso del transporte. A pesar de sus conocimientos los comités no podían organizar la producción en cada fábrica en ausencia de una coordinación provista por los incentivos del mercado o por los controles de una burocracia central.

Este caos era el que precisamente entraba en los cálculos de Lenin como expediente de liquidación capitalista. El bolchevique era el único partido abiertamente comprometido con una revolución socialista y que había extendido su influencia. En 1917 la opinión favorecía a los bolcheviques, habían ganado la mayoría en el Soviet de Petrogrado, del cual Trotsky sería su presidente, y en las elecciones de Moscú entre julio y octubre habían pasado del 11 al 51% y los mencheviques del 12 al 4%. Los trabajadores iniciaron la revolución en febrero. No estaban en ese momento pensando en una revolución socialista pero su comportamiento defensivo durante los meses posteriores crearon el clima propicio. Conforme la situación se deterioraba el partido bolchevique aumentaba sus miembros y ganaba el control de los consejos, a los que Lenin consideraba órganos de una insurrección que debía producirse a mas tardar en septiembre o octubre. Luego cambió su opinión y los descartó como protagonistas de una eventual insurrección, porque en Petrogrado habían apoyado una represalia contra la intentona bolchevique de julio. En adelante pensó que era los bolcheviques como vanguardia del proletariado los que debía tomar el poder y que cuando se les presentara los hechos consumados los soviets respaldarían.

Trotsky quiso retrasar la insurrección, en oposición a Lenin, hasta que el congreso de los Soviet pudiera conseguir el poder por medio de votos, pero finalmente trató de hacer que la insurrección apareciera como una defensa de los consejos en contra de planes reaccionarios. A Lenin le costó convencer a sus colegas de la insurrección inmediata y hasta el 17 de octubre no hubo planes concretos al respecto. La insurrección comenzó como un movimiento defensivo en contra de un posible ataque anticipado por parte de Kerensky y del gobierno provisional, quienes se enteraron por los periódicos de dicha posibilidad. Podrían haberse reorganizado y haber derrotado la revolución en las ciudades, pero sabían que luego hubieran tenido que negociar o derrotarla también en el campo. Sin este frente abierto contra el viejo régimen, los trabajadores industriales como base urbana no hubieran sido suficiente para una victoria bolchevique. Trotsky había conseguido armas para un grupo de obreros con un mínimo de entrenamiento militar, y había logrado la neutralidad de la guarnición de Petrogrado mediante una mezcla de legalidad soviética y aprovechamiento del miedo de las tropas de que se les enviara al frente. Pero más que por la organización o fuerza bolchevique, el triunfo de la insurrección estuvo dado por la debilidad del gobierno, por su incapacidad o falta de voluntad para terminar la guerra frente a la presión de los financistas dirigida a obtener que Rusia permaneciera como miembro beligerante hasta el fin, como así también para normalizar los abastecimientos y resolver la cuestión de la tierra. Así, la insurrección consistió en cambiar a los guardias que estaban frente a una serie de edificios públicos.

Los campesinos habían comenzado a apoderarse de la tierra mucho antes que la insurrección bolchevique, pero los bolcheviques y los social-revolucionarios de izquierda alentaron las revueltas agrarias porque sabían que sin transformación en el campo la revolución proletaria sería aislada en las ciudades. Los campesinos, por su parte, temerosos de que la contrarrevolución pudiera traer de regreso a los terratenientes, se comprometieron con el nuevo régimen. En definitiva, la revolución fue apoyada realmente por la clase obrera urbana, una pequeña minoría, alrededor de tres millones dentro de una población urbana de veinte, la sexta parte de la población total. Y que buscó el apoyo campesino repartiendo la propiedad mientras en las ciudades luchaba por abolirla. La conjunción de las dos revoluciones, burguesa en el campo y socialista en las ciudades hizo posible la alianza entre obreros y campesino y permitió a los bolcheviques ganar la guerra civil y resistir la ocupación extranjera. El choque se hizo evidente cuando al final de la guerra civil, el campesinado se sintió ya liberado del temor a los terratenientes. Después de diez años de guerra mundial, guerra civil e intervención extranjera, la pequeña industria que Rusia poseía estaba arruinada "Económicamente, la nación vivía como si la hubieran hecho retroceder mas de medio siglo. Los habitantes de las ciudades quemaban los muebles para calentar sus viviendas. Veinte millones de campesinos eran víctimas del hambre y vagaban por todo el país en busca de alimentos. Los pocos millones de obreros que en 1917 habían erigido barricadas, se habían dispersado y, como fuerza social coherente, había dejado de existir. Los más valerosos murieron en la guerra civil; muchos ocuparon puestos en la nueva administración, el ejército y la policía, un gran número huyó de las ciudades castigadas por el hambre, y los pocos que quedaban se dedicaban más a negociar que a trabajar, se desclasaron y fueron devorados por el mercado negro... (los bolcheviques)... no podía apoyarse en la clase de la cual se consideraban la vanguardia, la base que supuestamente dominaba en el nuevo estado. Esa clase se había desvanecido

física y políticamente. Así, mientras la revolución burguesa, pese al hambre imperante en el campo, sobrevivía en las realidades tangibles de la vida rural, la revolución socialista era como un fantasma suspendido en el vacío. Estos fueron los auténticos orígenes de la llamada degeneración burocrática del régimen” (Deutscher, 1967:38-39)

En la revolución alemana de 1918-20 la acción de masas tampoco logra encauzarse a través de un partido o de un sistema de partidos representativos; transcurriendo en el marco de la disputa entre sectores moderados o reformistas y sectores radicalizados o revolucionarios del socialismo por ganarse el control sobre la clase obrera industrial. Los radicales, en el cual militaban los espartaquistas liderados por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, era un sector heterogéneo, escindido del PSD en 1917, y ambivalente acerca de si la revolución era posible por medio de las instituciones liberales, incapaz de acordar un liderazgo para el radicalismo de masas incipiente y creciente, y unido sólo por su común rechazo a la política del partido, controlado por los moderados, durante y después de la guerra. Los moderados pudieron derrotarlos pero al precio de una alianza con las fuerzas conservadoras y autoritarias del sector dominante alemán, profundamente desacreditado y a la defensiva debido a la derrota militar. La costosa y limitada victoria de los moderados representó el colapso de la acción que dejó como resultado final una democratización trunca, esto es, un régimen liberal con pocos liberales que más tarde sería fácilmente usurpado por el nazismo.

El núcleo movilizante provenía de trabajadores que había desarrollado sus propios métodos de acción. Desde el inicio de la guerra, funcionarios de las uniones locales que se oponían a la política oficial de tregua política y económica durante las hostilidades, se dieron una organización conocida después como Administradores Revolucionarios de las Fábricas (ARF). Líderes de obreros altamente calificados de la industria y de la minería, eran la fuerza dirigente detrás del movimiento radical ya que los estratos inferiores seguían apostando en masa al reformismo. Aunque débilmente, hacia 1917 los ARF habían extendido su influencia por toda Alemania. No confiaban en los espartaquistas por sus inclinaciones hacia un levantamiento prematuro, y no confiaban en los moderados por la razón opuesta: su excesiva concentración en los métodos parlamentarios. El grupo central de los ARF se constituía de pocos miembros pero que compartían visiones políticas, confiaban entre sí, y aunque eran una corriente minoritaria dentro del conjunto de la clase obrera poseían una influencia informal poderosa conforme al deterioro de las condiciones y al desencanto con la guerra. No obstante se trataba de un radicalismo auténtico pero incierto en cuanto a las ideas a ejecutar desde el poder. Su táctica principal consistió en presionar por medio de huelgas que motorizaba a partir de algún acontecimiento concreto que activara el descontento latente entre los trabajadores. En la mayor de las huelgas en la época bélica, en enero de 1918, contra la orden del gobierno de disminuir la ración de harina, el Comité de acción escogido por los huelguistas contaba con 11 miembros de los ARF, tres socialistas radicales (PSDI) y tres socialistas moderados (PSD). Lo que es significativo porque muestra que aún los obreros más militantes se resistían a cortar sus vínculos con los partidos tradicionales. Fue el único movimiento masivo a escala nacional hasta la revolución de noviembre de 1918, y que amplió sus demandas de consumo hacia exigencias de paz sin anexiones ni indemnizaciones en base al ofrecimiento realizado por los rusos.

Mientras tanto el establishment venía proponiendo reformas y acuerdos a los socialistas moderados, los líderes “responsables” de la clase obrera desde 1917, según avanzaba la probabilidad de derrota. Al día siguiente de la escisión del PSDI el Kaiser promulgó el decreto que prometía las reformas para después de la guerra. En octubre de 1918 los empresarios perdieron las esperanzas de una victoria militar que fortaleciera al autoritarismo y su propia posición frente al trabajo organizado, a la vez que la disolución incluía la posibilidad de que el PSD perdiera el control sobre sus propios seguidores. En noviembre, un acuerdo entre unos y otros acerca de una oficina de desmovilización tuvo impacto simbólico. Al día siguiente se inició el motín de Kiel, con marineros que se negaron a salir al mar a pelear contra los británicos, y que se propagó como levantamiento revolucionario espontáneo por toda Alemania. En medio de este proceso se celebró un acuerdo entre industriales y sindicatos por la jornada de ocho horas, la introducción de negociaciones colectivas por salarios, y la no financiación de sindicatos amarillos, pero el acuerdo era una señal de debilidad más de fuerza de los sindicatos, y no representaba la aceptación de la metodología del compromiso de clases del capitalismo democrático por ninguna de las partes.

A principio de noviembre los ARF contaban en Berlín con 125.000 obreros con experiencia militar, 75.000 de los cuales estaban listos para ir a la huelga con sólo una orden. Cuando la ola revolucionaria llegó a Berlín, el Kaiser abdicó y el último canciller imperial había entregado formalmente el gobierno a Ebert, líder del PSD, maniobras que evitaron un desenlace más radical. Colocándose a la cabeza de la revolución los socialdemócratas la impidieron, el artillero fue determinante. Lejos de tener el control el PSD estuvo de acuerdo en compartir en partes iguales con el PSDI el gobierno provisional o Consejo de representantes del pueblo, mientras que la izquierda lograba que los consejos de obreros y soldados fuesen elegidos en fábricas y cuarteles para luego reunirse en el circo Busch para elegir nuevos componentes de ese gobierno, una chance más para no conceder legitimidad popular al nuevo gobierno de Ebert. Sin embargo, la gran asamblea confirmó al Consejo con los mismos miembros ya acordados. Los obreros estaban nuevamente entusiasmados con la unidad de los dos partidos, ya que en las reuniones organizadas apresuradamente en las fabricas para elegir los delegados al Busch, los ARF no tuvieron éxito en sus esfuerzos por recordar a los trabajadores la traición del PDS a sus intereses económicos y su colaboración con el Kaiser. Para los líderes de los ARF quedó claro que la reunión del circo Busch apoyaría a un gobierno dominado por los socialistas de derecha y que ese gobierno rompería el poder de los consejos obreros para pasárselo a una Asamblea Nacional y a una república liberal-burguesa.

Después de su regreso de la asamblea Ebert recibió un llamado del Alto Comando por el cual se le informaba que se ponía a disposición del nuevo gobierno a cambio de que este luchara contra el bolchevismo y apoyara a los oficiales en el mantenimiento de la disciplina en el ejército. Ebert ocultó su respuesta a sus colegas socialistas y se las arregló para obtener su apoyo, incluido el del solitario representante de los ARF en el Consejo. El acuerdo secreto de Ebert con el estado mayor fue una puñalada por la espalda no solo para una revolución socialista sino incluso para una liberal. Al día siguiente de la conversación telefónica cesaron formalmente las hostilidades y un día después se firmó el acuerdo industrial-laboral mencionado. El principal impulso de los socialdemócratas fue

así restaurar el orden, incluyendo para ello el uso de políticas brutales e ilegales para acallar a sus enemigos de la izquierda, hacer que la producción funcionara de nuevo. Rechazaron además el control estatal sobre sectores claves de la economía y descartaron el control de los obreros en la gestión de la producción. La impugnación a cualquier cosa que interfiriera con la restauración del orden y del funcionamiento de la economía,, desesperaba a segmentos de la izquierda que a la vez también aumentaban su electorado, lo cual hacía que por su parte el PSD y sus aliados se endurecieran aún más.

El gobierno de Ebert tenía una apariencia de legitimidad revolucionaria adquirida en la asamblea del circo Busch y gracias al ejército obtenía la legitimidad del viejo orden, sólo que las dos fuentes de autoridad eran incompatibles. Los moderados se fortalecieron, sin embargo, con la elección de delegados al congreso de consejos de obreros y de soldados, reunidos en diciembre: de los 400 consejos representados solo 100 pertenecían al PSDI, y los espartaquistas aún estaban entre ellos, de modo que el PSD pudo controlar los procedimientos de un Congreso por medio del cual el único sector políticamente activo de la población, la clase obrera, abdicó como fuerza de liberación. El PSD presionó por elecciones inmediatas, para enero de 1919, sin dejar tiempo a sus opositores para capitalizar el descontento. Una moción para crear un consejo central de consejos fue derrotada y con ella también la idea de los consejos como base del nuevo gobierno. El PSDI declaró que no participaría de la elección del gobierno alemán hasta que la asamblea redactara la constitución y el PSD quedó completamente a cargo del poder. Liquidadas las posibilidades de reforma anticapitalista y antimilitarista, los socialdemócratas se enfrentaron a la revuelta espartaquista, una amenaza que percibieron debían extirpar de raíz aún permitiendo campañas de prensa que prefiguró los temas y métodos nazis, como también tolerando la creación de un cuerpo de aventureros armados llamados Freikorps. Para los espartaquistas, la única respuesta posible a la contrarrevolución era la revolución, y es lo que trataron de hacer desoyendo las recomendaciones de sus mejores líderes, Luxemburgo y Liebknecht, y pese a que no podían ponerse de acuerdo sobre si la revolución era posible de inmediato o después de una lucha prolongada, sobre si debían organizar a las masas con un partido político propio o en alianza con el ala izquierda del PSDI. Junto a su voluntarismo que buscaba artificialmente la revolución coexistía la creencia de que ella ocurre sólo cuando las masas están suficientemente educadas por los acontecimientos y suficientemente irritadas a causa de ellos.

Percibían, como también muchos de las ARF, un estado de ánimo generalizado a favor de la revolución, algo que parecía confirmarse con la mayor manifestación de masas (el 5 de enero de 1919) que se había visto en Berlín en protesta contra el despido del jefe de la policía, miembro del PSDI. Los ARF y el PSDI apoyaron al jefe de policía con la colaboración de los espartaquistas. El descontento con el PSD abarcaba a un amplio sector de la población de Berlín y los líderes se vieron atrapados en una situación en la que no había posibilidad alguna de retractarse que fuera compatible con el compromiso revolucionario. El mismo día de la manifestación grupos radicales armados intentaron apoderarse de varios edificios públicos, algo que tomó por sorpresa al Comité revolucionario, que ya no pudo echarse atrás. El levantamiento comenzó, pero la rebelión no contó con la ayuda prometida de otras ciudades, los marineros amotinados declararon su neutralidad, y las masas parecían dispuestas ir a la huelga pero no a pelear a las calles.

Las tropas de Berlín, con el auspicio oficial de los socialistas, finalmente atacó atrozmente a los rebeldes y asesinó a sus líderes, lo que liquidó toda posibilidad futura de reconciliación entre socialistas de derecha y de izquierda.

El 19 de enero de 1919, cuatro días después del asesinato de Luxemburgo y de Liebknecht, tuvieron lugar las elecciones a la asamblea que elaboraría la Constitución de Weimar. El resultado fue una dura advertencia para moderados y radicales: el PSD obtuvo 42 bancas, el PSDI 15 y los partidos burgueses 40. Las viejas élites habían permanecido quietas pero intactas durante el fratricidio de izquierda. El nuevo electorado de 35 millones, que incluía por primera vez a las mujeres, no le dio a ningún partido el mandato para dirigir, mientras que cinco millones no fueron a las urnas. En esta tensa situación se sucedieron una serie de levantamientos radicales, todos ellos basados en trabajadores industriales, que reclamaban otra distribución del poder y nuevas instituciones económicas. Las revueltas fueron locales pero respondían a condiciones generales, y no hubo una coordinación central de ningún tipo. Al fin del verano de 1919 los socialdemócratas las habían reprimido pero no las habían destruido. En junio la asamblea aceptó las condiciones de paz, dando la oportunidad de reaparecer a la derecha con las banderas del patriotismo. Los primeros esfuerzos nacionalistas y militares por desacreditar y destruir la república culminaron en marzo de 1920 en el intento de derrocar al gobierno en el que estuvieron involucrados las Freikorps y unidades del ejército regular. En esta ocasión, mientras el ejército regular se negó a defender al gobierno, los trabajadores fueron a la huelga junto con el funcionariado público de Berlín y jugaron un papel crucial en el fracaso del golpe. No obstante el ejército se convertiría en un Estado dentro del estado. En la zona del Ruhr el llamado a la huelga general contra el putsch de Kapp obligó a los trabajadores a armarse, en razón de las experiencias represivas recientes contra sus revueltas. Se formaron batallones obreros, el “Ejército rojo del Ruhr”, que alcanzaron el control de varias ciudades, pero cuya derrota a fines de marzo de 1920 marca el final de los levantamientos espontáneos y con programas y liderazgos propios, expresión de un socialismo descentralizado.

Antes de la represión masiva y sangrienta de la izquierda en enero de 1919 la revolución había sido “del pueblo” con objetivos democráticos limitados, antimilitar, antimonárquica, y los que la quisieron convertir en anticapitalista fue una minoría. Los consejos de obreros y soldados que surgieron espontáneamente podrían haberse convertido, no obstante, en órganos de una democracia cuyas instituciones no siguieran en manos de los sectores dominantes si el liderazgo reformista no hubiera bloqueado un proceso que quedaría fuera de su control, impidiendo una revolución socialista que según ese liderazgo tendría consecuencias desastrosas para Alemania y para los propios trabajadores. Tampoco los campesinos quisieron tener nada que ver con los consejos. La revolución popular, reformista, y democrática se detuvo cuando el Primer congreso de Consejos de Obreros y Soldados, llevado a cabo en diciembre de 1918 convoca a elecciones, poniendo fin a los propios consejos.

En Alemania de 1918 se observan así dos acciones superpuestas que transcurren al margen de la institucionalidad socialista polarizada y expresión de una acción del pasado. La movilización vía ARF y vía Consejos populares abren el camino a la república. Los ARF se halla en la segunda fase de la acción colectiva, y desconfían de los socialistas de derecha

y de izquierda, pero carecen de una estrategia política propia al punto de que no pueden convencer a los obreros del papel que había jugado el PSD. Su acción es capitalizada por éste. El movimiento popular espontáneo de Consejos, aún en la primera etapa, regida por la regla de la unanimidad, concentra sus expectativas en la reunificación socialista y en la convocatoria a elecciones. De modo que ARF y Consejos quedan desarticuladas. Lograron la república y obtuvieron algunas mejoras para los trabajadores industriales y mineros. Pero de sus luchas se sirvió la derecha socialista, que ni las promovió ni las protagonizó, para acceder al poder y realizar sus alianzas con el establishment. Sirvieron también a éste para volver a escena e instalar una ofensiva protofascista contra los sectores radicales bajo la cobertura política del socialismo moderado. Las movilizaciones que condujeron a los Congresos de noviembre y diciembre de 1918 provenían de sectores que habían sido antibelicistas o se resistían a los sacrificios de una guerra. Habían sufrido un alto costo de incongruencia en un contexto militar y expansionista. Percibían un probable empeoramiento de su situación, derivado de la derrota militar, de eventuales indemnizaciones, y de la necesaria reconstrucción, es decir, un empeoramiento de su situación actual. Y, a medida que las probabilidades de derrota y a la luz de la concesiones que el régimen empezaban dispuesto a conceder a los líderes “responsables”, percibían que los costos de su acción serían inferiores a los que se derivarían de la posguerra. El problema consistió en que las movilizaciones bajo la regla de la unanimidad, la de los consejos de obreros y soldados, cuando pasaron a la segunda fase al elegir representantes lo hicieron por un partido cuya polarización interna era irreversible, y que a raíz del propio antagonismo era profundamente desmovilizador. El PSD con el liderazgo de Ebert imponía el ascenso en los costos externos a la corriente del consejismo popular que, aunque ganó ampliamente en el Congreso de diciembre, debilitaría su posición apenas un mes después, en la Asamblea que redactaría la constitución de Weimar, estando impedido de pasar de la unanimidad a la representación a raíz de la polarización interna al socialismo. Las ARF, por su lado, no pudieron consolidar la etapa representativa mediante una representación independiente de los socialdemócratas..

Los socialistas de derecha en Alemania y los socialistas de izquierda en Rusia prepararon involuntariamente el ascenso del autoritarismo. La movilización decisiva en 1917 acaeció en febrero, por unanimidad espontánea de mujeres, obreros y soldados. Los consejos creados a continuación se hallaron, igual que en el caso alemán ante un socialismo polarizado, ninguno de los cuales los encauzó por dentro de un partido y democráticamente. El pasaje de la unanimidad espontánea a la representación mayoritaria por dentro de “un” partido socialista hubiera reforzado el potencial democrático que la primera fase ya no podía sustentar. El socialismo de derecha alemán no quería apoyarse en los consejos y el socialismo de izquierda ruso se decidió por la insurrección, una estrategia desde fuera de la clase, que ni siquiera la “vanguardia” acordaba completamente y que se llevó a cabo sin un plan. Fracasadas o triunfantes, en las revoluciones el izquierdismo provocó su opuesto. Ambos casos muestran acciones que al crecer numéricamente y aumentar los costos decisionales de la unanimidad, no consiguen pasar a la segunda etapa autónomamente y son instrumentadas por instituciones preexistentes, en el caso de las experiencias narradas por partidos socialistas polarizados que eran el resultado organizacional de movimientos ya colapsados ya a fines del siglo XIX pero que pretendían el liderazgo de un nuevo agente cuya capacidad movilizatoria

suponía el desafío al menos implícito a los mecanismos decisorios internos establecidos en dichos aparatos.

2. Fase de la representación mayoritaria

2.1. La admisión del pluralismo

El momento a partir del cual se vuelve engorroso tomar decisiones es variable y cambia tanto con el número de decisores como con el número de decisiones relevantes a adoptar, pero la clave de la transición de la unanimidad a la representación es la reconversión pluralista de A. Imaginemos que A se adelanta al colapso y sustituye en el momento t_3 a la unanimidad espontánea por la regla de representación mayoritaria, según la cual los participantes de A eligen por mayoría a representantes que decidirán por ellos. Ya no habrá coincidencia o identidad entre participantes y decisores, pero los c_{dt} bajarán por efecto de la drástica reducción de los costos internos y la acción quedará garantizada por un tramo más, digamos hasta t_6 . La representación mayoritaria no se adoptará, sin embargo, si no se concede a las minorías que podrían vetar la transición hacia esta otra regla determinados límites o instancias contramayoritarias. Este es, precisamente, el precio de la transición de la unanimidad a la representación. Por eso ésta es un mecanismo por el cual el veto característico de la unanimidad no desaparece del todo: se prolonga en la forma de restricciones al ejercicio del principio de la mayoría. Y es por eso que la transición de la primera a la segunda fase es tan complicada, como lo demuestran los ejemplos mencionados.

Además, el cambio en la forma de decidir no garantiza automáticamente la continuidad de la acción ya que ese cambio modifica los componentes del cálculo. A no puede en la segunda fase de su acción limitarse a cotejar costos de males futuros con los de la acción de evitarlos. Ahora tiene que resolver su involucramiento sobre otra base. Las dimensiones alcanzadas por el grupo y las reacciones del sistema obligan a definirse “por” algo, por un bien público, cuyo costo de producción (w) A habrá de contrastar con los de consumir z . Ahora la solución está antes que el problema, la respuesta antes que el interrogante, es decir, la necesidad de producir determinados bienes públicos se incorpora con mayor fuerza o peso que el diagnóstico en torno a z . Cohen, March y Olsen han propuesto un modelo de racionalidad en que la coincidencia temporal de problemas y soluciones en las instancias decisorias es el factor más importante para la toma de decisiones: las soluciones no son diseñadas para resolver un problema en particular, por el contrario, toda organización tiene disponibles un abanico de respuestas posibles que flotan hasta que el problema surge en su agenda. Sin embargo, la pertinencia de la solución es fortuita, por eso algunos problemas son resueltos por completo, otros parcialmente, y algunos permanecen irresueltos, por lo cual vuelven a la agenda a la espera de la solución más adecuada. “Pese al aforismo según el cual no es posible hallar la respuesta hasta que no se haya planteado bien el interrogante, en política pública a menudo no se sabe cual es la pregunta hasta que no se conoce la respuesta” (March y Olsen, 1997:57). Pero estos autores no explican por qué habiendo toda clase de programas y propuestas concebibles subsisten gruesos problemas en la acción, ni advierten que las soluciones políticas deben ser producidas en términos de un “mandato”, sin referencia al cual no habrá nada qué representar.

La representación asegura continuidad siempre que los decisores sean representativos o representen el mandato correctamente, entonces los costos decisionales internos de la fase

anterior bajarán, dándole nuevo empuje a la acción. Pero una vez elegidos lo más probable es que prefieran la desmovilización, no como requisito de una reducción de los costos internos a las decisiones sino de su propia estabilidad como representantes. La tarea teórica de los representantes es eliminar o integrar “ventajeros” (que no participan de la acción pero sí de sus beneficios) pero de hecho pueden manipular los procedimientos representativo-mayoritarios para bloquear la reacción de participantes que resisten el paulatino incremento de los costos externos. Apoyándose en ventajeros, los representantes de A pueden volverse ellos mismos aprovechadores y lograr que los participantes de A autolimiten sus resistencias a un “punto de equilibrio” que refleja el máximo de representatividad que los participantes pueden exigir sin que los decisores provoquen una regresión a las variantes de colapso de la fase anterior.

La interiorización de la regla representativa exige de los participantes un grado de tolerancia recíproca que aún con un menor el nivel de movilización que el alcanzado durante la fase de la unanimidad permita a A seguir actuando, lo que implica que las partes no reivindican la representación del todo ni rehúsan a su contraparte interna el derecho a su representación. Esto es, el agente admite una mediación pluralista entre él y él mismo compuesta de partes que no se asumen como totalidad. La transición a la regla de representación presupone, entonces, la continuidad movilizatoria pero con interacciones entre partes que se reconocen recíprocamente como legítimas. Un agente activo movilizado ya no “contra” sino “por” y en base a una acción que es prorrogada siempre que el costo de producir el bien público w sea inferior a z , y si, otra vez, el cdt (en este caso el de la regla de representación) no supera dicha diferencia ni los costos de incongruencia. La “fórmula” es, con estas aclaraciones, idéntica a la primera fase: $ddc > cdt < cdi$.

Del intenso conflicto industrial de los años treinta en Suecia los trabajadores salieron más y mejor capacitados para actuar colectivamente y por eso pudieron desplazar el antagonismo del mercado de trabajo y de las plantas productivas al plano político. El acuerdo de Salsjöbaden en 1938 es el comienzo de un largo período de compromisos sociales a través de los cuales aceptaban los derechos de propiedad privada, reformas laborales negociadas y mecanismos de arbitraje a cambio de garantías de la derecha de permanecer leal al sistema democrático. La arena electoral no es mejor ni peor que la arena huelguística, es su sucedáneo alcanzado cierto nivel de activación popular, y el potencial político del conflicto no disminuye ni aumenta por pasar de la primera a la segunda fase. Su transformación pluralista no queda necesariamente dissociada del carácter autónomo y disruptivo de la fase inicial. En el caso sueco, simplemente los trabajadores alcanzaron una superioridad numérica que debían explotar electoralmente, y enfrentar a los patrones con mayor ventaja que en el mercado privado, en el que cargan con los recursos disciplinarios del capital. Pero también en razón del tamaño alcanzado, que se les volvería en contra en términos de faccionalización, si persistían mantenerse bajo la regla de la unanimidad. La conversión a la regla representativa la llevaron a cabo a través del partido socialdemócrata, que ya estaba en el poder cuando llegaron los acuerdos, y con el cual mantuvieron una alianza a lo largo de más de cuarenta años. En vez de dar la pelea en el mercado, frente al cual hubieran fracasado de persistir en el movilizacionismo y en la confrontación directa con los empresarios, obtuvieron ventajas desde fuera y desde arriba

del mercado, por medio de un proceso de selección y agregación de intereses sostenido por una alta y creciente tasa de participación electoral, indicativa de que los partidos son alternativas todavía significativas para los electores.

El ejemplo de la transformación de movimientos sociales de todo tipo en partidos de masas o en un sistema de partidos, es menos obvio en el marco latinoamericano. No obstante, también aquí se logró al menos por breves períodos un alto nivel/tasa de movilización combinado con una práctica cívica y centrípeta del pluralismo. En Chile con el ascenso del FRAP y de la DC durante los 60, que se constituyen en alternativas de poder, devuelven a los ciudadanos la confianza en los partidos y en el parlamento, a la vez que crece la conciencia de la necesidad de reformas sociales y económicas. Duplican la inscripción de electores. Se unifica el movimiento obrero, mientras la DC se lanza a la agremiación masiva del campesinado. El potencial disponible de movilización no organizado y las aspiraciones reformistas de las masas obligaron a la DC y al FRAP a competir seria y duramente. Al punto que la DC agremia más rápidamente de lo que su gobierno está dispuesto a reformar. El campesinado, que tradicionalmente contribuía a que la derecha tolerara las alianzas de la izquierda con la clase media, pasó de la exclusión a la irrupción. Se triplicó en esos años el número de productores que participaban en las huelgas y los sindicatos pasaron de 22 a 4000. Pero no estuvo debidamente expresado en la DC, que no los encuadró porque sus reformas eran parciales y graduales. Mantuvo su retórica anticapitalista pero no aceleró las reformas ni concretó alianzas con la izquierda. Se aisló e intentó absorber por abajo bases electorales de la derecha y de la izquierda, eludiendo acuerdos con sus representaciones. Esto comenzó a centrifugar al sistema. Las elecciones de 1970 fueron encaradas con políticas de superoferta y con una alta fragmentación del sistema partidario: La UP gana con menos votos de los que había obtenido en 1964.

Otro ejemplo es la Venezuela de 1958. El fraude electoral de 1952 separó definitivamente a la URD y al COPEI de sus complicidades con la dictadura, y junto al PC y a la AD empezaron a trabajar en la clandestinidad y en el exilio, compartiendo luchas y campos de concentración. A medida que el gobierno se hacía más sanguinario más evidente se hacía para los partidos la necesidad de evitar en el futuro los errores en el manejo del conflicto durante el “trienio”. El objetivo de Pérez Jiménez de peronizar al sistema fracasó, pues los obreros tenían una experiencia sindical previa a través de los adecos. La AD y los comunistas trataron de combinar las explosiones huelguísticas con un levantamiento militar, pero no contaban con el apoyo de sectores medios que recién hacia 1957 empiezan a concurrir a manifestaciones y mitines a instancias de la iglesia, de estudiantes y de profesionales. El golpe de 1958 que diera lugar a la transición fue precedido por concentraciones callejeras entre el 6 y el 22 de enero, por huelgas generales y manifestaciones estudiantiles convocadas por la Junta Patriótica, que congregaba a todos los partidos y que, iniciada en el pacto de Nueva York culmina en el Pacto del Punto Fijo y en el Pacto de Avenimiento entre trabajadores y empresarios. Los partidos también compartían la conducción del Comité Sindical Unificado. De manera que hasta las elecciones la transición fue sostenida por movilizaciones (huelgas, manifestaciones callejeras y estudiantiles) que abortaron dos intentonas golpistas y paralizaron el país. Copei se organiza en todo el territorio; los comunistas superan sus divisiones entre rojos y

negros; resurge la AD pese a haber sido diezmadas en sus cuadros militantes; y la URD participa del gobierno provisional que convoca a elecciones y realiza reformas progresistas. El Pacto de Punto Fijo, acordado por URD, COPEI y AD (excluía a los comunistas) establecía: reconocimiento explícito del disenso, despersonalización del conflicto, eliminación de la violencia como recurso de poder, apoyo a un programa común, participar inicialmente en un gobierno de coalición cualquiera fuere el resultado electoral, defensa de la democracia aunque no se pudiese conservar la coalición, redefinir conjuntamente los problemas en caso de crisis. Por último, los avances electorales de la URD y de COPEI reequilibraron al sistema, moderando la desconfianza hacia la AD, que pasó del 74,5% en 1947 al 49,2% en 1958.

2.2. Las crisis en la segunda fase

Sin embargo, el afianzamiento de la práctica de un pluralismo que no se adensifica es imposible. Aunque el declive de la acción no es tan rápido como bajo la regla de la unanimidad, deviene inevitablemente. Los burgueses republicanos parisinos no lograron en 1851 coordinar el levantamiento del interior francés por ausencia de redes articuladoras, por eso luego de la catástrofe la principal preocupación de los socialdemócratas fue la de crear una organización eficaz, que desembocó en la ley de Michels de las oligarquías. En esta tendencia a la oligarquía a partir de que un movimiento alcanza cierto tamaño debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la representación es, al menos por un tramo, inevitable e indispensable para la continuidad de la acción. También Hobsbawm tiene razón: la presencia de dirigentes puede evitar su reversión prematura. El modelo organizativo socialdemócrata y populista fue imitado en todas partes y por todas las tendencias: se constituía por un complejo fuertemente institucionalizado que incluía partido, sindicatos, ramas, escuelas, clubes, servicios, bibliotecas, y que a principios del siglo 20 ya habían sido monopolizados por dirigentes apolíticos que avanzaron posteriormente hacia su estatización. Al modelo de partidos apolíticos estatizados se opuso el modelo anarcolibertario, una red de individuos vinculados federativamente que reemplazaría al capital y al Estado por medio de la acción directa pero que colapsó al rehusarse al paso por la fase intermedia de la representación para llegar, finalmente, a la etapa de la deliberación directa (en nuestra jerga) coincidente con su ideario originario. Persistieron, en cambio, en una unanimidad forzada, que evitó el burocratismo y el encuadramiento pero al precio de una vulnerabilidad que llevó a la muerte y a la cárcel a sus militantes.

La ausencia de un mandato, que es síntoma del ascenso de los costos externos, es fuente de poder. Sea por este o por otros factores, los cdt ascienden por la vía de los costos externos hasta anular la diferencia entre los costos de consumir males públicos y los de producir bienes públicos. Con la constante reducción en el número de decisores respecto al universo de participantes de A, la regla representativa lleva a una competición simulada o polarizada que descolectiviza las decisiones, transformándose en un bien privado posicional que asume ese carácter en la medida que los participantes son excluidos o neutralizados o cooptados o manipulados o enfrentados entre sí, pasando los decisores a ser parte de las asimetrías que dan lugar a los males públicos que motivaron la acción, y que contribuirán a perpetuar. El poder de los decisores dentro del grupo (puede tratarse

de toda una sociedad o de una célula de vecinos), a medida que éste es ganado progresivamente por la inacción, estará en proporción al poder que puedan extraer fuera de él (del sistema o de otros grupos). Las reglas de decisión convertidas en “instituciones” otorgan a los decisores un poder cuya magnitud indica por contraposición el nivel de los costos externos alcanzados que recaerán sobre los participantes.

El traslado de la toma de decisiones por representación genera situaciones de pasividad en los representados aún cuando los representantes mantengan su “legitimidad de origen”, como en el caso ya mencionado de cogestión por parte del Sindicato de Luz y Fuerza de la Capital Federal en la empresa estatal SEGBA entre 1973 y 1976.

No existieron demandas intensas y previas de participación; ni con anterioridad ni durante su desarrollo los trabajadores adoptaron algún tipo de activismo a favor de la misma. Para el sindicato se trataba de un capítulo más en la lucha por el poder dentro del sindicalismo y dentro de una perspectiva corporativa-comunitarista ideológicamente, incapacitada para formular un proyecto hegemónico, se erigiría en responsable, garante y “dueño” de la experiencia, cuyo control mantendría hasta el final. No surgirá de la base un sujeto que cuestionara las políticas del sindicato ni conflictos intragremiales. Para el sindicato lo crucial era el control de la empresa, no los mecanismos y contenidos de la participación en ella de sus trabajadores. A través del directorio de la empresa en la que estaba representado, el sindicato introdujo paulatina y paralelamente a la estructura formal de decisión nuevas instancias que operarían como organismos de consulta, primero en los niveles superiores y luego en sucesivas etapas en niveles cada vez más bajos, y que en algún momento debería reemplazar a aquélla. “La posibilidad de formular, discutir y elevar a instancias superiores cualquier tipo de propuesta se tradujo para el conjunto de los trabajadores, según los testimonios recogidos, en una mejora inmediata en el clima de trabajo, en la medida que aparecieron nuevas oportunidades de colaboración, más amplias que las preexistentes, entre el personal y sus superiores jerárquicos. Aparentemente, a más de diez años de concluida la experiencia de participación, en la memoria de los trabajadores el recuerdo más vívido consiste en las mejoras de las condiciones –sociales antes que materiales– de trabajo. Otro tipo de cuestiones (democratización de las relaciones laborales, descentralización decisional, mayor identificación con la empresa, aumento de productividad), siempre según la percepción de los trabajadores, no parece haber experimentado cambios significativos a lo largo de los tres años de gestión sindical... el control sindical sobre los mecanismos de participación fijaba necesariamente un techo a su profundización, ya que el sindicato no estaba dispuesto –ni existían condiciones que lo forzaran– a redimensionar su intervención en la gestión de la empresa; en consecuencia ejercía un virtual poder de veto sobre las decisiones adoptadas en los organismos de participación... la restricción sobre un control efectivo en la toma de decisiones –que la centralización representaba para cada trabajador– guarda semejanzas con la falta de control efectivo por parte de los trabajadores que caracteriza al sistema yugoslavo, con un agravante para el caso argentino: la ausencia de una asamblea soberana que por encima del comité de autogestión, constituyera la máxima instancia... en el caso de Segba, la organización del SLYF no parece diferir significativamente de la del resto de sindicatos en ese entonces: alta centralización, prolongada permanencia de los dirigentes en sus cargos, sistemas de promoción intrasindical sometidos a un estricto control por parte de los

estratos superiores... aún aceptando la inevitabilidad de los procesos de burocratización en una organización compleja como es la de los sindicatos e, incluso, reconociendo el elevado grado de legitimidad que ostentaba la cúpula del SLYF frente a sus afiliados, no cabe menos que señalar que precisamente la posibilidad de desarrollar estructuras de participación paralelas e independientes del sindicato habría constituido el mejor contrapeso para una estructura sindical muy centralizada, y que su ausencia es un indicador del bajo nivel de influencia de los trabajadores sobre sus representantes... Esos mecanismos de participación no decisional en la medida que eran presentados como formas de autogestión por el sindicato, incluían un importante componente de pseudo-participación". (Graciano, 1989).

El problema de la representación no es que las preferencias se resistan a ser agregadas o agrupadas en un conjunto de alternativas políticas sino en que es ineficaz como mecanismo para la transformación de las preferencias y para la conversión de éstas en alternativas. Aunque existiera una representación perfecta de las opiniones e intereses de los representados, y que éstos la consideraran expresión auténtica y actualizada de sus políticas públicas preferidas, los representantes nunca podrían representar ni representarse el plazo que sus representados están dispuestos a conceder para que tales políticas fuesen llevadas a término. Una "política de la presencia", más que una estrategia reformista que deje de lado la redistribución de los recursos sociales para centrarse en los mecanismos de inclusión política, tendría que consistir en la incorporación de los afectados en tanto son los únicos que pueden acordar el tiempo que justificadamente pueden todavía tolerar desigualdades o arbitrariedades contra ellos hasta su remoción. No alcanza con mejoras en los sistemas representativos, ningún cambio en ese sentido podrá cargar con la producción de confianza.

Si bajo la unanimidad los tiempos se acortan a medida que suman nuevos participantes bajo la representación los tiempos son usurpados. "Con sus referencias al tiempo para hacer y no hacer ciertas cosas, los políticos apelan implícitamente a imágenes; evocan, por ejemplo, la irreversibilidad o fatalidad de cosas que están más allá de nuestro control –y por lo tanto más allá del alcance de la deliberación o del debate político. Pero estas imágenes implícitas son deshonestas, dan pistas falsas, porque nunca aclaran las fuentes de la presunta irreversibilidad o fatalidad; son manipuladoras porque inducen fácilmente a sus seguidores a abandonar sus demandas o a moverse en la dirección que quieren los líderes. La alusión sustituye al argumento, el fraude a la fuerza. No siempre es así necesariamente. Por lo general sí podemos explicar qué hace a tal momento apropiado o no para esto o aquello. Una vez que los argumentos se dan a conocer, estamos en condiciones de evaluar públicamente las afirmaciones esenciales según estándares comunes de veracidad empírica y de pertinencia lógica y sociológica. Podemos ver si las razones de oportunidad implícitas en la apelación podrían ser consideradas por nosotros mismos como buenas para la acción la inacción. Muchas veces encontraremos que sí lo son; pero con igual frecuencia se trata de frases o personas que con poca o ninguna legitimidad, a las que se otorga un innecesario poder de vetar o dictar políticas que afectan a todos... Intrínsecamente las apelaciones a nociones de 'tiempo político' cumplen su función en forma indirecta, y el éxito político de ellas reside en su carácter indirecto. Siempre se apela en apariencia a alguna otra razón, menos politizada, para la acción o la

inacción, que encubre en forma crucial la naturaleza política de la maniobra. Claro está que algunas de las maniobras son más transparentes que otras, con su naturaleza política más cerca o más lejos de la superficie. Sin embargo, plantear un asunto en términos de ‘tiempo’ para hacer –o no hacer– algo, tiene un claro propósito político: el de esconder algo, insinuar que debe ser así en lugar de explicar por qué. Por consiguiente, aunque las alusiones al tiempo pueden tener más o menos éxito en su intento manipulador práctico, la tentativa en sí me parece manipuladora en todos los casos” (Goodin, 1999:58-60). El “manejo de los tiempos” de los representantes es, efecto, la política del rebaño: ni adelantarse ni rezagarse demasiado porque en ambos casos pueden ser víctimas de la competencia de otros ventajeros.

El problema de la representación es inverso al de la unanimidad. Aquí comienzan a subir los costos externos sufridos por los participantes por estar excluidos de las decisiones, subsanado o compensado en un primer momento con la incorporación/eliminación de los ventajeros. Si bien la regla de representación limita la duración de los mandatos, no por esto descarta el riesgo de no-decisiones relevantes, o de desplazamiento de las decisiones a decisores no representativos, o de que los representantes representen mal, desvirtúen los mandatos, exploten a los representados, confronten artificiosamente, etc. En definitiva, si adoptar decisiones supone para los decisores el riesgo de ser desestabilizados, pueden conducir al colapso de la acción colectiva simulando representar mientras las no-decisiones se acumulan implosivamente o, por el contrario, polarizando la representación mientras las no-decisiones se acumulan explosivamente. El inmovilismo de los participantes que no son decisores reflejará la suba de los costos externos, por simulación cuando los participantes son desmovilizados o apartados de los conflictos, y por polarización cuando los decisores han extendido su intolerancia paralizante a los miembros de A. En ninguno de los casos se convoca a participar, sea porque los decisores han acordado no poner nada importante en juego, sea porque nos les importa destruir las reglas con tal de no quedar fuera de juego. Por simulación (las reglas de juego se acatan sólo porque los jugadores no ponen nada importante en juego) o por polarización (es demasiado lo que hay en juego como para que las respeten), la mediación pluralista fracasa. El problema en ambos casos no deriva necesariamente de la perversión de los representantes: la propia regla representativa implica un alto costo de reemplazo en razón de la conflictividad y complejidad que comporta pasar a la deliberación directa, y del que se servirán los decisores para protegerse de los participantes reactivados contra sus decisiones o contra las reglas mismas. Es decir, las dificultades para pasar a otra regla que asegure la continuidad de la acción, que equivalen a la suma $ced + crr$, costos externos de decisión más costos de reemplazo de la regla, son una fuente de poder para que los decisores se constituyen en ventajeros o free riders.

2.3. Ejemplos latinoamericanos

Los más frecuentes históricamente son los casos de colapso por especulación o simulación. Por ejemplo, el Frente Popular de 1938 en Chile. Al decidir la derecha expulsar sus ministros del gobierno y encarar la campaña electoral independientemente, los radicales temen quedar en medio del fuego cruzado que los debilita y aceptan integrar un frente con comunistas y socialistas. Los comunistas pregonaban el frentismo desde 1935 obedeciendo

instrucciones del Comitern. Los socialistas se suman después que los sindicalistas y comunistas rechazan a su candidato. Los radicales habían participado en comisiones organizados por la oligarquía chilena a sabiendas de que los resultados eran manipulados, pero ahora contaban con algunos escaños y cargos burocráticos, y actúan como una fracción que no encuentra su lugar en el sistema y se desplaza hacia la izquierda para no perder las posiciones alcanzadas. A la izquierda se le asigna la tarea de organizar la campaña, pero el programa del Frente estaba abierto a las transacciones con la elite tradicional. Las elecciones incorporaron políticamente a la clase media urbana y contribuyó a legitimar a la izquierda, pero no se realizó en base a sectores populares potencialmente movilizables sino por medio de un juego especulativo entre los principales partidos.

Durante 1948 en Ecuador una agrupación ad hoc disuelta poco después inaugura un período democrático. Desde que se deshace el régimen juliano de 1931 la movilización velazquista es importante pero se limitó a desempeñar el papel de un movimiento electorero, paternalista y romántico, por medio del cual las fracciones liberales y conservadoras de la oligarquía pudieron neutralizar y reprimir eficazmente a los sectores populares. Por eso el relevo democrático tiene que ver con la recuperación de las exportaciones bananeras que por la presión social. El velazquismo había sido producto de una oligarquía incapaz de derimir sus conflictos sin la intermediación de otros grupos sociales. En Perú, durante 1956, el APRA se desprestigia definitivamente al apoyar la campaña de La Prensa por el retorno del estado de derecho y al entrar en coalición con la derecha (que había llevado al dictador al poder) para enfrentar al populismo odríista, basado clientelísticamente en el gasto público y en el aumento de salarios, en comicios correctamente realizados. En Colombia, el partidismo simulado se institucionaliza en 1958. Luego de la desmovilización represiva de Gomes y de Rojas Pinilla, los liberales y conservadores acuerdan mediante el Pacto de Sitges un condominio que se prolongó hasta 1974.

La transición de 1985 en Uruguay empieza con el plebiscito adverso de 1980 y por el cual los militares intentaron reformar la constitución. La brecha entre el gobierno y la sociedad se amplió con cada oportunidad de manifestación antiautoritaria: caceroleadas, toques de bocina, apagones, protestas barriales, marchas relámpago. En noviembre se realiza la más importante concentración, 400.000 personas, pero la movilización mantiene su ritmo ascendente durante 1984. los tres partidos legalizados más el frente Amplio había arreglado no dialogar con las fuerzas armadas sin antes no se eliminaban las proscripciones para los comicios prometidos para noviembre de 1984. Los blancos pretendían convertir el regreso de Ferreira Aldunate en un acontecimiento que forzara dicha eliminación. Si los militares detenían a su líder, su permanencia en la cárcel sería un obstáculo insalvable para cualquier negociación. Pero las movilizaciones esperadas por los blancos no tuvieron la magnitud necesaria y los restantes partidos comenzaron sus contactos con los militares, temerosos de que el pleito entre el gobierno y los blancos ocupara todo el espacio político. El Frente Amplio moderó sus posiciones y tendió a coincidir con los colorados. El gobierno aprovechó para virar e iniciar conversaciones con hasta los poco antes agentes del marxismo. El desconcierto de los blancos, la claudicación del frenteamplismo y el escepticismo de la ciudadanía provocó un cambio en el contenido

de la acción colectiva que, en adelante se centraron en reivindicaciones concretas (salarios, amnistía, censura). El acuerdo del Club Naval estableció, además de la continuidad del COSENA, que los comandantes serían propuestos al futuro Presidente, que los civiles caerían bajo fuero militar en caso de insurrección. Y agregó cláusulas secretas no desmentidas. Las elecciones se realizarían con proscripciones, presos políticos, censura de la prensa y cierre de periódicos, limitaciones a la libertad de reunión, y bajo los moldes del antiguo y desideologizado sistema partidario. Los blancos trataron de disimular su fracaso presentándose como la única alternativa al continuismo, mientras que los acuerdistas (la conducción del Frente Amplio, los colorados y el conservadorismo) reconocían pragmáticamente que al no haber vencido a las fuerzas armadas no existía otro camino que negociar con ellas.

Perú de 1980 es otro caso de representantes desmovilizadores que convierten a la democracia en una competencia simulada. En 1973 se duplican las huelgas y cuadriplica el número de trabajadores involucrados. Las organizaciones obreras y campesinas resistieron la cooptación corporativa. El gobierno no puede evitar que se expanda el espacio sindical, en el que apenas tenían cabida el PC y el APRA. El Comité Unico de Lucha, compuesto por las centrales gremiales, convoca a una huelga general en 1977 y el gobierno formaliza el cronograma electoral. En las elecciones constituyentes, en las que votó el 84% del electorado, se diluyeron las energías que se había puesto en movimiento por un pueblo que gracias al período de Velazco Alvarado, se había desligado definitivamente de la oligarquía. La Asamblea se negó a cumplir cualquier papel más allá de redactar el texto constitucional. Acción Popular no participó especulando con el fracaso de la Constituyente y aprovechar parasitariamente el espacio conquistado por las luchas populares. El PC y el APRA otorgaron a las fuerzas armadas un papel tutelar. La Izquierda Unida descendió electoralmente, abandonó el frente sindical y se dedicó a la redacción de la nueva constitución. El Apra acompañó forzosamente a las bases sindicales y recién depuró sus elementos más reaccionario una vez establecido el régimen democrático. Belaúnde, presidente elegido por Acción Popular, es obligado a nombrar jefe de cada arma al oficial más antiguo y a elegir sus ministros militares a propuesta del alto mando.

La transición brasilera de 1985 se inicia cuando el MDB gana en 16 de los 22 estados en 1974 y las municipales en 1976. El partido de oposición tolerado incorporó a líderes que habían dirigido la campaña por el voto en blanco, se benefició de las divisiones locales del oficialista Arena, y demostró que el gobierno no podría compensar en el futuro las derrotas urbanas con los votos rurales. La réplica del régimen fue el paquete de abril de 1977, que logró estabilizar la relación entre los dos partidos. Pero en 1978 cobran impulso las huelgas y los movimientos sociales. Esta vez la reacción fue la reforma de 1979 que trataban de fragmentar al sistema de partidos e impedir que los movimientos se articularan al MDB. Este no pudo, finalmente, controlar los intereses electoralistas ni sublimarlos en nombre de la oposición en su conjunto. Al surgir el PP de Tancredo como auxiliar del oficialismo y los trabalismos de Brizola y Vargas, el MDB perdió gran parte de sus legisladores. Por los resquicios del aparato represivo se filtraron el mayor número de huelgas desde 1963, y Figuereido paró el terrorismo de Estado a cambio de que no se investigaran los hechos. El paquete de 1981 fue aún más regresivo que los anteriores y otorgaba a los opositores apenas el derecho a perder elecciones. A pesar de todo el PMDB

gana al PDS por amplio margen y declina el partido oficial, y la cuestión política comienza a girar en torno a la sucesión presidencial y al control del Colegio electoral que el PSD aún controlaba. Las campañas “Directas ya” fue el episodio de masas más impresionante de Brasil, haciendo ver al gobierno que la imposición de un candidato haría ingobernable al país. La movilización fracturó al PSD y aceleró la transición. Pero el PMDB se apresuró a negociar con el frente Liberal y a utilizar como corredor al poder el propio instrumental de la dictadura. Sus diferencias con el PSD eran insustanciales, salvo en la fecha de las directas, y no pudo articularse con una sociedad profundamente escéptica respecto de partidos que aceptaban elecciones manipuladas de antemano, que se limitaban a administrar las crisis que le transfería el oficialismo, y que entregaban los anillos para salvar los dedos. Al aceptar la oposición partidaria transformar el régimen desde adentro alargó la transición, en un proceso de domesticación política e ideológica al modelo económico cristalizado por el autoritarismo, y de aceptación de una competencia política restringida a niveles compatibles con parámetros vigilados de cerca por las fuerzas armadas.

Otros casos de partidismo especulativo y colusivo se presentan, por ejemplo, en Colombia entre 1958-85, Chile 1938-64, Perú 1956-68, Ecuador 1948-61, Uruguay 1904-73, en los regímenes democráticos actuales en la región y las transiciones que condujeron a ellos (Colombo, 1986; 1987).

Los colapsos por polarización han sido menos frecuentes. Por ejemplo, Perú 1945-48, Brasil 1961-64, Bolivia 1952-64, Venezuela 1945-48, Costa Rica 1949, Bolivia 1982, Argentina, primero con la irrupción irigoyenista y luego con la peronista (Colombo, 1985). Pero el paradigmático ha sido Chile 1970-73.. En septiembre de 1970 la Unidad Popular, con su programa de expropiaciones y nacionalizaciones, obtuvo en Chile mayoría relativa, e imprudentemente creyó que estaba protagonizando el segundo modelo de transición al socialismo. La derecha estaba fraccionada, pero el ejército era numeroso y disciplinado, y EE.U buscó desde el vamos desestabilizarla. Los comunistas eran exageradamente prosoviéticos y a la vez abiertos a las alianzas con la burguesía. Los guevaristas del MIR pasaba de la guerrilla urbana a un partido leninista. El fracaso de las reformas del gobierno de la democracia cristiana no impidió la activación social al campo, y que se desataran fuerzas que no pudo controlar, empujando un nivel de movilización que la izquierda no hubiera podido crear. Las huelgas y tomas de tierras pasaron de 39 en 1964 a 470 en 1968, superando en 1966 el número de huelgas a las peticiones, lo que muestra en qué medida se había convertido en el método de lucha preferido. Asimismo la propia Dc había impulsado en las poblaciones suburbanas juntas de vecinos y centro de madres, etc. que se convirtieron en núcleos movilizatorios, quedando las principales ciudades cercadas por terrenos tomados. La militancia demócrata cristiana, principalmente los jóvenes, enfrentaron el hecho de que su gobierno, que había impulsado organizaciones, ahora las reprimía. Dilemas que pasaron a ser disidencias, disidencias que se tradujeron en inmovilismo gubernamental, que despertó a su vez huelgas obreras, las que pasaron de 267 en 1960 a 1215 en 1968, la mayor parte ilegales y acompañadas de tomas e fábricas. Contagiados también se sumaron los estatales. El sector estudiantil, que había sido uno de los pilares de la Dc, inició un movimiento de reforma más allá de la iniciativa oficial y un desprendimiento de los mismos creó el MIR, un movimiento de guerrilla urbana.

Asimismo, en 1968 una fracción de izquierda de la Dc se apartó para fundar el MAPU (Movimiento de acción popular unitaria) que pasaría a formar parte de la UP en gestación. En octubre de 1969 un grupo de oficiales se atrincheró para protestar por motivos “profesionales”, pero como si tratara de un intento de golpe de estado Frei llamó a paralizar el país en defensa de la democracia, y el PC, el PS y la CUT hicieron llamamientos parecidos. Frei, en lugar de detener la acción con las propias fuerzas armadas apeló a una movilización que, respecto a otras demandas tan democráticas como la de defender la legalidad, había reprimido.

Para impedir a Allende la llegada al gobierno bastaba un mecanismo legal: al no obtener mayoría absoluta, el Congreso podía elegir entre las dos primeras minorías, y para ello bastaba que los diputados de la Dc votaran por el candidato de la derecha. Pero el gobierno hubiera sido ilegítimo. La derecha hizo la oferta a la Dc de que Alessandri no aceptaría la designación en caso de ser elegido por el Congreso, con lo cual constitucionalmente debían convocarse nuevas elecciones. Pero la Dc corría el riesgo de dividirse si se aliaba a la derecha. En paralelo, se preparaba una conspiración cívico-militar (militares, banqueros, funcionarios judiciales, ministros, etc.) responsable el asesinato del general Schneider en octubre de 1970, que se propuso provocar al ejército y obligarlo a intervenir políticamente, al mismo tiempo que la Dc obligaba a la UP, que había ganado legalmente, que participaba históricamente en el Parlamento y cuyo programa establecía proteger a la Constitución vigente, a una insultante firma de un documento (“De las garantías Constitucionales”) que sería firmado por Allende a cambio de sus votos en el Congreso para ser electo presidente. En abril de 1971 la izquierda obtuvo en las elecciones municipales el 50%, el más alto porcentaje de su historia, contra el 27% de la DC y 20% del PN, fusión de liberales y conservadores. Este último mantenía vinculaciones con la derecha fascista Patria y Libertad que organizaba atentados para desestabilizar al gobierno, crear la imagen de ingobernabilidad y obligar a los militares a intervenir. Mientras tanto, la Dc esperaba acorralar a la UP en el Parlamento. Buscó limitar legalmente la posibilidad de realizar expropiaciones y nacionalizaciones; propuso demagógicamente crear “empresas de trabajadores”, algo en lo que no creía; concertó alianzas electorales con la derecha hasta obtener algunas victorias. Pero si bien tuvo al principio la iniciativa desde el parlamento, la perdió en las calles en manos de la derecha que desencadenó movilizaciones de estudiantes y mujeres acomodados, de modo que en lugar de convertir al Parlamento en el lugar de la oposición lo convirtió en una especie de oficial notarial de la contrarrevolución, con la intervención y financiamiento de Estados Unidos.

Los partidos de la UP entendían a esta como la fuerza revolucionaria que a través del gobierno ocuparía al Estado burgués para crear las condiciones de la transición al socialismo, pese a que siempre habían pertenecido a y permanecido en ese Estado burgués. El PC representaba sectores obreros, y el PS a sectores medios y subalternos por medio de mecanismos populistas informales, pero se impusieron tendencias vanguardistas de partidos de cuadros, lo que alteró su naturaleza, ya que a la vez mantuvo sus prácticas parlamentarias y electorales. Con la ideología en una parte y la práctica en otra, bloquearían el diálogo con el centro político, algo que luego Allende necesitaría. Sobreideologizaban pero no movilizaron a los campesinos, y no lo hizo ni

siquiera el gobierno. La UP no era un frente popular sino una asociación de partidos parlamentarios de izquierda. Adherían a las instituciones del gobierno mezclada con la idea leninista de asalto al poder. Para reconciliar lo irreconciliable inventaron un absurdo: el poder revolucionario representado en el gobierno y el contrarrevolucionario en el parlamento. Esto suponía delegar todas las iniciativas a un movimiento de masas al que se suponía en permanente disposición revolucionaria, mientras que se sospechaba de antigubernista a toda activación más o menos autónoma, sospecha que se extendía a experiencias como la Asamblea popular de Concepción, que no surgió contra el gobierno sino como respuesta defensiva y unitaria al intento de la derecha de ocupar las calles de la ciudad y generar el caos que ya había logrado en Santiago. En mayo de 1972 la Asamblea realiza una demostración masiva pero el gobierno la desautoriza, disociando la legalidad de la iniciativa popular. Mas tarde, en junio, desautorizó también una reunión no resolutive en la que participaron en el mismo nivel que los partidos (excepto el PC) los más diversos sindicatos y asociaciones. El gobierno creía que atentaban contra su legitimidad cuando en realidad ya no toleraba ni siquiera apoyos surgidos espontánea y autónomamente. El apoyo popular que tenía el gobierno no debía expresarse sino en manifestaciones preparadas, dirigidas y manipuladas. Por supuesto, la derecha para entonces ya no se dejaba impresionar.

El programa económico, aparte de la nacionalización del cobre, aprobada hasta por la oposición, era de corte keynesiano. La clase industrial nacional dinámica, moderna, y productivista que se convertiría en aliada antiimperialista del proletariado solo existía en la imaginación de la UP. Se desataría, en cambio, una inflación con fatales consecuencias políticas. La clase obrera era dividida por el programa a través de tres áreas de la economía, estatal, mixta y privada, ya que en teoría durante el gobierno quedaría asegurada la hegemonía del área estatal, pues allí estarían todas las empresas consideradas estratégicas. Los trabajadores del área estatal eran favorecidos con mejores condiciones de trabajo e ingresos en relación al área privada, con lo cual el 60% no eran beneficiados por el programa, no quedando otra posibilidad para éstos que recurrir a las movilizaciones, y al gobierno ninguna otra que la de descalificarlas, o apoyarlas pero transgrediendo su propio programa.

En el campo ocurrían hechos similares. Los trabajadores agrarios excluidos del sector “reformado” (bajo las 80 hectáreas) no se resignaron e iniciaron por cuenta propia la ocupación de latifundios mediados y pequeños. Estas acciones por fuera del programa de la UP eran producidas en parte porque el propio programa los excluía como sujetos sociales, y no contemplaba ninguna política para los habitantes de poblaciones periféricas ni para los enormes contingentes de desocupados agrarios. No solo no tenía una política para los sectores medios sino que no la tenía para muchos de los sectores populares que le hubieran brindado su apoyo (alrededor de 1.700.000 personas). Mientras la UP bloqueaba las iniciativas de sus partidarios y de aliados potenciales, la derecha actuaba fuera de la legalidad organizando bandas armadas (las Proteco) que propagaban el terror (explosiones, incendios, atentados), que la justicia declaraba inocentes, a la vez destituía todas las semanas a intendentes o gobernadores o ministros, a fin de demostrar la ingobernabilidad reinante. Desde 1972 llamó abiertamente al golpe. El poder corporativo de empresarios y profesionales convocaron a una huelga en octubre de 1972, conducidos

por los grupos más poderosos y extranjerizados, pero jugando un papel decisivo los pequeños y medianos empresarios de todas las actividades junto a mujeres y jóvenes de clase media. Antes del paro patronal dirigentes de la derecha y de la Dc declararon que el gobierno se había puesto fuera de la ley, pero subestimaron el apoyo que los obreros aun daban al gobierno, y que el hecho de que los empresarios fueran los convocantes los uniera aún más. De la movilización defensiva de los trabajadores surgieron las juntas de abastecimiento y precios, orientadas a ejercer el control popular sobre productos de consumo inmediato, y que fueron instrumentos de lucha cotidiana, y mostró la necesidad de organismos territoriales, alternativos a los antiguos burocráticos y cupulares. El paro fracasó también por las vacilaciones de la Dc que esperaba ganar las elecciones de marzo de 1973. Pero poco después Allende integró a militares a funciones de gobierno, que en lugar de fortalecerlo legitimaba a los militares. La Dc promovió una ley gracias a la cual estos quedaron facultados para detener personas, allanar lugares para buscar armas, gracias a la cual salieron a las calles, allanaron locales sindicales partidarios de la UP y torturaron a sus prisioneros. La derecha no tenía expectativas electorales, de manera que delegó la iniciativa en los militares golpistas. En las elecciones la UP mantuvo el 44%, y al día siguiente de las elecciones la derecha mandó sus comandos estudiantiles contra la reforma educativa de la UP, que era la continuación de la iniciada por la DC e inspirada en la UNESCO. Los escolares ocuparon las calles, hicieron barricadas y provocaron incendios, y el gobierno debió retirar su proyecto.

El golpe mas duro provendría, sin embargo, de sus bases, el movimiento de los obreros del cobre. La huelga estalló en abril de 1973, inicialmente apoyada por el Ps y el PC; las peticiones no eran desmedidas pero eran inviables dado que otros sectores inmediatamente hubiesen exigido lo mismo. Los empresarios habían sancionado los aumentos de salarios por medio de la inflación y de la especulación, con lo cual la distribución del ingreso era más regresiva. Los mineros hicieron, en consecuencia, lo que siempre habían hecho, presionar al Estado. Llevaron a cabo la movilización más combativa durante el gobierno de la UP contra su propio gobierno. El PC y el PS ordenaron a sus militantes retirarse de la huelga, pero al retirarse privaban al movimiento de la posibilidad de que fuera dirigido contra la derecha. Por si fuera poco violaron un acuerdo permanente entre los trabajadores: siempre que una mina del cobre fuese a la huelga las otras debían apoyarla. En una votación (5000 obreros) del mineral de Chuquicamata fue aprobada una moción de la UP de no apoyar la huelga de El Teniente, por un margen de 100 votos, logrando lo que no había conseguido la derecha: dividir a los trabajadores políticamente. Así como en octubre de 1972 el golpismo fue bloqueado por la unidad de los trabajadores, en abril de 1973 se abrió una fisura entre estos y el gobierno, y aprovechando estas divisiones los jefes militares se negaron a reprimir las acciones armadas de la derecha.

Mientras los obreros de El Teniente se movilizaban contra el gobierno en otras empresas los trabajadores se movilizaban en contra de los empresarios buscando el apoyo del gobierno. Entre los sectores populares surgían organizaciones autónomas ("cordones", "consejos" "comandos" "asambleas", "comités coordinadores") que a veces eran entendidos como prolongaciones de la CUT y a veces como "órganos alternativos de poder popular"; no obstante, los dirigentes de la CUT en junio del 73 ya advertían que los trabajadores de la UP se sentían totalmente divididos y desmoralizados. A pesar de que

había un terreno para el acuerdo entre el sector populista de la DC y la UP (la nacionalización del cobre, por ejemplo) la difusividad y retórica del ideologismo quebraba sistemáticamente acuerdos sobre temas concretos. La UP no percibía a la DC como una coalición heterogénea y contradictoria sino en bloque, como representante de la clase dominante. Trató no obstante de dividirla de acuerdo a los clivajes de clase, desconociendo hasta qué punto gravitan las identidades. Con su discurso, además, tendía más a aglutinar a sus adversarios que a sus aliados. Contaba con poder movilizador pero no creó canales de participación ni dio cuenta de la diversidad del movimiento popular, de los sectores medios, y de los mecanismos de representación. Daba por descontada la flexibilidad del sistema para absorber los cambios, y en base a una visión institucionalista creyó que con ganar elecciones bastaría para legitimar las transformaciones. Así, desde mediados de 1972 quedó a la defensiva y la lucha de clases quedó librada a su propia dinámica, con una sociedad que se desligaba progresivamente de sus partidos. Debatiéndose entre avanzar sin negociar o consolidar para avanzar, incapaz de encauzar la revolución y de reprimir la contrarrevolución, adoptó una actitud defensiva, y la movilización inducida la utilizó solo en coyunturas críticas, como en el paro patronal de octubre de 1972 o el tancazo de junio de 1973. El campo popular carecía de estructuras participativas, como las que contaban los obreros organizados en el área de propiedad social, y aunque la UP reconocía que necesitaba de los sectores medios consideraba que su incorporación era un problema de distribución de ingresos. Dicho sea de paso, los comerciantes nunca ganaron tanto ni nunca tuvieron un antagonismo tan encarnizado. Los partidos de clase media no fueron capaces por su parte de incorporar a los nuevos contingentes que había surgido con la modernización de los 60, y que entre 1970-1973 tampoco tuvieron acceso a la administración pública.

Finalmente, la transacción entre DC y UP que podría salvar al sistema se vuelve innecesaria desde el momento que el gobierno resuelve cambios por la vía de decretos, al margen del control parlamentario, impidiendo a la fracción populista de la DC intervenir y comprometerse con los mismos. Los extremos de cada partido malogran los acercamientos entre el allendismo y Tomic, quien perdía autoridad ante Frei, y cada intento de acuerdo era sabotado por el consignismo de ambas partes y debilitaba aún más a los moderados. El acuerdo de 7 puntos en 1972 fue sabotado por la DC, presionada por el electoralismo y a la espera de un desenlace gaullista de la crisis. Las elecciones de 1973 reflejaron la polarización: 42% la UP y 56% para la CODE, ambas convertidas en federaciones que pretendían no dejar escapar un solo voto que favoreciera al enemigo principal. Luego, mientras el PN apuntaba a una declaración de inconstitucional y la DC a otra de interdicción, la UP abrió nuevos frentes de lucha, como el mencionado proyecto educativo.

3. Fase de la deliberación directa

3.1. La difícil conciliación

En consecuencia, si la acción colectiva en su segunda fase puede colapsar por simulación o por polarización ¿qué permitirá a A perdurar o extenderla hasta t_9 ? Téngase presente que en w se hallan incorporados ciertamente los costos que supone conseguir aliados y mantener el enfrentamiento con el sistema, y que A puede dar por concluida su acción en t_6 admitiendo una realización parcial de los bienes públicos demandados originariamente. Pero A puede apostar intransigentemente a su totalidad y enfrentarse al rechazo innegociable de las ofertas propuestas por los restantes actores del sistema. Obtenerlos supondrá, en consecuencia, tener que proponerse el cambio de las reglas del sistema (y no ya sólo a las propias del agente A para persistir en su acción), lo que quiere decir que A deberá afrontar costos adicionales que se sumarán a los de producir el bien, w . Al llegar a t_6 A ya ha advertido que los decisores sabotearán del modo que sea la continuidad de su acción, la que a su vez viene ya comprometida por el ascenso de sus costos externos. Una explicación de por qué hay situaciones en las que al contrario disminuyen los costos de sustitución, que arrastra hacia abajo los costos de producir un bien público es la de Skocpol (1984): las revoluciones se producen cuando concurren dos condiciones: a) el Estado, al debilitarse por conflictos con otros estados, pierde su capacidad para mantener el orden y la ley, y b) las elites dominantes no tienen el poder necesario para restaurar el statu quo previo pero sí el suficiente para obstruir al gobierno. La impotencia política, combinada con el obstruccionismo, genera una aversión al gobierno que pone en marcha un alzamiento cuyo objetivo será transformar el orden vigente.

La exigencia de ingresar a la fase final por el ascenso de los costos externos que amenazan con el colapso de su acción obligarán a A a reemplazar a la mayoría representativa por la deliberación directa entre sus miembros, regla por la cual en simultáneo rebaja los costos externos manteniéndose controlado los internos, dando lugar a un nuevo cambio en los componentes y magnitudes del cálculo. El sistema se atrincherará en las reglas vigentes e impondrá a A un costo de sustitución (csr), que puede traducirse en un deterioro constante de las condiciones de vida de A, hasta sobrepasar incluso el nivel de z . A ha ingresado al “valle de transición” de Przeworski. Por eso, en su cálculo debe constar que el $w + csr - z$ debe resultar en una ddc aún inferior a los cdt .

Si A decide avanzar hacia la regla deliberativa con el objeto de morigerar los costos externos de la representación sin incurrir en los costos internos de la unanimidad, debe tener en cuenta que además gravitarán los crr , costos de reemplazo de la regla mayoritaria por la deliberativa al interior del agente, y que son impuestos por los participantes que conforman la mayoría actual opuestos a suprimir las ventajas que le otorga la ley del número inherente a la aplicación del principio de la mayoría y del voto. Según la regla deliberativa los decisores están conformados por la totalidad de los participantes, pero a diferencia de la fase inicial interioriza el principio mayoritario, y a diferencia de la fase intermedia subordina éste principio a la participación reflexiva de todos los afectados en la búsqueda de la mejor decisión. En esta fase, además, los costos de producción de bienes públicos w incluye, como se dijo, el de instaurar las reglas de un nuevo sistema, de manera

que el cálculo en la etapa final se complica: $ddc = (w + csr + crr) - z$. Y, nuevamente, para que la acción colectiva sea viable A debe haber estimado que $cdi > cdt < ddc$.

Quiere decir que en esta etapa la acción reasume la autonomía y disrupción característica de la fase inicial y el carácter pacificador de la fase intermedia, y se las arregla para preservarlos conjuntamente mediante una mayor autoaplicación de los principios universalistas y procedimentalistas en las que se fundan, respectivamente, tales características. Así, la acción colectiva aumenta su potencial democrático por efecto del descenso de los costos internos y externos a la toma de decisiones y adquiere un carácter revolucionario. Si, por el contrario, los cdt superaran a la ddc y a los cdi , expresarían la imposibilidad temporal de llevar a cabo la acción en razón de que ésta implicaría consumir más tiempo del que proporciona.

Si el colapso en la fase inicial acaecía porque la movilización se tornaba antipluralista, y en la intermedia porque el pluralismo se volvía desmovilizador, en la final se asocia a las patologías de la deliberación, aunque ninguna de estas representa un cuestionamiento de fondo: disociación de la situación real con la agenda de necesidades, manipulación de lo posible, demostración de una idea que no es la debatida, usar como prueba lo que hay que probar, reemplazar argumentos que no se tienen por los dichos de alguien supuestamente prestigioso, obligar a un oponente a aceptar una opinión pretendiendo de que ésta se basa en afirmaciones suyas, etc. Se trata, más bien, de falacias solamente enmendables por la propia deliberación y no con su reemplazo. Sin deliberación interna la acción reflejará solo los resultados de un acceso diferencial a la información, es decir, de relaciones de poder.

La derecha se fortalece, precisamente, en la ausencia de deliberación, y, por ende, en el aplazamiento de las desigualdades (hacia un futuro siempre indeterminado). Tomemos el ejemplo de una política tributaria ligeramente progresiva para solventar una política de gasto público moderadamente redistributivo. En principio cabría pensar que los ricos y poderosos se opondrán porque exige demasiado y que los pobres y débiles se opondrán porque exige demasiado poco. Pero los primeros, relativamente bien informados podrían avalarla, pues podrían tener muy claro cuánto evitan perder o cuánto podrían haber perdido con una política que removiera las causas de la inequidad, y los segundos, relativamente mal informados, también pueden respaldarla porque no tienen cómo saber cuanto ganarían con una política que los hiciera menos dependientes del Estado y de la propiedad. Es decir, el diferente acceso a la información en torno a políticas alternativas puede llevarlos, desde sus propias percepciones, a las mismas políticas que petrifican el statu quo. Mediante la deliberación, en cambio, la confianza se alimenta de la misma información y sustituye mientras tanto a la que resulta inaccesible sin dejar por ello de conminar a una solución, de justificar una situación de desigualdad “por un tiempo” determinado.

El aplazamiento de la abolición del racismo en las escuelas, dispuesto por la Suprema Corte de EE.UU por medio del artilugio de abolirlo “con toda la precavida rapidez”, tenía por objeto darles a las escuelas sureñas la oportunidad de adaptarse gradual y arbitrariamente. El proceso se prolongó inexcusablemente, como en todos los planos de las relaciones raciales, y llevaron a las marchas en las capitales estatales demandando “¡libertad ya!” Finalmente, fue el nivel de movilización lo que permitió a Martín Luther King hacer efectiva una política de emplazamiento: “No es el momento de darnos el lujo

de serenarnos o de tomar la droga tranquilizante del gradualismo...Ahora es el momento de abrir la oportunidad a todos los hijos de Dios... Ahora es el momento de hacer realidad la promesa de la democracia. Ahora es el momento de surgir del oscuro y desolado valle de la segregación hacia la soleada senda de la justicia social..."(subrayado nuestro).

El elemento para justipreciar los resultados de la acción colectiva, no es la magnitud de la transferencia de poder operada (como propugnan Tilly, 1993 o Aya, 1997), sino las reglas y la congruencia con ellas las que garantizan su continuidad temporal y, por ende, del potencial democrático necesario para llegar a sus objetivos (Colombo, 2002). Algo que resulta por completo antagónico con la creencia que la derecha mantuvo históricamente acerca de las revoluciones: un acto de máxima irracionalidad, de ausencia de todo cálculo político, y de pasión descontrolada contra la razón. Cuanto más una acción se aplique a sí misma los principios normativos mencionados al comienzo, menos dependerá de los componentes del cálculo distintos a los costos decisionales; dicho de otro modo, mayor posibilidad tendrá de manipular a éstos últimos para promover cambios que sean irreversibles (no puedan ser revertidos por sus oponentes), incrementales (un cambio prepara las condiciones para realizar otros cambios), progresivos (los cambios mantienen la dirección y el sentido decidido), y acumulativos (los cambios se refuerzan unos con otros). No obstante debe recordarse que la deliberación se basa en la reciprocidad, la que no se desarrolla espontáneamente salvo sobre la base limitada de un grupo con posibilidades de contacto personal constante. Más allá de esta frontera supone, nada menos, que la institucionalización de formas complejas y reflexivas de interacción, concientemente diseñada en función de la calidad de las decisiones.

Hay experiencias de acción colectiva que, independientemente de su brevedad, han alcanzado esta etapa de la deliberación directa tales como las que se resumen a continuación, y si bien algunas de ellas han desaparecido o fracasado, son demostrativas de esos componentes de complejidad y reflexividad, cualitativamente diferentes a los de las etapas anteriores: la "guerra del agua" en Cochabamba, el movimiento zapatista en México, el movimiento de los Tierra en Brasil, las luchas protagonizadas por Agustín Tosco en el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba en las décadas de 1960-70, el Cutralcazo de 1996 en la provincia de Neuquén, los verdes alemanes en la década de 1980, y la metodología del presupuesto participativo en Porto Alegre puesta en marcha por el Partido de los Trabajadores.

3.2. La guerra del agua

En el contexto privatizado y extranjerizado de los servicios públicos, luego de las derrotas sufridas durante los ochenta contra el proceso de reformas, bolivianos, el aumento en las tarifas del servicio del agua para financiar las inversiones de la empresa sin que esto significara una mejora del mismo, implicaba que la población bien podía prescindir de la transnacional. Sobre esta base surge la protesta organizada en abril de 2000, el reclamo de la empresa Aguas de Tunari, y la propuesta de autogestión de la Coordinadora de defensa del agua y la vida (Crespo, 2000). Mientras que al decretar el estado de sitio contra la resistencia el sistema partidario reconocía su artificialidad en relación a los sectores que participaban del conflicto, nuevas formas de asociación se desarrollaban en Cochabamba

(como los comités de regantes) que se articularían en la Coordinadora, expresión de polos regionales de organización que sustituyen a la COB en ese papel. Su capacidad de absorber y otorgar roles, espacio y protagonismo a todos los sectores que se iban sumando a la lucha (profesionales, campesinos, fabriles, comerciantes) y su práctica asambleísta, de ratificación popular y transparencia, fue comprendida y apreciada inmediatamente por la población. La Coordinadora nace alrededor de entidades autónomas como el Comité de defensa del agua y la economía familiar, la Federación departamental de regantes, la Central obrera departamental y la Federación de trabajadores fabriles, pero participan también en ella organizaciones vecinales, colegios de profesionales, perforadores de pozos, maestros, campesinos, coccaleros, universidad, jubilados, neomarxistas, ambientalistas, liberales, cívicos, jóvenes anarquistas. Todo lo cual indica que previo al proceso deliberativo a que dio lugar fue precedido de una experiencia pluralista de representación, a la vez que tuvo dificultades en viabilizar la negociación con el gobierno precisamente en razón de que preservaba el carácter disruptivo y autónomo de la protesta. Su sede era el ámbito donde llegaban las quejas y las denuncias con regularidad; en las entrevistas con los medios de comunicación los vecinos se relacionaban a sus voceros para manifestar apoyos y diferencias, y cotidianamente éstos asistían a asambleas barriales para escuchar y explicar en torno a los problemas del agua, concentraciones en los que los representantes dialogaban con el público. En paralelo se desarrollaba un abanico de acciones que iban desde los meeting de protesta en la plaza de armas, hasta la quema pública de facturas pasando por tomas simbólicas, concentraciones festivas, teatro y graffittis, y cerco a la Prefectura. Luego de los enfrentamientos iniciales y con las negociaciones estancadas la Coordinadora llamó a tomar pacíficamente la ciudad, pero el gobierno reprimió violentamente a los manifestantes, declarando que no los dejaría ingresar a la plaza. El pueblo cercó a los defensores armados de la plaza hasta volver insostenible su situación. La negociación recomenzó, pero la Coordinadora lanzó una consulta popular que movilizó al conjunto de la sociedad civil en torno a tres preguntas: las tarifas, contrato con Aguas del Tunari, y fuentes de agua. Con ese respaldo convocó a la “batalla final” contra la empresa y por la reforma de la ley 2.029 (que transfería el control total los recursos hídricos a los concesionarios). Toma de edificios, bloqueos, concentraciones y marchas culminaron con la orden de La Paz de arresto a todos los negociadores de la Coordinadora. A continuación el pueblo peleó cuadra por cuadra para llegar nuevamente a la plaza, y los medios de comunicación se transformaron en medios de movilización y de coordinación entre vecinos. Finalmente, unas 60.000 personas controlaron la ciudad a lo largo de una semana, sin importarles el estado de sitio y las secuelas de la represión (un muerto y decenas de heridos). Se plegaron los campesinos y en las barricadas se encontraron los marginados con los jóvenes militantes. Aunque el gobierno central insistía en que no negociaría con la Coordinadora, arguyendo que legalmente no existía, concedió todo lo que ésta pedía menos el levantamiento del estado de sitio: el retiro de la empresa, la liberación de detenidos, la atención de los heridos, la reformulación de la ley. Una delegación de la Coordinadora partió a La Paz y en pocas horas el Congreso aprobó una ley modificatoria, además de la entrega de la administración del agua a la comunidad.

3.3. La autonomía zapatista

Los zapatistas enlazaron democracia con autonomía indígena y a la hora de las negociaciones con el gobierno mexicano expresaron su deseo que los asesores y organizaciones invitadas, desde sus respectivas experiencias y perspectivas, contribuyeran a conformar las posiciones zapatistas, admitían que tenía sus propias experiencias y opiniones pero no una propuesta acabada y que en todo caso no pretendían que una propuesta suya se llevara a la mesa de negociación (Díaz-Polanco, 1997). El mensaje era que asesores e invitados no fuesen meros operadores maquinales, y el efecto fue positivo: el conjunto de representantes zapatistas desplegó una energía creativa y una voluntad de definir convergencias concretas hasta el punto de que de inmediato quedó patente que la representación zapatista traía una elaborada y compleja propuesta sobre la problemática étnica-nacional del país, un diagnóstico preciso de las regiones, y una acabada propuesta de régimen autónomo. Todo lo cual ubicó a los representantes gubernamentales a la defensiva y que ante el desconcierto de la delegación oficial sus propios asesores e invitados indígenas retomaran la crítica y las reivindicaciones zapatistas. “Esta experiencia tendría repercusiones en el comportamiento gubernamental durante la siguiente mesa. Aleccionado por la incómoda situación en que se vio envuelto en la primera mesa, en la segunda (‘democracia y justicia’), celebrada unas semanas después, el gobierno decidió no llevar invitados y asesores de la ‘sociedad civil’ que pudieran comprometerlo. Incluso se fue al extremo: la delegación oficial en pleno guardó silencio durante las dos primeras fases, convirtiendo el diálogo en un deplorable monólogo. Con esta actitud, el gobierno puso en grave crisis la negociación” (Díaz-Polanco, 1997:189). Entre los mayores logros del EZLN fue el consenso alcanzado por el cuerpo de representantes zapatistas en torno a una detallada propuesta de autonomía además de convertir al diálogo en una tribuna para que las expresiones de la sociedad civil debatieran los problemas nacionales y buscaran acuerdos.

3.4. Los Sin Tierra

Por su parte, el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil (MST)(Llusia, 1997; Rocchietti, 2001) desarrolla luchas profundamente conflictivas y a la vez, profundamente democráticas. Primero organiza un grupo de familias que reclaman tierras y que están dispuestas a pelear por ello. Después los reclamos son llevados ante las autoridades, concurriendo los agricultores a negociar en grandes grupos. Recogen punto por punto las promesas oficiales y al cabo de un tiempo vuelven a la carga de nuevo con las promesas incumplidas. Para obligar al cumplimiento o para seguir con la negociación se pasa a otros medios de acción: marchas, concentraciones, acampadas, ocupaciones de edificios públicos, corte de carreteras, hasta llegar a la más dura: la ocupación de una tierra determinada. Tanto las acampadas como las ocupaciones son preparadas a través de varias reuniones: para la elección de la propiedad o lugar de la acampada, para la infraestructura y organización de lo que es un campamento, para la vida en común que supone un campamento de ocupación o una acampada permanente (durante el año 2000 había 42000 familias acampadas en 22 Estados (de 26) en que el MST tiene presencia), pese a las represión policial y militar y de las organizaciones armadas de los latifundistas. En

paralelo, el MST ha creado un sistema de cooperativas que agrupa a los asentados y con el que en parte se autofinancia (Llusia, 2000). “El MST otorga valor fundacional al campamento como experiencia porque él es tiempo de vida (la espera, la duración) carece de alienación en la medida que genera más vida. Es una duración autoconstituida y autodeterminada, realizada a través de una moral productiva emancipada de la tensión entre la cantidad y el tiempo libre de vida... La paradoja es que el campamento consiste en un acontecimiento (histórico) pero, a la vez, es una experiencia transhistórica: un campamento contiene a todos los otros campamentos de la territorialización del MST. Comienza –como atestiguan los protagonistas- con una experiencia subjetiva y objetiva intransferible (para muchos de los ahora asentados, casi irreplicable, increíblemente larga); la carpa materializa el mundo doméstico que se hace heroico (lavar, preparar la comida, atender a los niños y a los enfermos, alfabetizarse, participar de las asambleas, hacerse ‘cada vez más conciente’ de que se encuentran siempre al borde de la muerte, esperando la llegada de la policía, de las tropas, de los pistoleros, del hacendado. Cuando la carpa se transforma en ‘casa’, se alcanza la primera victoria y se va desarrollando una politicidad que –según ellos definen- es democrático-socialista. El principio de realidad de este pensamiento social es seguir ocupando como derecho de sobrevivencia... En el curso de su crecimiento el MST ha impuesto nuevas categorías de análisis sobre la tierra. Se aparta de la argumentación populista, puesto que no argumenta el derecho a trabajarla sobre la base del asentamiento ancestral en ella, ni la identidad étnica, ni el derecho consuetudinario ni la reivindicación de la pertenencia a una región o a un sentimiento de arraigo construido por la experiencia de generaciones ni por las tradiciones y culturas relacionadas con la condición campesina. El derecho a la tierra para trabajarla es el derecho a la vida” (Rocchietti, 2001:111-128).

3.5. La Luz y Fuerza de Agustín Tosco

El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba aparte de logros específicamente gremiales gravitó fuertemente en movilizaciones populares que acabaron con una dictadura y dieron lugar a la transición de 1973, y lo hizo basado en demandas de contenido antiverticalista, antiburocrático, antiautoritario, antijerárquico, anticapitalista, anticoncentralista, antiviolento y antiprivatista. La razón por la cual la identidad peronista mayoritaria de sus bases sociales no bloqueó esta experiencia de conjunción -alto nivel de movilización con prácticas pluralistas internas- fue precisamente el carácter deliberativo directo que tuvo la toma de decisiones. “La participación de los afiliados en la vida interna del gremio era muy alta. Esto en parte se debía a una actitud deliberada de la Comisión Directiva que mensualmente convocaba asambleas de delegados; estos, junto con militantes de diferentes agrupaciones, constituían la ‘minoría activa’”. La combatividad del sindicato unido a la fuerte conciencia y disciplina sindical de sus bases, lo llevaba a acatar las resoluciones de la Comisión en quien confiaba, movilizándose cada vez que les era solicitado, y a participar masivamente en las elecciones para renovación de las autoridades, donde se evidenció en todo el período un alto grado de adhesión a la conducción (Gordillo 1991:173). Hacia principios de los 70 la afiliación al gremio alcanzó el 98% y “... en el período 1962-1973 la participación en las elecciones sindicales promedió el 75% de los afiliados, una cifra inusualmente alta para los sindicatos argentinos... “La

identificación de los lucifuercistas con su sindicato era también el resultado de la importancia de éste para sus vidas más allá del trabajo... De hecho (su) sede se convirtió en algo más que un edificio sindical hasta pasar a ser un punto focal de la vida de la clase obrera cordobesa, en el que afiliados de Luz y Fuerza eran atraídos de mil maneras a sus muchas actividades. Voluntarios del sindicato actuaban en comisiones que administraban una gama de programas de servicios comunitarios, entre ellos una serie semanal de películas infantiles, clases de alfabetización y un banco cooperativo con préstamos de bajo interés accesibles a los afiliados de cualquiera de los sindicatos legalmente reconocidos de la ciudad” (Brennan 1996:155-156).

Los bajos costos decisionales (internos y externos) se reflejaron en la confianza dispensada a Tosco, el que gracias a ella pudo plantear abiertamente la democratización del país y el socialismo. Y en el hecho de que no dudaran en reelegir a este autodidacta de izquierda sin partido que postulaba la necesidad de cambiar las estructuras por la vía de la articulación de los sectores populares (fue el portavoz indiscutido del movimiento de sindicatos “independientes” y pluralistas de Córdoba, el respaldo principal de la CGT de los Argentinos, y en referente moral de otras luchas como las de los metalúrgicos de Villa Constitución). La heterogeneidad del personal que nucleaba el sindicato, desde peones y obreros a empleados y especialistas, hizo que a pesar de haber sido organizado por el gobierno peronista sus dirigentes representaran desde un comienzo a distintas tendencias. Tosco, elegido secretario por primera vez en 1956, representaba a una generación de dirigentes jóvenes que había surgido alrededor de 1953, y desempeñó el cargo hasta 1975 (año en que falleció), a excepción de los períodos que estuvo detenido o perseguido, y del lapso que va de 1966 a 1968 en que Contreras –del mismo grupo que Tosco- ocupó ese cargo, a raíz de que éste rechazó en esa ocasión la posibilidad de ser reelecto.

“Indudablemente, la mayoría de los lucifuercistas del sindicato se identificaban como peronistas. No obstante, las listas partidarias de Tosco se impusieron por amplio margen en todas las elecciones posteriores (a 1957), y los trabajadores de Luz y Fuerza fueron capaces evidentemente, de conciliar su identidad peronista con el apoyo a aquél. Por otra parte, el núcleo de activistas peronistas que ambicionaban hacer una carrera sindical propia tuvo que adaptarse a la realidad de que no podía esperar ayuda desde afuera...Como sindicato de estructura federal, Luz y Fuerza tuvo una existencia relativamente autónoma, y había pocas posibilidades de desplazar a Tosco sin un profundo apoyo de las bases” (Brennan 1996:101-102). El estilo deliberativo permitió una relación interna excepcionalmente cooperativa y en general amistosa, agrega el autor, entre los activistas peronistas y no peronistas. “El líder de los peronistas de Luz y Fuerza, Sixto Cevallos, comprendió que el prestigio personal de Tosco y su reputación de negociador experto sólo aconsejaban una oposición decorosa y restringida. A lo largo de los años sesenta y principios de los setenta, los peronistas a menudo ni siquiera presentaban una lista propia, y nunca impugnaron seriamente la conducción de Tosco hasta la restauración del gobierno peronista en 1973... De todas las organizaciones obreras de la ciudad, Luz y Fuerza era la que más practicaba una democracia sindical participativa, realizando frecuentes asambleas abiertas para discutir cuestiones de importancia y votar los convenios colectivos, los llamados a la huelga y los asuntos

gremiales en general. En un sindicato que nunca llegó a contar con más de 3000 afiliados y que tenía un delegado cada veinte trabajadores, los niveles jerárquicos entre la conducción y las bases eran pocos, una situación fortalecida por la ausencia de puestos pagos y la necesidad de que todos los dirigentes, Tosco incluido, conservaran sus empleos y trabajaran la jornada completa". (Brennan 1996 :102).

La autonomía organizativa permitieron al tosquismo asumir posiciones independientes y orientar el semanario *Electrum*, como expresión izquierdista del sindicalismo.. Esta publicación y la ejemplar resolución con que Tosco enfrentó la prisión y la represión, explican en parte la disposición de los afiliados a sobrellevar las dificultades que sufrirían como consecuencia de sus compromisos políticos. El periódico "se convirtió en un foro en el cual los trabajadores de todas las categorías discutían, a menudo en términos caseros pero muy perspicaces, la naturaleza particular de los problemas energéticos del país y del papel de Córdoba en su solución, así como la relación entre los modelos nacionales de desarrollo económico y la producción de energía eléctrica. A lo largo de toda su historia, el sindicato cordobés desechó los ataques contra las deficitarias empresas públicas de energía calificándolos como inspirados políticamente. Con frecuencia señaló que esos déficit eran en general el resultado de las tarifas preferenciales otorgadas a la industria privada. En el caso de la EPEC, grandes usuarios de energía como IKA-Renault, Fiat, y productores locales de autopartes la estaban siendo, en esencia, subsidiada por el Estado. La asociación entre modelos de desarrollo económico y los problemas en su industria, y los adornos ideológicos con que se disfrazaba la búsqueda de intereses privados, eran entendidos por gran parte de la altamente calificada mano de obra de la EPEC... Entre los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba existía la percepción de que los problemas de su industria no eran meramente presupuestarios o tecnológicos, sino que formaban parte de un problema más amplio referido al carácter del desarrollo capitalista de la Argentina y a los obstáculos estructurales para la independencia energética... Los afiliados más capaces de hacer un elaborado análisis de los problemas de la industria en este aspecto eran, naturalmente, los ingenieros de la EPEC. Pero estos problemas eran de conocimiento común en el sindicato, y muchos de los críticos más claros del papel de la empresa privada en el desarrollo de la energía eléctrica eran trabajadores como Tosco, empleados en uno de los talleres de reparaciones de la EPEC o en las líneas... La experiencia concreta de la dictadura de Onganía fue el factor final que empujó a los lucifercistas de Córdoba a la vanguardia de la resistencia obrera... La tendencia hacia las huelgas políticas, en oposición a las relacionadas meramente con el trabajo, se había hecho evidente en 1964. El único gran paro de ese año fue la adhesión del sindicato a la huelga general de la CGT del 17 y 18 de diciembre. De manera similar, la huelga más importante de 1965 fue el paro de 24 horas para protestar por el asesinato de dos activistas gremiales en Buenos Aires. Después de 1966, esta tendencia se incrementó marcadamente, y el sindicato mostró una proclividad hacia las huelgas políticas que era única en el movimiento obrero cordobés y probablemente en el conjunto del país... Los trabajadores lucifercistas asumieron así un papel casi predecible en las movilizaciones de la CGTA de 1968, reuniendo apoyo no sólo en la ciudad sino en todo el interior argentino" (Brennan 1996:158-160).

Había por cierto factores estructurales que contribuyeron a la adopción de esta modalidad decisional. a) A diferencia de otros sindicatos seccionales, el de Luz y Fuerza de Córdoba

(LyFC) era una asociación de primer grado afiliada a otra de segundo (la FATLYF) y también a la CGT. Esta estructura le permitía mantener autonomía en la administración de los fondos, manejar sus propias elecciones y la aprobación de medidas de fuerza.. A lo que se agregaba también el tradicional aislamiento de los gremios cordobeses respecto a sus centrales y la resistencia a las intromisiones centralistas de Buenos Aires.. b) Luz y Fuerza era el más poderoso de los sindicatos de Córdoba, después del SMATA, de la UOM, y de los sindicatos de Fiat, por su posibilidad para controlar los cortes de energía y apagones. c) Una nueva generación de jóvenes trabajadores que empieza a cuestionar a la vieja guardia sindical y a observar críticamente la relación del peronismo con el movimiento obrero, buscando respaldo en tradiciones anarquistas, socialistas y comunistas. d) La experiencia previa de la “Resistencia peronista” cordobesa, una de las mas combativas, cuya delegación redactó los documentos de La Falda en 1957 y Huerta Grande en 1962, que fueron los programas más radicales propuestos por cualquier sector obrero. e) La organización del gremio y las cuestiones laborales salientes habían sido ya resuelto durante los años del gobierno peronista. Y EPEC como empresa estatal prestadora de un servicio público dependía de los presupuestos provinciales y nacionales, y no de sus ganancias anuales, hallándose menos amenazada por la mano de obra que las empresas privadas. Los trabajadores tuvieron un estatus privilegiado durante esos años, tanto en términos de estabilidad y oportunidades de movilidad personal como de ingresos. Esto permitía a los dirigentes ocuparse de problemas más complejos. Si bien no estaba bajo control obrero, era al menos una empresa pública en la que el sindicato tenía un papel reconocido en la planificación, y por lo tanto permeable a las necesidades de los trabajadores. f) La naturaleza del trabajo, más estable y menos agotador que en otras actividades, menos vulnerable a las fluctuaciones del mercado. Con su control sobre las contrataciones, el sindicato podía además impedir la erosión de los salarios y condiciones de trabajo. g) Luz y Fuerza era un sindicato único en una empresa única, con afiliados altamente calificados, básicamente homogéneo (sólo entre un 15 y un 20% estable realizaba trabajos no calificados). Todos los ingenieros, técnicos y personal administrativo estaban afiliados y se contaban entre sus miembros más activos. h) Los trabajadores ejercían una extraordinaria influencia en los planteles, las categorías laborales, y las asignaciones de trabajo decididas en los departamentos. Además, a empresa, habiendo apoyado financieramente a la mutual y otros programas de beneficios, hizo al sindicato menos vulnerable a las maniobras intimidatorias de la Federación nacional del sindicato.

El tipo de democracia interna, no comparable a la de otras experiencias contemporáneas en ese contexto cordobés como fueron las de los “clasistas” de Sitrac-Sitram y de los “neoclasistas” de Salamanca, generó tal confianza de los trabajadores en los tosquistas que dio a estos un amplio margen para una acción que trascendía por completo al sindicato, y en relación a la cual aquellos tenían mucho para perder y poco para ganar. Sin embargo, los tosquistas no tenían dentro del sindicato un interlocutor de la misma jerarquía moral, intelectual y política, una contraparte pluralista, con la cual pudieran establecer una relación de reciprocidad de manera tal que la confianza depositada en ellos no estuviese fundada exclusivamente en su carácter de representantes. Se requería de un diálogo interno más profundo que modificara cualitativamente el diagnóstico acerca de las posibilidades políticas de los planteos tosquistas. Se pasaba por alto o se consideraba un dato menor, por ejemplo, que por fuera del sindicato, en la escala más amplia de la

relación con otros sindicatos claves o en la propia CGT local, no rigieran las mismas reglas de juego, y que el tiempo que Tosco pasaba en la cárcel o en la clandestinidad, impidiera un regular flujo de información y de comprensión de las condiciones para la acción. No casualmente Tosco descreía de la viabilidad de la cogestión en la empresa en condiciones aún capitalistas pero no de las posibilidades de un movimiento socialista aún en condiciones autoritarias. Tampoco eran casuales su desinformación y dudas respecto a la experiencia que llevaban a cabo los clasistas, y la descoordinación con ellos en los días del Vivorazo. El cansancio que se percibía en los trabajadores hacia 1975 también ponía en evidencia ciertos errores de diagnóstico que tienen aquel origen; esto es, luchas ininterrumpidas que el tosquismo iniciaba o promovía sin medir el extraordinario esfuerzo y riesgo que implicaban. Pese a todo, su estrategia era realista: defender el pluralismo del movimiento obrero cordobés como agente de cambio, ya que la democratización tenía que preceder a cualquier participación de los trabajadores como clase en un proyecto socialista. Esto significaba proteger a Córdoba como espacio alternativo y disidente, y alentar movimientos como la CGT de los Argentinos, que socavarán el poder de los burócratas sindicales. No había ninguna alusión a la toma del poder estatal por la clase ni a la formación de un partido clasista independiente. De hecho representó quizás el mayor intento de reconciliación entre obreros y estudiantes y entre la izquierda y los obreros, que el peronismo se había encargado de enfrentar tan eficazmente, y el de mayor enfrentamiento al oportunismo pendular de Perón.

3.6. El cutralcazo

Entre el 20 y 26 de junio de 1996 los habitantes de Cutral Co y Plaza Huincul, localidades de la provincia de Neuquen, cortaron las rutas 22 y 17, espontáneamente, sin mediaciones. Una acción disruptiva y autónoma, que debió sobrellevar condiciones represivas y climáticas durísimas, y dentro de la cual la FM radio Victoria constituyó una red articuladora de enlace entre piquetes por medio de las noticias, los testimonios, y la información de los sucesos. Luchaban contra el desempleo y las condiciones de miseria impuestas por la privatización y desregulación del petróleo y del gas. El detonante fue el previsible empeoramiento de la situación con la ruptura del contrato, firmado por el gobierno anterior, que acordaba la construcción de una planta de fertilizantes con la empresa canadiense Agrium, lo que supuestamente generaría unos 1500 puestos de trabajo, pero en condiciones leoninas: cesión a la empresa de tierras, agua, energía eléctrica, regalías gasíferas, y de un yacimiento provincial de gas, más el aporte de oficial de 100 millones de dólares. El día 19 el gobernador anuncia que la provincia no está en condiciones de hacer este aporte y que llamará a una nueva licitación. Los desempleados vivían la incongruencia de enfrentarse como votantes peronistas y neoperonistas a sus propios gobiernos. Del propio relato de la jueza Gudiño de Argüelles, luego de solicitar refuerzos para reprimir, surge claramente el carácter disruptivo de la pueblada: “Yo les había empezado a explicar que había venido ahí porque había que despejar la ruta, porque era una ruta nacional, que ellos tenían todo el derecho del mundo de peticionar, pero que había otro derecho constitucional, exactamente igual que éste, que estaba violado y que era el de la libre circulación. Pero ellos me decían que no se iban a ir. Una multitud me decía. No nos vamos a ir. Entonces me dijo: esto no es un grupo, no es una fracción partidaria, no

es un gremio, acá hay un pueblo. Primera cuestión en el delito que yo estaba investigando. Segunda cuestión: cuando yo les reconocía la legitimidad de su derecho pero que la medida era ilegítima, ellos me decían: queremos trabajar. Estaban peticionando algo a lo que tenían derecho. Yo les preguntaba: ¿dónde hay un consejal? Y me respondían: no queremos a ningún político. Al único que queremos es al gobernador Sapag. El único interlocutor válido para ellos era él. Entonces pensé: no tienen representantes, están actuando por aquellos que eligieron, por ellos mismos. Me acordé de la facultad de derecho, de una figura penal que está dentro del título de sedición, que es el motín y que habla de la asamblea de los pueblos, aquel que se constituye en asamblea sin reconocer a sus representantes y pide o actúa por él Y ahí cuando pensé que estaba frente a una figura penal mayor y que no podía a través de un desalojo de una ruta, entrar jurídicamente en otra situación. Ahí fue que les dije que, ante lo que veía, era incompetente y me retiré” (Diario La mañana del sur, 28 de junio de 1996). Todo intento de introducir mediaciones o de erigirse en autoridad fueron rechazados. Un participante dice: “Había asambleas constantes. Un grupo se quedaba en la ruta y hacía una pequeña asamblea. Un piquetero se acercaba a Radio Victoria o Encuentro y decía ‘va a ver una asamblea’ y allí se mandaba la gente. Hoy parece extraño pero había 5000 y decidían. Había algo común que ya estaba, como si lo tuviéramos en la cabeza antes de juntarnos” (extraído de Tribuna abierta, 15/7/96, por Pilar Sánchez, 1997:20). Las autoridades que se hallan presentes pueden hablar, pero como cualquier vecino, y se le solicita a una larga lista de funcionarios que inicien una huelga de hambre, que sólo dos ponen en práctica. El petitorio elaborado por la dirigencia social y política local y la comisión nombrada para dirigirse a la capital a dialogar con el gobernador es rechazada e impedida de salir de la ciudad. Un vecino relata: “Cuando fue el jueves a la torre, fui por la planta de fertilizantes. Pero fui como curioso, atraído por la mayoría... El viernes, cuando se convoca a la torre yo sentí que se convocaba a los representantes de los piquetes; yo no me consideraba representante de ningún piquete, salí de mi casa con mi señora como el día anterior, normal, a escuchar lo que iban a decir pero empecé a analizar que iban a decir lo que querían decir: que la planta de fertilizantes, que esto, que aquello otro, pero no me iban a dar ninguna respuesta. Yo me encontré hablando en esa manifestación en contra de los políticos –porque les hice una crítica pública- donde les dije que no se prestaran a eso, que dejaran de lado la política y se pusieran una mano en el corazón y escucharan lo que quería el pueblo. De ahí salí convencido que la lucha tenía que ser por otra cosa, no por la planta” (Sánchez, 1997). Las caravanas de camiones y otros vehículos detenidos en la ruta eran asistidos con alimentos y otros servicios, y la mayor parte aunque disgustada al principio terminó adhiriendo. La Gendarmería, que avanza tirando agua y gases lacrimógenos, no consigue atravesar el vallado humano armado de piedras y palos. Es cuando la jueza advierte que se trata de un levantamiento popular, que movilizó a unos 35000 habitantes sobre un total de 58000, y se retira junto con las fuerzas de seguridad. Finalmente son elegidos 17 piqueteros para hablar con el gobernador en la Municipalidad y en base a un pliego de puntos que había sido elaborado a lo largo de las asambleas. El acta de acuerdo debió recorrer de nuevo los piquetes para ser refrendada. Los compromisos (reconexiones de gas y teléfonos, bolsas de alimentos, subsidios al desempleo, iniciación de obras públicas, instalación de empresas) se cumplieron parcialmente.

3.7. Los verdes alemanes

El partido verde alemán, prolongación de los nuevos movimientos sociales de las décadas de los 70 y de los 80 era, a principios de los 90, un partido ecologista de izquierdas, antiproductivista, que no asignaba ningún atributo intrínseco al desarrollo de las fuerzas productivas, y que cuestionaba radicalmente las formas partidarias tradicionales (Riechmann, 1994). Sin anclaje en instituciones extraparlíticas su base son ciudadanos, generacionalmente pertenecientes a la Oposición Extraparlamentaria y movimientos ecologistas, pacifistas, feministas, antirracistas, en cuyo electorado se hallaban sobrerrepresentados los asalariados del sector terciario expansivo de la sociedad “posindustrial”. Su ingreso a la política coincide con el debilitamiento de estos movimientos y oposiciones a partir de 1983. Pretendió ser un partido electoral y un movimiento social simultáneamente, con democracia de base. La disputa entre sus dos fracciones, los fundis y los realos, se va definiendo en la segunda mitad de los 80 a favor de los últimos, que exigían un partido más eficiente, capaz de gobernar, que dejara de lado las resistencias extraparlamentarias.

Los verdes desestabilizaron el sistema partidario alemán, abriendo la agenda de problemas pero siendo desestabilizados ellos mismos al parlamentarizarse y acomodarse al orden existente. Su experiencia demuestra las dificultades para viabilizar un partidomovimiento que concilie la democracia directa y las prácticas políticas anti-establishment con la maximización de su fuerza parlamentaria. Se integró completamente a la institucionalidad alemana, pero este no era el objetivo originario de los activistas que lo fundaron. La transición de la primera fase a la segunda de los movimientos sociales que a principios de los 80 se debilitaban, retrocedían o profesionalizaban, fue parcial. Para garantizar la continuidad de sus demandas los verdes se partidizaron exitosamente, al punto de que la magnitud alcanzada en votos y bancas fue desproporcionada en relación al número de activistas, y se convirtieron rápidamente a las prácticas parlamentarias, experimentando los efectos moderadores e integradores conocidos. En poco tiempo completó el proceso de partido movimientista radicalizado a un partido competitivo pragmático. No es que el movimiento verde se hubiera debilitado en general y por eso el partido seguía ese curso al acomodamiento, sino que él expresaba la continuidad de un movimiento a través de un cambio en sus reglas decisorias. ¿Dónde, entonces, estuvo la falla? Un partido de activistas con una extraordinaria representación parlamentaria en distintos niveles jurisdiccionales, exagerada en relación a la reducida base de afiliados activos, se encontraba en inmejorable posición para transitar a la etapa de la deliberación directa. Su propio problema casi consistía en la solución: la ampliación de la base de cooperantes en términos de deliberación, esto es, el traslado de las decisiones fundamentales acerca de las posiciones políticas y parlamentarias del partido a microasambleas deliberativas articuladas entre sí era la única alternativa para enfrentarse a los mecanismos despolitizadores que operan en las democracias capitalistas. Sin embargo, la socialdemocracia pasó a la oposición, y existía una inequívoca inclinación del electorado verde por una coalición con el SPD, y para los verdes se complicaba la idea de una estrategia disruptiva y pluralista a la vez. Es obvio que en esas condiciones, que impedían completar la transición a dicha etapa, se convirtiera en un partido que ayuda a la socialdemocracia a constituir mayorías y que las elites verdes hayan sido transformadas

por las instituciones de la RFA sin que ellas pudieran hacer algo parecido. Han revitalizado los parlamentos gracias a su eficiencia e intenso trabajo, pero la mayor parte de sus proyectos han sido rechazados.

La transición a la tercera fase no prosperó porque desde sus inicios muchos de los activistas que lo fundaron o entraron al partido lo hicieron con criterios instrumentales, como mera herramienta para alcanzar ciertos fines políticos individuales o colectivos, y las feministas que trabajaban el partido no mantenían una verdadera identificación con él. A lo que se suma la limitada tolerancia interna que demostraron las encarnizadas internas entre fracciones. Se combatían en público y proyectaron la imagen de un partido dividido, algo que se proyectó en la derrota electoral de 1990. No había tampoco predisposición a trabajar profesionalmente y en equipo. La insistencia en observar rigurosamente las normas democráticas internas en la etapa representativa-mayoritaria es signo de que se ponían trabas para avanzar hacia la fase final, constituyendo una demostración del menosprecio por la eficacia en la toma de decisiones que finalmente no podía sino neutralizar la extraordinaria riqueza de tendencias y la pluralidad ideológica que caracterizaba a los verdes. En lugar de hacer a la democracia interna más engorrosa, rutinaria y pueril, debieron dejar que las decisiones relevantes maduraran en las discusiones de la base con diseños institucionales que no consumieran tiempo innecesariamente, lo que tarde o temprano hubiera abierto mas espacio a la articulación entre oposiciones sociales y culturales con una oposición partidaria que no hubiera necesitado entonces de alianzas electorales o parlamentarias. Las base, no interesada personalmente en “hacer carrera” o en maniobras oportunistas, hubiera relativizado tanto la lucha contra el sistema como la lucha dentro del sistema y quizás habría mantenido un equilibrio entre ambas, como es característico en la tercera fase. Las condiciones para ellos en parte estaban presentes: los moderados y los radicales asumieron proyectos cualitativamente distintos y sus fuerzas estaban más o menos equilibrados, pero la base rechazaba enérgicamente una escisión en el partido.

Compromisos precarios y pragmáticos, en lugar de consensos intrapartidarios contruidos desde abajo, culminó con el retiro de casi toda la izquierda radical. Aunque los realistas verdes siguen estando a la izquierda del SPD la capacidad de esbozar un contramodelo de sociedad se ha esfumado. Resulta claro que los sectores dominantes no admiten que se socave su poder por medio de “experimentos alternativos”, y la sociedad en general tampoco a menos que estos se hagan cargo de interrogantes tales como los que plantean las reacciones probables de empresas, jueces, políticos, policías, servicios secretos, militares, legisladores etc. y de los “costos de sustitución de reglas” que impondrán. La reforma institucional del partido en 1991 es una demostración del retroceso señalado. En lugar de reemplazar métodos de democracia directa -por los que se destacaron como partido de “nuevo tipo”- por las metodologías partidistas convencionales, podrían haber rediseñado algunos de ellos en sentido deliberativo (en la toma de decisiones) y en sentido representativo (en la ejecución de las mismas). Pusieron en práctica muchos de los dispositivos de la democracia directa: direcciones colegiadas, elecciones directas, referéndum internos, participación garantizada de minorías y de categorías, controversia publicas, frecuentes asambleas, descentralización, no acumulación e cargos, rotación en direcciones y legislaturas, mandato imperativo, separación de poderes, transparencia en

los gastos, limitación de los ingresos de los funcionarios, permeabilidad de las fronteras partidarias, elaboración democrática de las listas, etc. Sin embargo, aún empleando todos los mecanismos imaginables no alcanza para constituir una democracia deliberativa, que requiere incuestionablemente de todos ellos pero con la finalidad de dar lugar a decisiones argumentativamente fundadas.

3.8. El diseño del “Presupuesto Participativo”

La práctica gubernamental de “presupuesto participativo” (PP) llevado adelante por el PT en Porto Alegre, reúne parte de las reglas deliberativas propias de la tercera fase de la acción colectiva. Se trata de un caso en el que la mayor participación pasa por una mejor deliberación. Y su viabilidad ha dependido de que se tomen en serio las decisiones tomadas por la base, esto es, de que sean respetadas y luego ejecutadas por las autoridades oficiales (Avritzer, 2000). Su eficacia ha quedado demostrada en términos de producción y redistribución de bienes públicos entre sectores y zonas de la ciudad, pero ha dependido de la tarea de contención del PT, específicamente de la paciencia invertida por los promotores de la experiencia. Estos han sido concientes de su papel de estímulo y orientación de los participantes y de que “no abandonarlos” era lo más importante. La paciencia de estos militantes y funcionarios no es exclusivamente una virtud personal, es también el resultado de una práctica política previa de autoesclarecimiento por la que ellos mismos ha podido darse tiempo para que la deliberación avance lentamente por medio de la transformación de las preferencias (lo que al principio era mera catarsis hipercrítica y cataratas de demandas, pasó a ser discusión sobre prioridades, concesiones a otras zonas y sectores, autolimitación en la asignación del gasto, percepción de las dificultades para recaudar recursos fiscales, etc.).

Es una experiencia que surge de un movimiento barrial preexistente con demandas concretas desde abajo, que ejercía presiones por controlar a la administración, y que se libera del clientelismo y de punteros locales al confluir con un partido que había llegado al gobierno y carecía de recursos públicos y de los apoyos legislativos necesarios para iniciar transformaciones. Mientras el vecinalismo abogaba por una participación movimientista, el PT lo hacía originariamente por una democracia consejista obrera. El resultado fue próximo a la democracia deliberativa, pero no fue planeado. Ambas partes han salido fortalecidas. El proceso participatorio no se consolidó hasta que las decisiones ya tomadas se tradujeron en actos de gobierno; luego, la participación en asambleas fue autorreforzante. El PP ha funcionado como instrumento de equidad en el acceso de bienes, de racionalidad presupuestaria, de información sobre necesidades y preferencias, para desactivar las viejas prácticas políticas. Y como una instancia que no acepta la neutralidad administrativa, que monitorea constantemente los resultados deliberativos con los resultados operativos, que responsabiliza a los técnicos y obliga a la rendición de cuentas, y que ha demostrado que cuanto más dominio tiene la ciudadanía sobre los aspectos técnicos de una cuestión menos se aceptan las excusas de los técnicos y las demoras administrativas. Además, ha mejorado las habilidades negociadoras de los ciudadanos, refinado sus concepciones de justicia y sus capacidades argumentativas.

Pero lo más significativo son las reglas específicas que emplea. La reglamentación del PP no es dictada por una ley municipal. Se aplica un principio de autoreglamentación por el que la sociedad realiza todos los años un ajuste crítico a través de una Comisión paritaria, conjuntamente con el gobierno. El Consejo del PP (CPP) en el que los dos representantes del Ejecutivo no tienen derecho a voto, decide finalmente las modificaciones al reglamento. Por su parte, la primera ronda de discusión del PP, desde la segunda quincena de marzo hasta la primera de junio, se realiza primero a través de asambleas abiertas en las 16 regiones en que se divide la ciudad y en cinco asambleas temáticas en las que pueden participar cualquier ciudadano. Las autoridades rinden cuentas sobre el ejercicio actual del presupuesto y presentan la información por escrito. Los participantes eligen delegados que pasan a integrar un foro que coordina las reuniones posteriores para elegir las prioridades y jerarquizar las inversiones. Por su lado las plenarias temáticas establecen lineamientos para las políticas sectoriales. Los órganos de gobierno, mientras tanto, asisten a las deliberaciones con la información necesaria y presentan propuestas. La segunda ronda empieza la primera quincena de junio y termina en la primera quincena de julio. El gobierno presenta los grandes agregados de gastos e ingresos estimados para el año siguiente y la población elige directamente, en cada región y temática, dos consejeros para ser representados en el CPP, que duran un año en su función. Son electos 32 consejeros por las regiones y 10 por las temáticas. Además, para entonces, la población ya eligió sus prioridades, con las cuales el nuevo CPP, en cogestión con el gobierno, elaborará el presupuesto y el plan de obras para el año siguiente. (Los consejeros pueden ser revocados por el foro de delegados). La población entrega en cada una de las regiones un documento con las cuatro prioridades, elegidas entre 12 áreas de política pública, con las demandas específicas en relación a cada una de las prioridades. Las cinco plenarias entregan, por su parte, las directrices de políticas sectoriales. El gabinete de planificación, al recibir las cuatro prioridades de cada región, procede a un cálculo ponderado atribuyendo un puntaje de 4 a la primera prioridad, 3 a la segunda y así sucesivamente. Sumando se llega a un ranking de las tres prioridades de las regiones que suman más puntos. Se tiene, entonces, un indicador para la planificación de recursos. También se procede al análisis sistemático de las directrices para obras y servicios entregadas por las cinco plenarias y se analizan los recursos necesarios para continuar con los planes plurianuales. Finalmente el gobierno analiza los gastos para mantener los servicios prestados y su productividad, etc. Con esta matriz presupuestaria, cada área del gobierno elabora sus respectivas propuestas. Mientras tanto al CPP se suman representantes de la Unión de asociaciones de vecinos, del Sindicato de municipales y del gobierno. En agosto, el gabinete de planificación del gobierno compatibiliza las propuestas de cada departamento con las de la población y a fines de septiembre entrega el proyecto a la legislatura, que tendrá hasta fines de noviembre para sancionarlo. Entre octubre y diciembre, el CPP y dicho gabinete, en base al proyecto enviado elaboran un plan de inversiones que, contemplando la población total de la región, las necesidades de servicios e infraestructura, y las prioridades elegidas por la región, asignará más recursos a las regiones menos dotadas.

Referencias bibliográficas

- AVRITZER, L.** (2000). *Public deliberation at the local level: participatory budgeting in Brazil*. Universidade Federal de Minas Gerais.
- AYA, R.** (1997). *Explicar la violencia revolucionaria después de Tucídides: una polémica metodológica*. Zona Abierta 80/81. Madrid.
- BAYER, O.** (1994). *La patagonia rebelde I-IV*. Editorial Planeta, buenos Aires.
- BRENNAN, J.** (1996). *El cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba, 1955-1976*. Sudamericana. Buenos Aires.
- BRENNER, R.** (1988). "Estructura de clases agraria y desarrollo económico en la Europa preindustrial", en Aston, T. y Philpin, C. (comps.), *El debate Brenner*, Crítica, Barcelona.
- COLOMBO, A.** (2002) *El tiempo en la acción colectiva*. Prometeo Libros, Buenos aires.
- (1987). *El sistema partidario venezolano, 1958-1968*. Mimeo. Buenos Aires.
 - (1986). *Esquema para el estudio de los partidos latinoamericanos*. Mimeo. Buenos Aires.
 - (1985). *Movilización y pluralismo en la Argentina contemporánea*. Centro Editor para América Latina. Buenos Aires.
- CRESPO, C.** (2000). *Continuidad y ruptura: la "guerra del agua" y los nuevos movimientos sociales en Bolivia*. Observatorio social de América Latina, 2, septiembre. CLACSO. Buenos Aires.
- DEUTSCHER, I.** (1967). *La revolución inconclusa*.
- DIAZ-POLANCO, H.** (1997). *La rebelión zapatista y la autonomía indígena*. Siglo veintiuno editores. México.
- ELSTER, J.** (1994). *Lógica y sociedad. Contradicciones y mundos posibles*. Gedisa. Barcelona.
- GERHARDS, J.** (1995). "Framing dimensions and framing strategies: constrasting ideal and real-types frames": *Social Science Information*.
- GOODIN, R.** (1999). *¿Tiempos de cambio? Los ritmos de la democracia*. Nueva Sociedad. Caracas.
- GORDILLO, M.** (2001) (ed.). *Actores, prácticas, discursos en la Córdoba combativa. Una aproximación a la cultura política de los '70 (capítulos 7 y 10)*. Ferreira editor. Córdoba.
- GRACIANO, R.** (1989). *La gestión sindical en Segba*. Centro editor de América Latina, biblioteca política 254. Buenos Aires.
- GRANOVETTER, M.** (1992). *Modelos de umbral de conducta colectiva*. Zona Abierta 54/55. Madrid.
- KLANDERMANS, B.** (1998). "La necesidad de un estudio longitudinal de la participación en movimientos sociales", en Ibarra, P. y Tejerina, B. (1998), *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural*, Trotta, Madrid.
- KURAN, T.** (1997). *Ahora o nunca: el elemento sorpresa en las revoluciones de Europa Oriental de 1989*. Zona Abierta 80/81. Madrid.
- LANZARA, G.** (1999). *Por qué es tan difícil construir las instituciones*. Desarrollo Económico. Revista de ciencias sociales, núm. 152, enero-marzo.
- LLUSIA, M.** (1997). *El MST: una fuerza con gran impacto social y político*. Cuadernos del Sur núm. 25, octubre 1997.
- MARCH, J. / OLSEN, J.** (1997). *El redescubrimiento de las instituciones*. FCE. México.
- MOORE, B.** (1991). *Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia*. Península. Barcelona.
- (1996). *La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión*. UNAM. México.

OSPINA, P. (2000). *La vuelta a un día de ochenta mundos. La revuelta indígena en Ecuador*. CLACSO, Observatorio social de América Latina. Buenos Aires.

PITTALUGA, R. (1998/99). *Reflexiones en torno a la idea de espontaneidad en Roxa Luxemburg*. El Rodaballo, año V núm. 9.

PRZEWORSKI, A. (1994). *Marxismo y elección racional*, p. 12. Doxa núm. 2, noviembre. Buenos Aires.

RIECHMANN, J. (1994). *Los verdes alemanes*. Comares. Granada.

RIVAS, A. (1998). "El análisis de marcos: una metodología para el estudio de los movimientos sociales", en Ibarra, P. y Tejerina, B. (eds.), *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural*, Editorial Trotta. Madrid.

ROCCHIETTI, A. (2001). *El Movimiento de los trabajadores sin tierra (MST) del Brasil: sus orígenes y el carácter de su lucha*. Departamento de Historia, Universidad Nacional de Río Cuarto.

SÁNCHEZ, P. (1997). *El Cutralcazo*. Agora, Buenos Aires.

SCREPANTI, E. (1985). *Ciclos económicos largos e insurrecciones proletarias recurrentes*. Zona Abierta, 34-35. Madrid.

SKOCPOL, T. (1984). *Los Estados y las revoluciones*. FCE. México.

TARROW, S. (1997). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Alianza. Madrid.

TAYLOR, M. (1990). *Racionalidad y acción colectiva revolucionaria*. Zona Abierta 54/55. Madrid.

TILLY, Ch. (1993). *Las revoluciones europeas*. Crítica. Barcelona.

BREVE HISTORIA DEL IDICSO

Los orígenes del IDICSO se remontan a 1970, cuando se crea el "Proyecto de Estudio sobre la Ciencia Latinoamericana (ECLA)" que, por una Resolución Rectoral (21/MAY/1973), adquiere rango de Instituto en 1973. Desde ese entonces y hasta 1981, se desarrolla una ininterrumpida labor de investigación, capacitación y asistencia técnica en la que se destacan: estudios acerca de la relación entre el sistema científico-tecnológico y el sector productivo, estudios acerca de la productividad de las organizaciones científicas y evaluación de proyectos, estudios sobre política y planificación científico tecnológica y estudios sobre innovación y cambio tecnológico en empresas. Las actividades de investigación en esta etapa se reflejan en la nómina de publicaciones de la "Serie ECLA" (SECLA). Este instituto pasa a depender orgánica y funcionalmente de la Facultad de Ciencias Sociales a partir del 19 de Noviembre de 1981, cambiando su denominación por la de Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) el 28 de Junio de 1982.

Los fundamentos de la creación del IDICSO se encuentran en la necesidad de:

- ❑ Desarrollar la investigación pura y aplicada en Ciencias Sociales.
- ❑ Contribuir a través de la investigación científica al conocimiento y solución de los problemas de la sociedad contemporánea.
- ❑ Favorecer la labor interdisciplinaria en el campo de las Ciencias Sociales.
- ❑ Vincular efectivamente la actividad docente con la de investigación en el ámbito de la facultad, promoviendo la formación como investigadores, tanto de docentes como de alumnos.
- ❑ Realizar actividades de investigación aplicada y de asistencia técnica que permitan establecer lazos con la comunidad.

A partir de 1983 y hasta 1987 se desarrollan actividades de investigación y extensión en relación con la temática de la integración latinoamericana como consecuencia de la incorporación al IDICSO del Instituto de Hispanoamérica perteneciente a la Universidad del Salvador. Asimismo, en este período el IDICSO desarrolló una intensa labor en la docencia de post-grado, particularmente en los Doctorados en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales que se dictan en la Facultad de Ciencias Sociales. Desde 1989 y hasta el año 2001, se suman investigaciones en otras áreas de la Sociología y la Ciencia Política que se reflejan en las series "Papeles" (SPI) e "Investigaciones" (SII) del IDICSO. Asimismo, se llevan a cabo actividades de asesoramiento y consultoría con organismos públicos y privados. Sumándose a partir del año 2003 la "Serie Documentos de Trabajo" (SDTI).

La investigación constituye un componente indispensable de la actividad universitaria. En la presente etapa, el IDICSO se propone no sólo continuar con las líneas de investigación existentes sino también incorporar otras con el propósito de dar cuenta de la diversidad disciplinaria, teórica y metodológica de la Facultad de Ciencias Sociales. En este sentido, las áreas de investigación del IDICSO constituyen ámbitos de articulación de la docencia y la investigación así como de realización de tesis de grado y post-grado. En su carácter de Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador, el IDICSO atiende asimismo demandas institucionales de organismos públicos, privados y del tercer sector en proyectos de investigación y asistencia técnica.

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DEL IDICSO

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Desarrollo Social Local y Regional | <input type="checkbox"/> Empleo y Población | <input type="checkbox"/> Historia Cultural y Social Contemp. |
| <input type="checkbox"/> Organizaciones No Gubernamentales y Políticas Públicas | <input type="checkbox"/> Relaciones Internacionales de América Latina | <input type="checkbox"/> Relaciones Internacionales de Asia Pacífico |
| <input type="checkbox"/> Sociedad, Estado y Religión en América Latina | <input type="checkbox"/> Sociología de la Salud | <input type="checkbox"/> Migraciones |

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales:
Lic. Eduardo Suárez

Director del IDICSO:
Dr. Pablo Forni

Comité Asesor del IDICSO:
Dr. Raúl Bisio
Dr. Alberto Castells
Dr. Ariel Colombo
Dr. Floreal Forni

SERIE DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL IDICSO (SDTI)
Edición y corrección: Departamento de Comunicación del IDICSO
Tel/Fax: (++5411) 4952-1403
Email: idicso@yahoo.com.ar
Sitio Web: <http://www.salvador.edu.ar/csoc/idicso>

Hipólito Yrigoyen 2441
C1089AAU Ciudad de Buenos Aires
República Argentina